



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

**La no aplicación del principio de ciudadanía universal
propugnado por la Constitución del Ecuador por vulnerar la Ley
de Migración**

Tesis previa a la obtención del Título de:
ABOGADO

AUTOR: Borja Román Rodrigo Francisco
E-mail: rodrigoborja.roman@gmail.com

TUTOR: Dr. VelaLombeidaDavid

Julio, 2014
Quito

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres,
quienes sin desmayome han sabido guiar por la senda correcta,
hasta llegar aquí, a la culminación de una etapa más en mi vida.

Siempre atentos y con mucha paciencia, ven hoy,
nuestro sueño realizado, digo nuestro, porque con este título,
extiendo la tradición de optar por esta noble carrera,
que mi familia la ha convertido en vocación,
y la lleva adherida en su seno.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a todos,
porque de todos
he aprendido algo.

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 08 de julio de 2014

Yo, BORJA ROMÁNRODRIGO FRANCISCO, autor de la investigación, con cédula de ciudadanía No.171849973-2, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de grado titulado: “LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL PROPUGNADO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR POR VULNERAR CON LA LEY DE MIGRACIÓN” es de mi plena autoría original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Borja Román', with a stylized flourish at the end.

Borja Román Rodrigo Francisco

C.I: 171849973-2

Correo: rodrigoborja.romangmail.com

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, BORJA ROMÁN RODRIGO FRANCISCO, en calidad de autor de la tesis realizada sobre “LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL PROPUGNADO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR POR VULNERAR CON LA LEY DE MIGRACIÓN”, por medio de la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito., a 08 de julio de 2014.



FIRMA _____

CC: 171849973-2

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS

DR. DAVID VELA LOMBEYDA

ABOGADO M. P. 055 BOLIVAR

PROFESOR DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Quito, 8 de julio de 2014

Señora Doctora

Yolanda Yupanqui Carrillo,

DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,

Presente.-


Señora Decana


En calidad de Tutor de la tesis **LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL PROPUGNADO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR POR VULNERAR LA LEY DE MIGRACIÓN**, elaborada por el señor **BORJA ROMÁN RODRIGO FRANCISCO**, previo a la obtención del título de **ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA**, considero que el graduando ha elaborado su trabajo con responsabilidad, cumpliendo con todos los requisitos de Titulación y epistemológicos.

Además ha cumplido con todas las sugerencias y observaciones realizadas a este trabajo por parte del tutor.

Por lo tanto la **apruebo**, debiendo continuar con el trámite administrativo correspondiente.

Atentamente,


Dr. David Vela Lombeida
TUTOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
 RECIBIDO
2014-07-10
Deta.

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación: “LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL PROPUGNADO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR POR VULNERAR CON LA LEY DE MIGRACIÓN”

Para constancia firman

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD	iv
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL	v
APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS	vi
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR	vii
TABLA DE CONTENIDOS	viii
ÍNDICE DE CUADROS	xi
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xii
RESUMEN EJECUTIVO	xiii
ABSTRACT	xiv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	3
EL PROBLEMA	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.1.1. Ubicación del problema en un contexto socio – cultural	4
1.1.2. Delimitación del problema	4
1.1.3. Formulación del problema	5
1.1.4. Evaluación del problema	5
1.1.5. Contextualización Macro	5
1.1.6. Contextualización Meso	7
1.1.7. Contextualización Micro	8
1.1.8. Árbol de Problemas	10
1.2. Objetivos	11
1.2.1. Objetivo General	11
1.2.2. Objetivos Específicos	11
1.3. Justificación	11
CAPÍTULO II	13
MARCO TEÓRICO	13
2.1. Fundamentación teórica	13
2.1.1. Antecedentes de estudio	13
2.1.1.2.1. Consideraciones constitucionales sobre ciudadanía, desde 1830 a la actualidad	33

2.1.2.	Definiciones de términos básicos	73
2.2.	Hipótesis	74
2.3.	Variables	75
2.3.2.	Variable independiente	75
2.3.3.	Variables dependientes	75
CAPÍTULO III		76
MARCO METODOLÓGICO		76
3.1.	Tipo de investigación	76
3.1.1.	Investigación bibliográfica	76
3.1.2.	Investigación de campo	76
3.2.	Población y muestra	77
3.3.	Métodos	78
3.3.1.	Método científico	78
3.3.2.	Técnicas	79
3.3.3.	Instrumentos	80
3.4.	Recolección de información	81
3.5.	Procesamiento y análisis de la información	82
CAPÍTULO IV		83
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		83
4.1.	Resultados obtenidos de la entrevista realizada	83
Conclusiones		90
Recomendaciones		92
CAPITULO V		93
PROPUESTA		93
5.1.	Justificación	93
5.2.	Objetivo	94
5.2.1.	Objetivo general	94
5.2.2.	Objetivos específicos	94
5.3.	Ubicación sectorial y física	94
5.3.1.	Mapa	95
5.4.	Beneficiarios	96
5.4.1.	Beneficiarios directos	96
5.4.2.	Beneficiarios indirectos	97
5.5.	Factibilidad	97
5.5.1.	Factibilidad interna	97
5.5.2.	Factibilidad externa	98

5.6.	Descripción de la propuesta	98
5.7.	Impactos	101
5.8.	Evaluación	101
BIBLIOGRAFÍA		102
ANEXOS		106
Anexo 1: Ley Migración		106
Anexo 2: Ley de Extranjería		116
Anexo 3: Reglamento a la Ley de Extranjería		125

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 2: Población y Muestra _____	77
Cuadro 3: Cuestionario _____	80
Cuadro 4: Plan de Recolección de Información _____	81
Cuadro 5: Conocimiento principio de ciudadanía universal _____	83
Cuadro 6: Inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución _____	84
Cuadro 7: Problemas con extranjeros _____	85
Cuadro 8: Vulneración Ley de Extranjería _____	86
Cuadro 9: Aplicabilidad en Ecuador _____	87
Cuadro 10: Necesidad de reforma constitucional _____	88
Cuadro 11 : Política Migratoria _____	89

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Árbol de Problemas_____	10
Gráfico 2: Conocimiento principio ciudadanía universal_____	83
Gráfico 3: Inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución _____	84
Gráfico 4: Problemas con extranjeros _____	85
Gráfico 5: Vulneración Ley de Extranjería _____	86
Gráfico 6: Aplicabilidad en el Ecuador _____	87
Gráfico 7: Necesidad de reforma constitucional _____	88
Gráfico 8: Política Migratoria _____	89
Gráfico 9: Posición del Ecuador en el continente Sudamericano_____	95
Gráfico 10: Mapa del Ecuador _____	96

RESUMEN EJECUTIVO

La no aplicación del principio de ciudadanía universal propugnado por la Constitución del Ecuador por vulnerar la Ley de Migración

El Estado ecuatoriano, en su Ley de Migración, establece una diferenciación clara entre personas nacionales y extranjeras, contradiciendo el principio de universalidad en la ciudadanía, es decir, si un extranjero desea obtener la ciudadanía ecuatoriana, deberá cumplir con los requisitos establecidos en nuestras leyes, y su solicitud será evaluada por un ente especializado del Estado para estudiar la posibilidad de la otorgación. Hay una clara contradicción de normas en la Constitución de 2008 y la Ley de Migración. Al entender a la “ciudadanía universal”, como un principio jurídico, que tiene su origen en una proposición abstracta, limita su aplicación futura, puesto que se basa en un hecho sociológico, propuesto por un activista político como Thomas Marshall, quien en su época, asociaba a los derechos de ciudadanía con los derechos civiles, políticos y sociales siendo derechos adherentes al ser humano en general sin necesidad que sea catalogado como ciudadano o la teoría que los estoicos planteaban, acerca de los ciudadanos del mundo, planteando a los ciudadanos deberse al ser humano y no a un gobierno constituido, desvía la real aplicabilidad de esta norma, dejando creada una premisa que nunca será aplicable, desmereciendo el sentido constitucional de una norma. Guiado por este antecedente, se analizará "LA NO APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL PROPUGNADO POR LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR POR VULNERAR LA LEY DE MIGRACIÓN", por no tener las condiciones reales para desarrollarse, es decir, un mecanismo jurídico que lo avale.

Palabras Claves:

1. Ciudadanía Universal
2. Principio Jurídico
3. Derechos y garantías
4. Constitución
5. Extranjero
6. Libre movilidad
7. Derechos Humanos

ABSTRACT

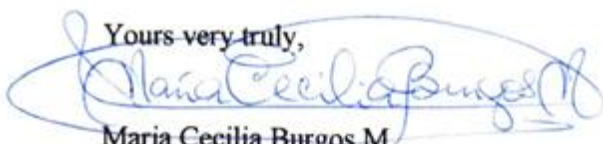
The non-application of the principle of universal citizenship advocated by the Constitution of Ecuador for violating the Immigration Act

The Ecuadorian State, in its Migration Law establishes a clear distinction between local and foreign citizens, contradicting the principle of universality of citizenship, ie, if a foreigner aims to get the Ecuadorian citizenship, must meet the requirements of our laws and his/her request will be evaluated by a specialized State agency to consider the granting. There is a clear contradiction of regulations in 2008 Constitution and the Migration Law. By understanding the "universal citizenship" as a legal principle, which has its origin in an abstract proposition, limiting their future implementation, since it is based on a sociological fact, proposed by a political activist as Thomas Marshall, who in his time, associated citizenship rights in civil, political and social rights being adherent rights claim, is generally no need to be cataloged as a citizen or the theory that the Stoics raised, about the citizens of the world, addressing to the citizens devote to the human being and not to a constituted government, diverts the applicability of this rule, leaving created a premise that never applies, diminishing the constitutional meaning of a regulation. Guided by this precedent, it will be discussed "THE NON APPLIANCE OF UNIVERSAL CITIZENSHIP ADVOCATED BY ECUADORIAN CONSTITUTION AS IT VIOLATES THE MIGRATION LAW", because of not having the actual conditions to develop, in other words, a legal mechanism to support it.

Key Words:

1. Universal Citizenship
2. Legal Principle
3. Rights and guarantees
4. Constitution
5. Foreigner
6. Free mobility
7. Human Rights

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Executive Summary of Thesis titled "The non-appliance of the Universal Citizenship advocated by the Ecuadorian Constitution as it violates the Migration Law", written by Mr. Rodrigo Francisco Borja Roman ,I.D. 1718499732 , student at Law, Political and Social Science Faculty, Law Career, Central University of Ecuador. To validate this translation process, please find attached a copy of my identification card.

Yours very truly,

Maria Cecilia Burgos M.
I.D. 1710347095
Translator

INTRODUCCIÓN

El concepto de ciudadanía estaba habitualmente definido como el vínculo político de los individuos con un Estado determinado, pero la aceptación universal de los derechos humanos fundamentales de mediados del siglo XX, junto a la tesis de Thomas Marshall, quien asociaba a los derechos de ciudadanía con los derechos civiles, políticos y sociales, sumado esto al entorno global que gracias al avance vertiginoso de la tecnología vivimos, nos ha puesto en la disyuntiva de ¿podremos llegar a ser ciudadanos universales?

La concepción tradicional de ciudadanía, se refiere al sujeto que dentro de un Estado establecido, adquiere derechos y obligaciones políticos con ese Estado, entre otros requisitos debe ser nacional de ese Estado, por nacimiento o por naturalización. El concepto de ciudadanía universal, está dispuesto para solucionar problemáticas de las personas y grupos de la sociedad planetaria, es decir, se subsanan derechos pero con un enfoque supraestatal.

Esta idea se ha visto fortalecida por el creciente desarrollo de la Tecnología, que facilita una tendencia global en las relaciones comerciales e intercambios culturales. Siendo la integración económica y política de países que se encuentran en similar condición un inicio, pero no tenemos que descuidar el pensar que países que estando geográficamente unidos, no forman parte de estas iniciativas, por su estabilidad en políticas públicas, como es el caso de la Unión Europea.

El presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo corresponde al problema, en el que consta el planteamiento, formulación y justificación del problema. En este se evidencia la contradicción que actualmente existe, en la Constitución, para la aplicación del principio de la ciudadanía universal en el que se hace una clara diferenciación entre personas nacionales y extranjeras, al punto de crear una Ley expresamente para la regulación de las personas foráneas al territorio ecuatoriano, violando el principio de libre movilidad de las personas.

En el segundo capítulo se hace un análisis del Marco teórico, en el que se describe los antecedentes de la investigación; la fundamentación teórica en el que se desarrolla los contenidos de la ciudadanía universal y del ciudadano cosmopolita y los derechos de ciudadanía, además de los preceptos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales, entre otros, desde un

abordaje de derechos y movilidad humana. También, en este acápite consta la hipótesis en la que se caracteriza las variables.

El capítulo tercero se refiere a la Metodología en el que consta: el tipo de investigación, la definición de los métodos de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información y procesamientos y análisis de la información y los resultados.

En el capítulo cuarto se encuentra el análisis e interpretación de resultados con cuadros de frecuencia, gráficos porcentuales y la exposición de las conclusiones y recomendaciones.

Finalmente, en el capítulo quinto, se explica la propuesta de la investigación haciendo referencia a los beneficiarios y las características de la misma.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.Planteamiento del problema

La realidad procesal de la norma es que en la actualidad no se ha podido aplicar un sistema jurídico que otorgue viabilidad para tener en el país a ciudadanos del mundo. Nunca se podrá imponer una obligación, que no sea sancionada por el mismo ordenamiento positivo que la estableció, sabiendo que, cada ordenamiento jurídico tiene sus particulares principios generales. Resulta, por tanto, imposible que se pueda articular a todos los ordenamientos jurídicos para lograr un sistema jurídico global, en el que las personas puedan trasladarse como nacionales y ejerzan todos los derechos que su Estado les otorga en otro.

A nivel internacional, las normas jurídico constitucionales, no hacen explícito el concepto de la ciudadanía universal, más bien están encubiertos en el marco de los derechos humanos de las personas; por tanto, el Ecuador al asumir en su Constitución este principio, se ve abocado a la aplicación de una norma jurídica inaplicable, que no tiene el correlato en otros países.

Al estudiar el concepto de ciudadanía se analizarán sus implicaciones prácticas y los argumentos que respondan a la pregunta, si es posible ser una persona “ciudadana del mundo”, sin la existencia de un “Estado Global”, ni una normativa que encierre las necesidades de todos los ordenamientos en general; o si se trata de una utopía que los legisladores adoptaron para la Constitución del Ecuador, con el fin último de cautivar a la ciudadanía y lograr su apoyo para la aprobación de la Constitución mediante referéndum, por primera vez en la historia del Ecuador.

El principio de la ciudadanía universal presenta una alternativa al concepto clásico de ciudadanía. Siendo contradictorio proponer este principio y más aún a nivel constitucional, puesto que, se vuelve inaplicable. En el artículo 416 de la Constitución de la República se explica que, “...responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores...”(Constitución del Ecuador, 2008), para lo cual tienen que aplicar la Ley de Migración y Extranjería, que se contrapone con el principio de ciudadanía universal, un ejemplo de esto, son las deportaciones a extranjeros que por diversos motivos excedieron el tiempo de permanencia que el Estado ecuatoriano les confiere.

1.1.1. Ubicación del problema en un contexto socio – cultural

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por ser amable con el turista y de hecho, es una de las actividades económicas que mayor impulso ha tenido en las últimas décadas. Debido a esto se ha visto la importancia de fortalecer el ingreso de extranjeros con deseos de hacer turismo. No obstante, la Constitución del 2008, considerada de corte garantista, propugna entre algunos de sus principios el derecho a la libre movilidad que se alinea con el principio de la ciudadanía universal, que por los momentos actuales es una completa utopía tomando en cuenta que el Ecuador no cuenta con los mecanismos económicos y sociales que supondrían el garantizar para todos aquellos que quieran conservar el estatus de ciudadanos universales el acceso a servicios básicos y demás.

Este asunto trasciende incluso el tema de la reciprocidad diplomática en cuanto a la solicitud de requisitos para el otorgamiento de visas puesto que la legislación debe proteger el bien común y propugnar la ciudadanía universal se torna irrealizable por la extrema dificultad de aplicarla cabalmente en el país.

1.1.2. Delimitación del problema

Campo:	Derecho Público
Área:	Constitucional
Aspecto:	Migración y derechos
Delimitación Espacial:	Ecuador
Delimitación Temporal:	Año 2009-2014
Unidades de observación:	Extranjeros
	Agentes de Migración
	Docentes y Estudiantes de la Universidad Central

1.1.3. Formulación del problema

¿Por qué la aplicación del principio de ciudadanía universal propugnado por la Constitución del Ecuador, vulnera la Ley de migración?

1.1.4. Evaluación del problema

En la actualidad se evidencia una gran cantidad de extranjeros ingresando libremente al país, en concordancia a la política de “puertas abiertas” propuesta por el régimen, el principio constitucional de la ciudadanía universal no ha sido invocado de manera significativa en trámites de residencia o naturalización, por el desconocimiento de las mismas garantías constitucionales establecidas en el marco de la Carta Magna, la irregularidad de ciertos extranjeros en su objetivo de permanecer indefinidamente en el Ecuador, nos ha acarreado diversos problemas como la prostitución o la inseguridad por ser ocupaciones que no demandan tener sus papeles en regla.

1.1.5. Contextualización Macro

En las legislaciones alrededor del mundo, la ciudadanía universal no ha sido contemplada dentro de la normativa, aunque evidentemente, se ha teorizado al respecto, especialmente en cuanto a las consideraciones establecidas por Thomas Marshall, quien en un aspecto sociológico ha propuesto que las personas poco a poco presionarán de tal manera a las políticas mundiales que se instaurará un sistema de reconocimiento de la ciudadanía, sin distinción del territorio de nacimiento o permanencia.

En un intento por normar ciertos aspectos relacionados con la ciudadanía universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13 establece que las personas tendrán derecho a moverse libremente dentro del propio país y dentro de otros territorios, concediéndole libertad para elegir su domicilio. Amparados en esta presunción, han surgido varias organizaciones pro – ciudadanía universal que básicamente describen el problema de la migración y la ciudadanía universal así:

[...] Hoy en día resulta necesario aplicar otro tipo de políticas migratorias, ya que los sistemas que rigen las migraciones son básicamente una prerrogativa de los Estados y, por tanto, ya no reflejan las realidades migratorias del siglo XXI, marcadas por la mundialización. Estos sistemas desprecian lo que para nosotros constituye un derecho fundamental, recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estos sistemas ratifican la existencia de una movilidad con dos categorías: los países más privilegiados ofrecen a sus ciudadanos unas posibilidades de circulación prácticamente ilimitadas, mientras que las tres cuartas partes de la humanidad no pueden escapar a una especie de arresto domiciliario de facto. Es más, ello genera unos circuitos administrativos insensatos, unas exigencias de garantías económicas desmesuradas, unas situaciones laborales asimilables a la esclavitud y una creciente criminalización de la inmigración ilegal. Los migrantes se han convertido en víctimas de la arbitrariedad y la violencia institucional y en presa fácil para las redes criminales.

De esa manera, estos prejuicios se usan como fundamento para las más irracionales políticas de cierre de las fronteras y como justificación para las violaciones sistemáticas de los derechos elementales que los tratados y convenciones internacionales reconocen a los migrantes. Resulta urgente considerar por fin la migración, con naturalidad, como un hecho social corriente, característico de los tiempos presentes y futuros, profundamente vinculado a las transformaciones mundiales, de las que es a la vez causa y consecuencia.

Invitamos a apoyar una importante iniciativa simbólica: el “pasaporte de ciudadanía universal”. Este pasaporte será un documento de viaje reconocido en las fronteras de los Estados firmantes, como símbolo de su compromiso con el respeto de los derechos de los migrantes y por el reconocimiento de la libertad de circulación y residencia como libertad fundamental de todo ser humano, basada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Solicitamos la aplicación efectiva de una ciudadanía universal para todo habitante del planeta, que le garantice el disfrute de los derechos elementales en cada país donde resida de forma temporal o permanente. Al mismo tiempo, solicitamos que se desvincule la ciudadanía de la nacionalidad, como ya ocurre parcialmente, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, el Mercosur, la CEDEAO o el acuerdo de viaje transtasmanio.

Por último, instamos a todo ciudadano a movilizarse por la ciudadanía universal y la libertad mundial de circulación y residencia de las personas. Les invitamos a ejercer presión en todos los ámbitos para que estos planteamientos se hagan realidad.(Organización para una ciudadanía universal, 2013)

Con lo antes transcrito, queda manifestado que estas organizaciones mantienen que además de la libre movilidad, debería ya pensarse en una ciudadanía de plenos derechos a nivel mundial, para lo cual se pretende emular lo que se aplica actualmente en la Unión Europea y el Tratado Schengen que permite circular a los ciudadanos de los países de la Unión o a aquellos que hayan obtenido visa de circulación por los territorios nacionales de los países miembros.

1.1.6. Contextualización Meso

A nivel regional, en el cono sur de Latinoamérica existen varias organizaciones de países que velan por el intercambio comercial principalmente, y se da también que los países que son colindantes en sus fronteras, en general, no exigen visas para los ciudadanos de sus vecinos, tal como ocurre con Argentina y Uruguay, Ecuador con Colombia y Perú, entre otros.

En este contexto, se ha suscrito el Código de Derecho Internacional “Sánchez de Bustamante” el 20 de febrero de 1928 en la ciudad de La Habana, siendo firmado por los gobiernos de varios países latinoamericanos, incluido el Ecuador. En este Código, además de varias puntualizaciones se establece lo siguiente:

Artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. [...]

Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de las demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la Constitución y las leyes.

Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos. (Código de Derecho Internacional "Sánchez de Bustamante", 1928)

Estos principios han sido recogidos en las diferentes normativas constitucionales al garantizárseles a todas las personas el goce de sus derechos fundamentales, no obstante, hablar de una ciudadanía universal, por lo menos a nivel latinoamericano, es aún muy lejano puesto que, todavía subsisten ciertas cuestiones ideológicas que no han permitido la adecuada cohesión del bloque de países por lo que en virtud de la soberanía estatal, cada país decide hasta que medida aplica lo concerniente a la política migratoria de los extranjeros en su territorio.

1.1.7. Contextualización Micro

En el Ecuador, en particular, hasta el año 2008 no existía la conceptualización de la necesidad de propender a la ciudadanía universal. No obstante, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, con el fin de hacer una Constitución que “durara 300 años” se debatió y se incluyó, finalmente, la prerrogativa de la ciudadanía universal como una forma de balancear las normas migratorias discriminatorias que especialmente, provenían de los países industrializados en contra de países del cono sur. Muchos asambleístas, por estar alineados ideológicamente con lo que se consideraba el socialismo del siglo XXI, buscaron incluir tal principio y con este motivo, se consagró en la Constitución del 2008 en el artículo 416. Sin embargo, otros asambleístas, hicieron notar su inconformidad y sus reparos a tal planteamiento, tal como se puede colegir de lo que a continuación se transcribe:

El concepto de movilidad humana sin restricciones se desarrolló en la Asamblea de forma simultánea a ciertas medidas del Gobierno que propugnan un concepto mayor: la ciudadanía universal. [...] En la discusión de las relaciones internacionales en la Mesa de Soberanía afloraron sesgos ideológicos, por el discurso oficialista del Estado ‘supra-soberano’ y las críticas opositoras a supuestos vínculos de la presidenta de la mesa, María Augusta Calle, [...]

Con todo ello se aprobó en la mesa y en el Pleno el artículo (416) que "propugna el principio de la soberanía universal, la libre movilidad de habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur". Luego se aprobó el artículo (40) del derecho a migrar y a la no identificación al ser humano como ilegal por su condición migratoria.

El asambleísta por Europa Édison Narváez (AP) aclara que la Constitución no solo es la norma superior sino el ideario colectivo de la sociedad que se quiere construir. Y en ese se expresa la ciudadanía universal. Con él, agrega, se apela al principio de reciprocidad en la perspectiva de que los otros Estados respondan de la misma forma para el caso de los migrantes ecuatorianos o al menos en la mejora de su condición actual. Eso supone también ampliar los derechos a los extranjeros.

Pero el ex asambleísta Luis Hernández (RED) señala un riesgo: que el país se vuelva intermediario de migración ilegal por la capacidad limitada del Estado para controlar grandes flujos. Ese puede ser el caso de los migrantes chinos, dice. (La ciudadanía universal va en una vía, 2008).

Estos problemas advertidos por Hernández en el 2008 se han materializado, tanto así que durante varios años los índices de criminalidad registraban un aumento de delitos cometidos por colombianos y peruanos; y finalmente hubo que ponerse restricciones, desde el 2010, al ingreso de ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia, por considerarse que venían en situación irregular, y los colombianos deben adjuntar a su documento de identidad un certificado de antecedentes penales.

1.1.8. Árbol de Problemas

Gráfico 1: Árbol de Problemas



Elaborado por: El autor

1.2.Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Demostrar la inviabilidad en la aplicación del principio de Ciudadanía Universal propugnado por la Constitución de 2008 en el Ecuador por estar vulnerando la Ley de Migración.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador en materia de otorgación de ciudadanía para los extranjeros.
- Comprobar si el principio de Ciudadanía Universal existe en los diferentes ordenamientos jurídicos internacionales.
- Establecer la condición de ciudadano y sus implicaciones jurídicas dentro de un Estado constitucional de derecho.

1.3.Justificación

Este trabajo de investigación fue pensado y creado después de algún tiempo de deliberación, por el autor de este plan, en forma directa, sin ser copia, imitación o traducción de otro trabajo de índole jurídico o de similares condiciones socio-educativas para la sociedad en general.

Actualmente, el principio de ciudadanía universal se encuentra vulnerado en Ecuador, puesto que, existen casos de migrantes, inclusive de países vecinos, que hablan el mismo idioma, tienen una cultura similar y parecido físico. No obstante, si no se cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y leyes especiales que se derivan de esta, las personas migrantes son deportadas a los países de origen, violándose de manera explícita el principio de ciudadanía universal.

A nivel institucional se justifica este estudio porque contribuirá a evidenciar la contradicción entre la Norma Suprema y las leyes especiales, de Migración por ejemplo, para evitar un conflicto de intereses entre las normas con respecto al principio consagrado en la Constitución; pero que, dadas las condiciones actuales se vuelve inaplicable en la práctica y de difícil cumplimiento para el Estado.

Si en algún momento el Estado, pretendiera ejecutar el principio de la ciudadanía universal, podría arriesgar la seguridad jurídica del Estado, al permitir la estadía prolongada, la no regulación, goce de todos los derechos a un extranjero de la misma manera que a un nacional, dándole la posibilidad de hasta elegir y de ser elegido por el soberano. Esta situación tiene una complejidad enorme para el país, puesto que, inclusive puede comprometer la seguridad no solo jurídica sino económica, social y política del Estado, en la medida que las personas que llegan al país no conocen la realidad del mismo y hasta podrían querer su colapso para favorecer a otro Estado.

Este tema es relevante para la ciudadanía, por cuanto, debe estar informada sobre las consecuencias del principio de ciudadanía universal constante en la Constitución, que abre las fronteras geográficas, sociales, económicas a las personas de otros países y nacionalidades. En este marco, este es un hecho sociológico dadas sus implicaciones para el país que debe ser analizado y asumir una posición frente al tema.

El estudio tiene un impacto social a nivel nacional e internacional considerando que el principio de la Ciudadanía Universal propone que el Estado garantice a las y los extranjeros que su estancia en el país será tranquila, placentera y *sin limitaciones*, dando a entender que los extranjeros en el país gozan de los mismos derechos civiles y políticos que sus nacionales esperando, reciban el mismo trato, es decir, la reciprocidad de la comunidad internacional para con los ecuatorianos en otro país.

Las personas beneficiarias de esta investigación son las personas extranjeras y nacionales, los académicos y estudiosos del Derecho Internacional. Además, es una contribución para abrir el debate en relación a las implicaciones jurídicas y sociales de la ciudadanía universal.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.Fundamentación teórica

2.1.1. Antecedentes de estudio

Los estoicos llamados así a quienes seguían la corriente que Zenón de Citio quien fundó en el 301 a. c. un movimiento filosófico que, dentro del periodo helenístico, adquirió gran difusión por todo el mundo greco-romano, mientras que, el concepto de ciudadano universal, establece que el ciudadano, debe ser guiado por su compromiso y lealtad con la humanidad, no con ninguna forma de gobierno específico(Ávila Santamaría, 2008, pág. 16).

Thomas Marshall, es quien nos da las pautas de lo que a ciudadanía se refiere desde el punto de vista sociológico y político de sus derechos, manteniendo una tesis revolucionaria para la época, asociando a los derechos de ciudadanía con los derechos civiles, políticos y sociales, estos sí inherentes al ser humano desde el plano de los derechos humanos fundamentales. Creó un concepto que gustó mucho y es fusionar a la ciudadanía con los derechos de los seres humanos(Marshall, 1950).

Para que el cosmopolitismo resulte creíble debe combinarse con una crítica al globalismo éticamente deficiente encarnado por el pensamiento neoliberal y el globalismo que está siendo puesto en práctica de forma tal que minimiza el contenido ético y visionario de concebir al mundo como un todo(Falk, 1999, pág. 71)

Existen países que reciben inmensas y variadas mercaderías, buscando la globalización tecnológica y mercantil con el internet, al mismo tiempo que afrontan el fenómeno de las migraciones masivas considerándolas como una amenaza, los mismos que están endureciendo sus leyes migratorias, al punto de considerar como delincuente a quien traspase sus fronteras sin el

requisito de una visa, siendo que el derecho internacional les faculta por su soberanía de manera discrecional de cada estado para que pueda otorgar visas a quien le parezca cumple los requisitos previos para visitarlos.

Sabiendo bien, que en un escenario así, el país que con mejores condiciones económicas se desarrolle, deberá aceptar la inmigración masiva de quienes acudieron a él con el deseo justo de estar inmersos en ese desarrollo, puesto que vivimos en una sociedad consumista que se ha quedado perpleja con el poder del mercado y el país que mejor sepa manejar a este instrumento económico, será el más deseado por quienes no emprenden en sus países originarios.

2.1.1.1. Antecedentes investigativos

2.1.1.1.1. Definición de ciudadanía

La ciudadanía es un concepto que se define, según el Diccionario de la Lengua Española como la “cualidad y derecho de ciudadano” (Real Academia de la Lengua, 2001); y entendiendo como ciudadano al “natural o vecino de una ciudad. [...] habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país” (Real Academia de la Lengua, 2001).

De lo expuesto por la Real Academia Española, se puede colegir que tal concepto resulta insuficiente, por cuanto, doctrinariamente a la ciudadanía se le ha considerado siempre un concepto de definición complicada, por la cantidad distinta de matices que presenta, especialmente si se toma en cuenta que el concepto de ciudadanía se halla más ligada a la idea de nación (conjunto de personas) que al territorio (espacio geográfico), de manera tal, que uno puede ser vecino de una comarca sin necesidad de ser ciudadano de ese país.

El tratadista Guillermo Cabanellas define a la ciudadanía como:

Cualidad de ciudadano de un Estado: vínculo político (y, por tanto, jurídico) que une a un individuo (nunca a una persona jurídica) con la organización estatal. Conjunto de derechos y obligaciones políticos. Comportamiento digno, noble, liberal, justiciero y culto

que corresponde a quien pertenece a un Estado civilizado de nuestros tiempos. Por extensión impugnada, nacionalidad (Cabanellas de Torres, 2007, pág. 69).

De acuerdo al criterio de Cabanellas, establece que el ciudadano tiene una serie de vínculos políticos y jurídicos con el Estado que lo obliga a tomar ciertas actitudes y que por lo mismo, le hace merecedor de una nacionalidad, es decir la pertenencia a una Nación, parte integral de un Estado o país.

Estrada la define como la condición jurídica en cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de una sociedad determinada. Esto se aproxima más a la verdad, pero no del todo; en primer lugar, porque los residentes de una ciudad de cuya nación no son ciudadanos, pueden ejercitar ciertos derechos políticos, especialmente de orden municipal, y, en segundo término, porque hay ciudadanos, como los que lo son por naturalización, que no pueden ejercer algunos derechos políticos, como el desempeño de determinadas magistraturas. Sánchez Viamonte dice que “la ciudadanía es una institución que habilita para el ejercicio de todos los derechos políticos, y comporta deberes y responsabilidades correlativos respecto del Estado”. La definición es clara, aun cuando cabe observar, según ya se ha dicho, que se puede ostentar la ciudadanía de un país sin tener todos los derechos políticos. El mismo autor lo comprende así cuando dice que “ciudadano es el individuo, miembro del cuerpo social, que interviene en la formación del gobierno, que participa en la sanción de la Constitución y de las leyes por medio de sus representantes, que está facultado para controlar el desempeño de las funciones públicas y que asume una parte de la responsabilidad que incumbe al pueblo, como titular de la soberanía (Ossorio, 2010, pág. 164).

De lo que se expone en el párrafo precedente, se puede encontrar que el concepto se halla más completo, y se hace énfasis en la posibilidad de ser residente de un lugar sin ser ciudadano o de ser ciudadano pero de una clase en la que no podrá ser partícipe de todas las decisiones en las que puedan y deban tomarse por parte de la ciudadanía entendida como el conglomerado social que conforma un Estado, haciendo notar entonces que es imprescindible la existencia de una ciudadanía para que subsista también la organización política y administrativa llamada Estado, y que esta ciudadanía no puede ser arrogada de cualquier manera pues hará una diferenciación entre quienes han nacido en el seno de una nación y quienes no lo han hecho así, concediéndoles algunos estatus que derivarán en la categorización de sus obligaciones.

No obstante, esta clase de diferenciaciones, hecha en la doctrina, en la práctica hace que la democracia, como sistema de gobierno se ponga en peligro pues no puede entenderse que existan clases de ciudadanías, o que se discriminen entre rangos de ciudadanos.

2.1.1.1.2. Antecedentes históricos de ciudadanía

Aunque muchos creen que el concepto de ciudadanía es una invención moderna, se puede mencionar que las primeras nociones se encuentran en Grecia, hace unos 2.500 años antes de Cristo, cuyas ideas y formalidades se han ido modificando en el transcurso de la historia, de manera tal, que actualmente se puede verificar la búsqueda de una ciudadanía universal que sobrepasa las diferencias culturales, religiosas y nacionales.

De Grecia, se puede decir que por la diferenciación de sus polis, se habla de un modelo ateniense y de un modelo espartano. El modelo vivenciado en Atenas o ateniense es el que más se ha extendido en las sociedades occidentales, puesto que mantenían un orden jerárquico que no era autoritario y en el que reconocían a los individuos de la comunidad como una parte importante del ejercicio del poder, el gobernante, por lo tanto, no hacía cuanto quería sino que más bien respondía y daba cuenta de sus actos a sus semejantes, algo que era común en la época de Solón (siglo VI a.C.). Sin embargo, esta autonomía de los ciudadanos fue algo que hubo de ir modificándose con el pasar de los años.

A finales del siglo VI a.C. en la época de Clístenes, se implantaron ciertas reformas que condujeron a una forma de gobierno mixta, entre la aristocracia (poder de los ricos) y la democracia (poder del pueblo) lo que ayudó a que se fomentara un régimen más abierto, en el cual si bien es cierto que los aristócratas acaparaban los puestos importantes, los representantes del pueblo tenían el control sobre el funcionamiento de los procesos, promoviendo la igualdad sin distinción de linajes o grupo étnico (Horrach Miralles, 2009, pág. 3).

Sin embargo, fue con Pericles con quien se vería el mayor avance en cuanto a la ciudadanía del modelo ateniense, puesto que en este caso se puso de manifiesto la democracia radical, en la que el pueblo tuvo una participación cada vez más activa y mayor relevancia en la toma de decisiones en el ámbito político. Concedía un equilibrio importante entre la ley y la libertad

individual, los ciudadanos podían participar en la Asamblea y también en la organización de la Magistratura para que los casos sean sorteados evitando los casos de sobornos y de cohechos, así mismo, los ciudadanos podían elegir generales, pedir cuentas de la gestión a los funcionarios públicos, otorgaba vigencia a las leyes y las aprobaba, de la misma manera, el mayor número de ciudadanos eran los trabajadores rurales y urbanos por lo que su valor político era mayor que el de los aristócratas, por ello se puede decir que Atenas no era gobernado por una casta política sino por la ciudadanía propiamente dicha. Si bien es cierto, la democracia ateniense fue una de las formas de gobierno más avanzada, no puede decirse que las democracias modernas se le comparen, puesto que en Atenas los esclavos, las mujeres y los extranjeros tenían derechos limitados o de plano carecían de derechos civiles inclusive (Horrach Miralles, 2009, pág. 4).

No obstante, hay que recordar que en la antigua Grecia, al ser un régimen esclavista, la sociedad se dividía en dos clases: libres y esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo sino que eran considerados como objetos propiedad de los amos, quienes sólo podían ser hombres libres. Y a su vez, los libres se dividían en ciudadanos, varones hijos de padre y madre ateniense, que pagaban impuestos y que podían desempeñar cargos públicos; y en extranjeros o *metecos*, varones residentes en Atenas pero carentes de derechos políticos. Las mujeres podían ser libres pero bajo ningún concepto llegaban a ostentar la calidad de ciudadanas (Clases de Historia).

En este contexto histórico nace la concepción del *zoonpolitikono* animal político de Aristóteles que consideraba que al ser el humano un ser eminentemente social y gregario, al buscar convivir en grupos es necesario que se organice y que como máxima directriz de esta organización esté la búsqueda de la justicia. Además sostiene que si bien es cierto que el pueblo es el pilar de la democracia, dentro de ellos existen quienes sobresalgan en sus capacidades para dirigir el gobierno pues si se estanca en la mediocridad, la democracia se vuelve un proyecto imposible e inviable (Horrach Miralles, 2009, pág. 5).

Para el modelo vigente en Esparta, lo imperante era ser un buen soldado, por ello las obligaciones del ciudadano eran dos: participar en las milicias de Esparta y desempeñar cargos públicos cuando así se lo pidiese la administración. Tenían 2 reyes que posteriormente se cambiaron por una Asamblea y un Consejo de Ancianos. Si en Atenas se respetaba la libertad individual de los ciudadanos, en Esparta esta libertad se hallaba restringida en virtud de la necesidad bélica de la *polis* espartana. En esta ciudad, también sus ciudadanos lo eran los hombres

libres varones hijos de padre y madre espartana y que hayan terminado con éxito su formación militar, imprescindible dentro de la estructura de Esparta (Horrach Miralles, 2009, pág. 6).

Siguiendo la línea del tiempo se tiene a Roma, desde sus épocas tempranas hasta su época de decadencia; por ello, sus ciudadanos tendrán que cumplir ciertos requisitos pues no todos los residentes en Roma y sus alrededores tenían tal calidad. Lo mismo que en Grecia, Roma también tenía un régimen esclavista, por ello, la primera clasificación que se hace es entre libres y esclavos. Los esclavos no son considerados seres humanos sino objetos, propiedad indiscutible del amo que puede inclusive darles muerte sin ninguna sanción legal (situación que en algo mejora durante la República), no pueden tener bienes personales y tampoco pueden contraer matrimonio legal, aunque sí podrán elegir una compañera y celebrar con ella un *contubernium* o matrimonio de esclavos. Los esclavos podían ser *serviprivati* (propiedad privada) o *servipublici* (propiedad del estado). Se podía obtener la libertad con la manumisión otorgada por el amo por buena conducta del esclavo o porque este compraba su libertad, pasando a llamarse liberto, que podía desempeñar tareas artesanales o comerciales pero guardando respeto y fidelidad a su antiguo dueño (Junta de Extremadura).

En cuanto a los hombres libres se dividen en *cives* o ciudadanos y en extranjeros o *peregrini*. Los ciudadanos tenían derechos civiles como: *iusconnubii* o derecho a contraer matrimonio de acuerdo a las leyes romanas, *iuscommercii* o derecho a la propiedad y a comerciar y el *iuslegisactionis* o derecho de reclamar sus derechos por las vías legales romanas. En cuanto a los derechos políticos se tiene: *iussuffragii* o derecho al voto activo en las cuestiones concernientes al Estado, *iushonorum* o derecho a ser elegido para ocupar cargos públicos y el *iusprovocationis ad populum* o derecho a apelar la pena de muerte o de azotes ante la Asamblea del pueblo. Estos derechos podían ejercerse total o parcialmente por concesión especial del Estado romano (Junta de Extremadura).

La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento o por causa posterior al nacimiento.

1) Nacimiento: No era el lugar del nacimiento sino la nacionalidad de los padres la que confería la ciudadanía romana al hijo. Para nacer ciudadano romano era preciso nacer

de padres que fueran ciudadanos romanos, o sea, que en esta materia se aplicaba el principio del “IusSanguinis.

Cuando sólo uno de los padres era ciudadano romano, como no podía haber habido justas nupcias ya que estas eran posibles solamente entre ciudadanos, el hijo seguía la condición de la madre en el momento del parto; de modo que si el padre era peregrino o latino y la madre era ciudadana romana, el hijo nacía ciudadano romano.

Adquiría este derecho el ingenuo, que era la persona que nacía libre y que nunca había dejado de serlo, sin que importara que su padre hubiera sido ingenuo o liberto. Esta condición de ingenuo también podía ser adquirida por el liberto a quien le era concedida por un rescripto del emperador el derecho de portar un anillo de oro en el dedo, denominado el “IusAureorumAnulorum”, que era el símbolo de la ingenuidad.

2) Causas posteriores al nacimiento: La calidad de ciudadano romano se adquiría como un derecho en los siguientes casos:

A) En el caso del esclavo que había sido manumitido por su propietario quiritario conforme al procedimiento pautado por el derecho civil romano, o sea mediante alguna de las formas solemnes.

B) El peregrino o extranjero a quien le era conferida la ciudadanía, bien por resolución de los comicios, por disposición de un delegado del pueblo o por un rescripto del emperador. En esta forma, en muchas oportunidades, se otorgó el beneficio de la ciudadanía romana no sólo a un determinado individuo sino a toda su familia, a grupos de personas y aún a ciudades enteras, las cuales se convertían en Municipios; pudiendo esta concesión graciosa comprender todos los derechos que encerraba el “iuscivitatis” o solamente algunos de ellos.

C) En el año 212 el emperador Caracalla concedió el derecho de ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. Esta medida fue tomada con una finalidad fiscal, aumentar el rendimiento de los impuestos que no cubrían más que los ciudadanos romanos; pero, conforme a la opinión general no tuvo por efecto suprimir por completo a los latinos y a los

peregrinos, pues siempre hubo libertos latinos, libertos dedicticios y peregrinos dedicticios, y también hubo ciudadanos privados del derecho de ciudadanía en virtud de sentencias, ya que el edicto de Caracalla sólo se aplicó a los habitantes del Imperio para el momento en que fue dictado; en tanto que los que fueron sometidos posteriormente a la dominación romana eran peregrinos. Este edicto de Caracalla se generalizó bajo Justiniano, en que todos los habitantes del Imperio fueron ciudadanos y lo fueron igualmente todos los manumitidos, quedando tan sólo como peregrinos los que habían perdido el derecho de ciudadanía en virtud de una sentencia(Temas de Derecho).

La mujer por su parte, se le considera no una ciudadana plenamente sino como un menor de edad, que dependerá de la voluntad del cabeza de familia o *paterfamilis* para acceder al manejo de su herencia aunque en cualquier circunstancia su representatividad en la sociedad romana era más importante que en la griega.

Después de la caída del Imperio Romano, las múltiples regiones que se hallaban bajo su dominio al ser conquistadas por los bizantinos y los bárbaros cambiaron sus modelos de gobierno por otros menos igualitarios, por lo que la ciudadanía, pasó a ser algo secundario cuando lo principal era la acumulación de poder, a través de reyes y monarcas.

A finales de la Edad Media surgen las ciudades-estados italianas que adoptan para su administración los regímenes republicanos, y estas son: Génova, Venecia, Florencia, Pisa, Milán, Bolonia y otras, las cuales se consideran independientes del poder cacical y religioso que rodeaba a Europa. Estas ciudades-estados contaban con su propia administración política y judicial y además lograron cultivar varias artes como la pintura, la escultura, etc.

Para ser ciudadano en cualquiera de estas ciudades-estado italianas sólo debe cumplirse un requisito:

[...] la de poseer alguna propiedad en la ciudad correspondiente. Esto permitía que cualquier persona no nacida en la ciudad pudiera convertirse en ciudadano adquiriendo alguna propiedad. El modelo político era, más o menos, de democracia directa, pues los ciudadanos tenían la posibilidad de elegir a los miembros de las asambleas y de los consejos que estructuraban el Estado(Horrach Miralles, 2009, pág. 10).

En el siglo XVIII se producen grandes cambios en cuanto a la concepción política de los estados y por ende de los principios de ciudadanía, reflejados en la Revolución Norteamericana (1776) y en la Revolución Francesa (1789) representando a su vez tendencias republicanas en el primer caso y una tendencia liberal en el segundo.

La Revolución Norteamericana nace cuando los súbditos ingleses en América del Norte no son tomados en cuenta en el parlamento, con lo cual deciden independizarse de Inglaterra conformando un nuevo país, Estados Unidos, con base a las 13 colonias originales, dando lugar a la *Bill of Rights* con la cual se consagran derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión como imprescindible para lograr la conformación de un nuevo estado.

Sin embargo en cuanto a los derechos de ciudadanía, estos están ligados directamente con la propiedad, con lo cual no todos podían ejercer el derecho al voto, que de hecho se considera menos importante que el derecho a la libertad de expresión; inclusive el ser elegido presentaba mayores exigencias pues se tomaban en cuenta criterios más excluyentes que para votar. Así pues se puede colegir que los derechos civiles alcanzaban a todos (excepto a los esclavos) y los derechos políticos se restringían en función de las propiedades (Horrach Miralles, 2009, pág. 11).

La revolución en suelo estadounidense remeció viejas estructuras de poder en Europa y por esta razón es que empieza a gestarse la Revolución Francesa, influenciada por Rousseau y sus ideas que hablaban de la importancia de la movilización general de los pobladores y su voluntad general. Toda la lucha social desembocó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, manifiesto que recoge las ideas básicas de derechos civiles: libertad, igualdad y fraternidad; lo cual suponía una nueva categorización en cuanto a la equidad de todos frente a los órganos de justicia y una libertad de expresión fundamentalmente.

En cuanto a los derechos políticos, todos pasaban a ser *citoyens* o ciudadanos, al menos en la teoría, puesto que estos derechos políticos o derechos activos estaban vedados para varias minorías religiosas como hugonotes, judíos y a los esclavos y las mujeres; en cambio los derechos pasivos o civiles sí regían para todos los seres humanos. De la misma manera, se limitó el ejercicio de la ciudadanía en virtud de la cantidad de impuestos que pagaba un ciudadano, siendo el que más pagaba el oponente para ejercer cargos de representación popular (Horrach Miralles, 2009, pág. 12).

Estos podrían ser, en breves palabras resumidos, los antecedentes históricos del concepto de ciudadanía, los mismos que fueron recogidos por la legislación ecuatoriana tanto en su principio al erigirse en República independiente hasta la última Constitución promulgada en el año 2008.

2.1.1.1.3. Requisitos formales de ciudadanía

Cuando se revisan los conceptos, definiciones y los antecedentes históricos de la ciudadanía se puede tratar de esbozar un concepto propio acerca de ciudadanía, significando entonces que este concepto trate de reunir las características imprescindibles o requisitos formales de la ciudadanía como tal.

Por lo tanto se puede decir que la ciudadanía es el vínculo político jurídico que se establece entre un ser humano y un Estado determinado. Este vínculo se generará en virtud del nacimiento de la persona o por pedido expreso de la misma, lo cual le otorgará una calidad de ciudadano que le permitirá gozar de derechos y le exige cumplir obligaciones determinadas en las leyes del país al que pertenece. De igual manera, la ciudadanía le confiere un sentido de pertenencia a una determinada comunidad, cuya calidad no perderá aun cuando deje de domiciliarse en los límites del territorio del país en el cual es ciudadano.

Con esta conceptualización se puede mencionar entonces que entre los requisitos formales para la ciudadanía están:

- La existencia previa del Estado del cual se requiere la ciudadanía, puesto que, si esta organización social, política y administrativa no preexiste, mal podría otorgar la condición de ciudadano a nadie.
- La no discriminación. Este tema es importante por cuanto, los seres humanos desde mediados del siglo XX han luchado denodadamente para conseguir una igualdad para el goce de derechos civiles y políticos, por ende, es impensable en estos tiempos tratar de restringir la ciudadanía a criterios excluyentes tales como: la raza, la condición económica, el género o el sexo.

- Cumplir con los requisitos legales impuestos en la legislación del Estado, es decir que si el país tiene una ley que explique los casos en los que una persona puede ser considerado como ciudadano, la persona debe ajustarse a esos parámetros para tener tal calidad.
- Que esta calidad de ciudadano sea reconocida en el ordenamiento jurídico interno y también a nivel internacional.

Es importante reconocer que si bien es cierto la no discriminación para la asignación de ciudadanía es un criterio prevalente y que deberá ponderarse de acuerdo a las leyes vigentes en el territorio, es evidente que no todos podrán ser ciudadanos del país que prefieran pues otro tipo de criterios excluyentes entrarán a consideración tal como haber nacido en un territorio cuya soberanía pertenezca a otro Estado o que se haya hecho renuncia expresa de la ciudadanía que una persona tenía originalmente a través del trámite pertinente para tal efecto.

Ninguna persona puede estar exenta de tener una ciudadanía, pues las legislaciones alrededor del mundo se preocupan de que aquello no ocurra, aunque la figura del apátrida o sin Patria se presenta en casos excepcionales que deben resolverse jurídicamente y del que se hablará en un capítulo posterior más extensamente.

2.1.1.1.4. Ética y política en la construcción de la ciudadanía

La ciudadanía como se ha visto, es un vínculo que une al ser humano con la organización estatal, la misma que permitirá en mayor o menor medida la participación del ciudadano en la toma de decisiones de la vida política del Estado. El ser ciudadano, desde la época de Aristóteles, significa ser un buen hombre, no obstante en innumerables ocasiones se veía que el buen hombre no necesariamente era buen ciudadano y el buen ciudadano no siempre era buen hombre.

Para la correcta formación del ciudadano deben conjugarse la ética y la política, cada una con sus particularidades así, por ejemplo, la ética es considerada la ciencia de lo moral, que busca determinar el comportamiento correcto de los individuos dentro de la sociedad. La ética no puede considerarse una ley pues no existe norma que la imponga, pero sin embargo es el ideal de la conducta que deben observar los seres humanos sin necesidad de medios coercitivos.

La política se ha definido por García Pelayo como realidad social específica caracterizada por la conversión, mediante un proceso integrador, de una pluralidad de hombres y de esfuerzos en una unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la convivencia pacífica en el interior y la existencia autónoma frente al exterior; por Carlos Ollero, como la actividad que se propone la realización, mediante el poder, de un orden de convivencia libre y voluntariamente admitido, y por George Burdeau, como una actividad ya desarrollada por los gobernantes, ya por la sociedad con miras a ocupar funciones de dirección, de donde se deriva que la política capta los fenómenos en su aspecto dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida tanto a la conquista como al ejercicio del poder (Ossorio, 2010, pág. 744).

Se ha entendido entonces que la manera de hacer política es involucrando al ciudadano en las actividades relativas al Estado y que esta política es básicamente es un servicio que se presta al público. De la misma manera, al tener una sociedad unas creencias y unos valores morales establecidos, es de esperarse que todos sus componentes actúen con la ética requerida para ejercer acciones políticas con total transparencia y sin necesidad de que queden ocultos intereses propios o que vayan en desmedro del bienestar colectivo que es uno de los principales objetivos del Estado.

La ética y la política por lo tanto se entrelazan en la construcción de una ciudadanía consciente, responsable y participativa, en la que directamente puedan, desde elegir y ser elegidos, hasta interpelar y solicitar la rendición de cuentas de actos y funcionarios que así lo ameriten.

En los tiempos modernos se ha hecho especial hincapié en el tema de la participación ciudadana, siendo concebida como una serie de mecanismos constitucionales y procedimientos legales a través de los cuales el ciudadano puede exponer ante los representantes de gobiernos locales o nacionales sus pensamientos respecto a una diversa variedad de temas. Estos mecanismos de participación pueden ser: el referéndum, la consulta popular, la silla vacía, la rendición de cuentas, entre otros.

Lo que se espera con estos procesos es que la misma ciudadanía fiscalice la actuación y el comportamiento de quienes son funcionarios para que de esta manera y con una ética comprobable, la política, es decir el servicio hacia la comunidad, sea de una naturaleza tal que no permita la

ocurrencia de delitos sino que más bien se busque el beneficio común para todos y todas los ciudadanos y residentes de un Estado.

2.1.1.1.5. Ciudadanía Universal

La ciudadanía universal es una tendencia que se ha ido permeando en diferentes pensadores de la modernidad, aunque se considera que sus orígenes vienen desde tiempos helenísticos, precisamente con Zenón de Citio, quien manifestaba que el ser humano debe propender ser “cosmopolita” un concepto que, en aquella época significaba ser uno con el conjunto de *polis*, sin que se limitara a una sola de ellas para ejercer la ciudadanía.

Al hablar de ciudadanía, se tiende a relacionar con el concepto tradicional de Thomas H. Marshall (1950), desde la teoría liberal, que liga la ciudadanía al Estado-nación y analiza su amplitud desde el desarrollo de los derechos políticos, civiles y sociales, es decir un modelo de Estado que se relaciona y mantiene un contrato con la “sociedad civil”, en el cual se ve a las personas como iguales y al Estado-nación como homogéneo. Una ciudadanía evolutiva en la cual los derechos se dieron como resultado de la intervención del Estado frente a los conflictos y desigualdades profundas de la sociedad.

Esta postura ha sido criticada por no tomar en cuenta la heterogeneidad de la sociedad y por “su visión de lucha por los derechos, inconclusa para algunos (Barbalet, 1988) e incompleta para otros” y no evolucionista porque no tiene un avance lineal hacia adelante, sino que muchas veces se estanca o retrocede.

También existe una confusión entre lo que es la ciudadanía y la nacionalidad, ya que se utilizan los dos términos para referirse a la vinculación de las personas con el Estado en un territorio determinado y delimitado, en donde la ciudadanía se define como “el estatus que otorga derechos y obligaciones a los individuos”, y la nacionalidad con un sentido de pertenencia étnica y cultural que ha limitado la ciudadanía al obligarla a pertenecer a una comunidad política nacional jurídicamente delimitada³, justificada en la defensa patriótica de la nación.

Pero esas definiciones son insuficientes para englobar la situación actual del Estado frente a la globalización y la migración, ya que en primer lugar son excluyentes y, en segundo, porque son imposibles de mantener en el tiempo; en la realidad existen cada vez más limitaciones y controles fronterizos en los principales países receptores de migrantes, pero se observa que la cantidad de extranjeros que ingresan no disminuyen, o lo que provocan estas medidas de “seguridad” es que las personas por su estatus legal no vuelvan a sus países, por miedo a no poder regresar o reagrupar a sus familias. (Pérez Ruales, 2009, pág. 31)

Se ha visto que la ciudadanía es el vínculo jurídico político de una persona con el Estado y debido a ello se hace acreedor a la categoría de ciudadano y por ello se puede identificar a un conjunto de seres humanos como miembros del mismo Estado. En el caso de la ciudadanía universal, lo que se persigue es que todos los seres humanos sean considerados como integrantes de la misma y única comunidad política.

La ciudadanía universal o ser ciudadano del mundo, rechaza los argumentos y restricciones referentes a los límites territoriales o pertenencias nacionalistas convirtiendo por ende, a este criterio de cosmopolita en una utopía, por ahora, en la que las soberanías estatales no ceden paso a la integración más allá del ámbito comercial y empresarial.

2.1.1.1.5.1. Definición

La Ciudadanía Universal o denominada cosmopolita por Boaventura de Sousa Santos, debe ser entendida como aquella “concepción alternativa de ciudadanía nacional y global” necesaria para la inclusión social de los no ciudadanos, de los excluidos en el ejercicio de derechos debido a un accidente natural de nacimiento en tal o cual ubicación geográfica.

El citado concepto no sólo que debe ampliarse a la solidaridad, sino que debe desarrollarse de la forma más adecuada para el ejercicio eficaz de los derechos de las personas independientemente de su origen nacional, pues el concepto nacional de la ciudadanía ha sido uno de los principales obstáculos para el logro de la igualdad entre las

personas y la razón de los Estados para la limitación de derechos. (Valle Franco, 2009, pág. 12)

A la ciudadanía universal se la puede definir como el pertenecer todos los seres humanos a una sola clase de ciudadanía, que no haga distinciones en cuanto a lugar de nacimiento, límites territoriales y criterios excluyentes para que de esta manera, el ciudadano pueda movilizarse libremente entre los espacios geográficos del planeta, sujetándose a leyes que sean propicias para el desenvolvimiento de la sociedad sin que hayan de pedirse permisos de entrada o de salida de los países y siendo todos parte de un Estado Global.

2.1.1.1.5.2. Naturaleza jurídica

Los primeros en hacer referencia a la ciudadanía universal fueron los estoicos, en épocas antiguas, que preconizaban acerca de la creación de una cosmopolis o una ciudad tan grande que abarcara todo el territorio conocido y conquistado, desmarcándose de las limitadas polis griegas.

Con el pasar del tiempo y el surgimiento de los derechos civiles y políticos se afianzó la idea de una ciudadanía que ha ido transformándose y modificándose según sea el contexto histórico en el que se desenvuelve.

La perspectiva bajo la que se puede crear el estatus de un ciudadano del mundo se refiere al existencialismo del ser humano que se niega a ser clasificado de acuerdo a categorías escogidas artificialmente y al azar; así mismo lejos de identificarse con tal o cual nacionalidad, o tal o cual religión reconocen en primer lugar su condición humana.

Estos parámetros llevan a que se busque la manera de igualar las condiciones de los derechos civiles, sociales y políticos a lo largo del mundo para que todos los regímenes de gobierno tengan parecidas circunstancias para el desenvolvimiento de las personas que integran sus sociedades.

Para Ferrajoli:

[...] la noción de ciudadanía ha sido, sin duda, desde la aparición en 1950 del ensayo de Thomas H Marshall *Citizenship and Social class*, un parámetro para la investigación muy fecundo para ilustrar diversos aspectos sociológicos y políticos de la fenomenología de los derechos que antes habían pasado inadvertidos para los juristas (...).

La aproximación sociológica al tema de los derechos humanos sistemáticamente ignorada por la cultura jurídica parece ignorar a su vez, de forma igualmente sistemática, los estudios jurídicos sobre los mismos problemas. (...). Y ello, no porque los juristas gocen en materia de derecho y de derechos de un particular <<derecho de ciudadanía>>, sino porque, si queremos evitar caer en posiciones iusnaturalistas, y formular algo más que meras filosofías de la justicia, los derechos no pueden ser más que los distintos ordenamientos establecen en cada lugar y en cada época (Ferrajoli, 2009, págs. 97 - 98).

En la práctica, valga decirlo, es difícil que se conceda un estatus real a la ciudadanía universal, pues requería que todos los países en el mundo reformulen sus marcos jurídicos para su soberanía territorial, que es básicamente uno de los requisitos para otorgar la ciudadanía, por ende, además de ser una cuestión filosófica por ahora, no se contempla aún como realizable.

2.1.1.1.6. La ciudadanía como un derecho humano

Los derechos humanos son un concepto relativamente nuevo que vino a afincarse definitivamente en el ordenamiento jurídico de los países a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

Esta declaración es básicamente un compendio de aquellos requisitos fundamentales que se necesitan para el pleno desarrollo de la personalidad integral del ser humano y recogen ciertos derechos como el de no discriminación, la prohibición de la servidumbre y la tortura, el derecho a las libertades y también hace referencia a la ciudadanía en los siguientes términos: “Artículo 15: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad” (Organización de Naciones Unidas, 1948).

Significativamente se tiene que a la ciudadanía se le trata como un sinónimo de nacionalidad, que no es más que el pertenecer al conglomerado humano, integrante de una nación, que a su vez, es requisito fundamental para la conformación de un Estado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce pues, que toda persona debe tener una nacionalidad (o ciudadanía) y que esta no podrá ser quitada o negársele el derecho a una, o de cambiar de nacionalidad. Lo antes mencionado se complementa con lo siguiente, relacionado directamente con los derechos políticos del ciudadano:

Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto(Organización de Naciones Unidas, 1948).

En la mitad del siglo XX se consideraba que la ciudadanía era sobre todo el ejercicio directo o indirecto de la representatividad democrática, por lo tanto el derecho al voto, a elegir y a ser elegido es un derecho humano básico y fundamental, puesto que el contexto histórico inmediatamente anterior a esta Declaración, consistió en numerosos regímenes totalitarios en los que los ciudadanos perdieron gran parte de sus derechos políticos e inclusive civiles; por lo que, la Declaración Universal de Derechos Humanos busca evitar que tales situaciones se repitan.

En otro instrumento internacional de relevancia como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expedido en la Asamblea General de la ONU del 16 de diciembre de 1966 se hace constar lo que a continuación se transcribe:

Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país(Organización de Naciones Unidas, 1966).

De nuevo, se observa que se proclama la garantía de que el ciudadano pueda participar en la vida política de su país a través de la democracia directa, consagrando el derecho al voto y también proclamando que podrán ser elegidos como representantes en la función pública.

Estos instrumentos son de una importancia mundial pues han sido ratificados por la mayoría de países incluyendo al Ecuador, por lo cual las leyes internas deben avenirse a estas directrices, garantizando estos derechos para todos los ciudadanos, de manera que, si esa es su voluntad puedan participar en elecciones populares y a la vez estén habilitados para sufragar, colaborando con la toma de decisiones en el ámbito público dentro de cada país.

Sin embargo, al ser una ley de carácter general, sin que se haga puntualizaciones obedientes al espacio geográfico, se puede decir que estos preceptos básicos son los que en gran medida sirven para que se crea viable la ciudadanía universal, en la cual lo único importante sea el bienestar del ser humano y no la imposición de leyes que en determinados casos, carecen de eficiencia y validez por no estar acordes con la realidad histórica de los hechos, especialmente en estos tiempos en donde la tecnología ha permitido que los tiempos de viaje se acorten, las distancias prácticamente no existan y en donde el conocimiento es el bien máspreciado.

2.1.1.1.7. El principio de libre movilidad para la construcción de la ciudadanía universal

El concepto de la ciudadanía universal es una definición inacabada que está en constante mutación, por lo cual está siendo construida de acuerdo a los hechos y actos que va presentando y solucionando la humanidad, en pro de una globalización.

Uno de los principios en los que se cimenta la ciudadanía universal, es el de “la libre movilidad”, que también ha sido consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 13.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (Organización de Naciones Unidas, 1948).

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:

Artículo 12:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país(Organización de Naciones Unidas, 1966).

Según ambos documentos la libre movilidad es el derecho de una persona para movilizarse libremente dentro de un estado y de fijar su residencia en él; sin embargo, se ve que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la libre movilidad se vuelve inexcusable para sus países miembros, pues no hace la diferenciación que sí crea el Pacto Internacional respecto a la legalidad para permanecer en el territorio mencionado.

Es decir, de acuerdo a la Declaración, una persona ciudadana de un país puede trasladarse a cualquier otro si así lo decide, con el ánimo de conocerlo y de domiciliarse allí si así lo desea; pero en los términos del Pacto, estas acciones de recorrerlo y residir en este territorio que no es el propio, tendrán que sujetarse a la norma prevista en el derecho positivo de ese Estado para revestirla de legalidad.

La libre movilidad es un principio básico pues se encuadra en los derechos de libertad, no obstante debe reconocerse que tal movilidad está supeditada al ordenamiento jurídico interno de cada país, que es quien determina a quienes deja pasar a través de sus fronteras, establece las condiciones de permanencia y finalmente delimita el tiempo durante el cual esta persona puede movilizarse libremente sin contravenir leyes especiales creadas para el efecto.

En el Ecuador, la libre movilidad se ha especificado en el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, que es el único cuerpo legal que menciona tal concepto, así:

Art. I. (2).- Definición de movilidad humana.- La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso de globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de inequidades y discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas económicas y el deterioro de la situación de la población, las mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria(Ordenanza 071 reformativa al Código Municipal, 2009)

2.1.1.2. Antecedentes históricos

2.1.1.2.1. Consideraciones constitucionales sobre ciudadanía, desde 1830 a la actualidad

El Ecuador, desde el inicio de su vida republicana, ha tenido 20 Constituciones que han marcado, de acuerdo a sus concepciones acerca del Estado, los derechos y obligaciones que debían cumplir las personas que residen en territorio ecuatoriano.

Así por ejemplo, la primera Constitución fue expedida en Riobamba el 23 de septiembre de 1830. De corte extremadamente religiosa y moral (considera a Dios el máximo autor y legislador), tiene 75 artículos. Habla de los ciudadanos, sus derechos y obligaciones en los siguientes términos:

Sección III. De los ecuatorianos, de sus deberes y derechos políticos

Artículo 9.- Son Ecuatorianos:

1. Los nacidos en el territorio y sus hijos;
2. Los naturales de los otros Estados de Colombia, avecindados en el Ecuador;
3. Los militares que estaban en servicio del Ecuador al tiempo de declararse en Estado independiente;
4. Los extranjeros, que eran ciudadanos en la misma época;

5. Los extranjeros, que por sus servicios al país obtengan carta de naturaleza;

6. Los naturales, que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que determine la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio.

Artículo 10.- Los deberes de los ecuatorianos son: obedecer a las leyes y a las autoridades; servir y defender la patria; y ser moderados y hospitalarios.

Artículo 11.- Los derechos de los ecuatorianos son, igualdad ante la ley y opción igual a elegir y ser elegidos para los destinos públicos teniendo las aptitudes necesarias.

Artículo 12.- Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere:

1. Ser casado, o mayor de veintidós años;

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero;

3. Saber leer y escribir.

Artículo 13.- Los derechos de ciudadanía se pierden por entrar al servicio de una nación enemiga, por naturalizarse en país extranjero, y por sentencia infamante. Y se suspenden, por deber a los fondos públicos en plazo cumplido; por causa criminal

pendiente; por interdicción judicial: por ser vago declarado, ebrio de costumbre, o deudor fallido; y por enajenación mental(Constitución del Estado del Ecuador, 1830).

De lo anterior se puede colegir entonces, que a esa época, en plena separación de Colombia, quisieron abarcar a todos quienes por derecho o por conveniencia pudieran sentirse ecuatorianos; los deberes son pocos y puntuales pero en cuanto a los derechos se consideran únicamente como tales a los derechos políticos que permiten elegir y ser elegidos, es decir tener participación pública, y aquí si se evidencia que la calidad de ciudadanos la ostentan únicamente quienes cumplan con los requisitos referidos al estado civil, a las propiedades que se posean y a la educación, eliminando por tanto a la gran parte de la población.

En 1835 se expide en Ambato la segunda normativa denominada Constitución Política el 13 de agosto. Conserva su condición de extremo conservadurismo pues coloca Dios en el preámbulo como Creador y Legislador supremo del universo, teniendo este cuerpo legal 112 artículos. Considera ecuatorianos a los nacidos en el territorio nacional y a sus hijos, y también les da esta calidad a quienes obtengan la nacionalidad por residir en el Ecuador, a los militares que se encontraban al servicio del Ecuador y también a los extranjeros que aporten positivamente al país y deseen radicarse. Los derechos se reducen a respetar las leyes, pagar impuestos, defender la patria y conservar las libertades públicas. Solo quienes cumplan con los requisitos para ser ciudadanos activos podrán elegir y ser elegidos para ocupar cargos de dignidad popular, siendo estos requisitos básicamente los mismos que los de la Constitución de 1830, diferenciándose en que se podía ser casado o por lo menos mayor de 18 años y la propiedad raíz debía alcanzar un valor de 200 pesos(Constitución Política del Ecuador, 1835), tal como se desprende de lo que a continuación se transcribe:

Art. 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Art. 5.- Son ecuatorianos por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio del Ecuador;

2. Los nacidos en país extranjero de padres ecuatorianos, viniendo a avecindarse en el Ecuador;
3. Los naturales que habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio.

Art. 6.- Son ecuatorianos por naturalización:

1. Los naturales de los otros Estados de Colombia, domiciliados, o que se domiciliaren en el Ecuador;
2. Los militares que estaban en servicio del Ecuador, al tiempo de declararse en Estado independiente;
3. Los extranjeros que profesando alguna ciencia, arte o industria, o poseyendo alguna propiedad raíz o capital en giro, declaren ante el gobernador de la provincia en que residan su intención de avecindarse en el Ecuador, y hayan cumplido cinco años de residencia en el territorio de la República. Bastará tres años de residencia, si son casados o tienen familia en el Ecuador, y dos años si son casados con ecuatoriana. A los americanos les bastarán dos años de residencia, sean o no casados;
4. Los extranjeros que por sus servicios positivos al país, obtengan del Congreso carta de naturaleza;
5. Los extranjeros que habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno de Colombia o del Ecuador, estén domiciliados, o vengán a domiciliarse en la República.(Constitución Política del Ecuador, 1835)

Posteriormente, se expide en Quito, el 1 de abril de 1843 otra Constitución Política de la República, conocida como “Carta de la Esclavitud”. Si bien es cierto no cita a Dios en el preámbulo, si le dedica un capítulo entero al proceder el Estado para la defensa de la religión católica, apostólica y romana. Esta visión ayudará a entender las consideraciones que se tenía acerca de la ciudadanía y que en general son idénticas a la Constitución de 1835. Esta Constitución también estipula que se puede obtener la ciudadanía ecuatoriana si se reside 6 meses siempre y cuando estén casados con ecuatoriana, dando por sentado con esta afirmación que los ciudadanos solamente pueden ser hombres, casados o mayores de 18 años, con propiedades y educación suficiente.(Constitución Política del Ecuador, 1843).

Artículo 9.- Son ciudadanos del Ecuador, los ecuatorianos que reúnan las calidades siguientes:

1. Ser casados, o mayores de diez y ocho años.
2. Tener una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como doméstico, o jornalero:
3. Saber leer y escribir. (Constitución Política del Ecuador, 1843)

Dos años después, en Cuenca el 8 de diciembre de 1845 se expide una nueva Constitución Política. En esta se repiten los requisitos para ser considerados ecuatorianos, tomando en cuenta a la mujer extranjera, siempre y cuando se case con un ecuatoriano, sea por nacimiento o por naturalización. En cuanto a los requisitos para ser ciudadanos estipula que, además de saber leer o escribir, tener una propiedad o una renta de 200 pesos, puede ser casado o soltero pero, si es casado será considerado ciudadano desde los 18 y si es soltero, lo será a partir de los 21 años (Constitución Política del Ecuador, 1845). En la Constitución del 25 de febrero de 1851 se estipulan los mismos requisitos de ciudadanía (Constitución Política del Ecuador, 1851), así:

Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento:

1. Los nacidos en el territorio del Ecuador.
2. Los nacidos fuera del territorio del Ecuador, de padre o madre ecuatorianos por nacimiento.
3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio.

Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización:

1. Los naturales de otras naciones que se hallen actualmente en el goce de este derecho.
2. Los extranjeros que, adquiriendo legítimamente bienes raíces en la República, o poseyendo alguna ciencia, arte o industria útil, o teniendo un capital en giro, obtengan carta de naturaleza conforme a la ley.
3. Los extranjeros que, habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno del Ecuador, y domiciliándose en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que determine la ley, el deseo de recuperar su antiguo domicilio.
4. Los extranjeros que, sin haber residido en el país, hubiesen prestado, o prestaren importantes servicios a la República, y obtengan de la Asamblea Nacional la correspondiente carta de naturaleza.
5. Las mujeres extranjeras casadas, o que se casaren con ecuatoriano.
6. Los hijos de padre ecuatoriano, por naturalización, que hubiese estado ausente en servicio de la República.

Artículo 8.- Son ciudadanos del Ecuador los ecuatorianos que reúnan las cualidades siguientes:

1. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno siendo solteros.
2. Tener una propiedad raíz valor libre de doscientos pesos, o ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente en calidad de doméstico o jornalero.
3. Saber leer y escribir.(Constitución Política del Ecuador, 1851)

En la Constitución del 6 de septiembre de 1852 se mantienen las condiciones con la única variante que vuelve a elevar la edad a 21 años para ser ciudadano activo o estar casado si es que no se ha cumplido el requisito de la edad(Constitución de la República del Ecuador, 1852), al igual que en la Constitución de 1861(Constitución de la República del Ecuador, 1861).

En Quito, el 11 de agosto de 1869 se expide una nueva Constitución, conocida como la “Carta Negra”, la misma que establece como requisitos para ser ciudadano:

Título III. De los ciudadanos

Artículo 10.- Para ser ciudadano se requiere:

1. Ser católico;
2. Saber leer y escribir;
3. Ser casado o mayor de veintiún años(Constitución del Ecuador, 1869).

Es decir, pasa a ser irrelevante el tener o no posesión de bien raíz o de una actividad productiva que le reditue ganancias, lo primordial, es ser católico, es de suponerse que público, notorio y practicante, para conferírsele la calidad de ciudadano.

En Ambato el 6 de abril de 1878 se expide otra Constitución Política, que trata de remediar la situación creada por la Constitución que le precedía, eliminando el requisito de la religión para ser ciudadano; sin embargo se seguía propugnando acerca de la religión oficial del Estado, el que estaba obligado a protegerla y defenderla incluso como uno de los deberes de los ciudadanos(Constitución Política del Ecuador, 1878). La Constitución de 1884, mantiene el criterio de ciudadanía para quienes sepan leer y escribir, y, tengan 21 años o estén casados(Constitución Política del Ecuador, 1884). En la Constitución de 1897, la edad se baja a los 18 años independientemente del estado civil(Constitución Política del Ecuador, 1897).

Se puede decir, como resumen, que en las normas constitucionales del siglo XIX los ecuatorianos podían serlo por nacimiento o por naturalización, y que era importante haber dado alguna muestra de “madurez”: haberse casado, tener una profesión, saber leer y escribir o cumplir con una determinada edad.

Esto sin que se olvide que el requisito de ser católico es fundamental, pese a que sólo se le consignó formalmente en la Constitución de 1869, todas las demás lo establecen de manera tácita al promulgar que la religión católica es la única que se profesará con la exclusión de cualquier otra.

De la misma manera, la ciudadanía se reconoce como activa cuando se puede ejercer el derecho al sufragio y a ser elegido, menoscabando los derechos de los otros connacionales. Es importante recalcar que la traición a la patria, la profanación de las creencias religiosas y el mal comportamiento con las obligaciones públicas (no pago de deudas, quiebras fraudulentas, ser procesado y castigado con penas corporales) son razones suficientes para perder la ciudadanía en todas las Constituciones antes descritas.

Con el advenimiento de la Revolución Liberal, se propició la existencia de un Estado laico, cualidad que le ha acompañado hasta nuestros días, tal es así que en 1906, el 23 de diciembre se expide otra Constitución Política, la misma que concede avances en materia de derechos constitucionales y garantías; no obstante en referencia a los ciudadanos vuelve a señalar que lo serán quienes tengan 21 años de edad y sepan leer y escribir (Constitución Política del Ecuador, 1906).

El verdadero cambio llega en la Constitución Política de 1929, considerada la más progresista hasta ese entonces puesto que por primera vez consigna el derecho a la libertad de expresión y en relación a los ciudadanos manifiesta: “Título III. De la ciudadanía.- Artículo 13.- Es ciudadano todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de veintiún años, que sepa leer y escribir” (Constitución Política del Ecuador, 1929).

Si bien es cierto que se mantienen los requisitos de la edad y de la educación, supone un cambio por la inclusión en el rango de ciudadanía también a las mujeres que hasta ese entonces habían carecido totalmente de derechos políticos.

En la Constitución de 1945 se exponen los mismos criterios para la ciudadanía y además se considera a los españoles de nacimiento como ecuatorianos si se domicilian en el territorio nacional y manifiestan su voluntad de serlo(Constitución Política del Ecuador, 1945).

En la Constitución de 1946 se habla de un capítulo de nacionalidad, en el que se estipula quiénes son los ecuatorianos por nacimiento, quiénes lo son por naturalización, quienes pierden y quienes recuperan la nacionalidad; en cuanto a la ciudadanía expone algo que ya se encontraba implícito en los reconocimientos anteriores y esto es, el derecho a elegir y ser elegido como funcionario público(Constitución del Ecuador, 1946). En el mismo sentido se expresa la Constitución de 1967, así:

Título II. De la nacionalidad

Artículo 11.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Artículo 12.- Son ecuatorianos por nacimiento los nacidos en el territorio del Ecuador.

Artículo 13.- Se considera también ecuatorianos por nacimiento los nacidos en territorio extranjero:

1. Hijos de padres ecuatorianos o de padre o madre de nacionalidad ecuatoriana, cuando ambos o alguno de ellos estuvieren al servicio del Ecuador;
2. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, transitoriamente ausentes del país, o al servicio de algún organismo internacional del cual sea miembro el Ecuador;
3. Hijos de padres ecuatorianos por nacimiento, o de padre o madre ecuatorianos por nacimiento domiciliados en territorio extranjero, a no ser que después de cumplir su mayor edad renuncien expresamente a la nacionalidad ecuatoriana;

4. Hijos de padres, o de padre o madre ecuatorianos por naturalización, si habiendo nacido en territorio extranjero, manifestaren, al hallarse entre los dieciocho y veintiún años de edad, su voluntad de ser ecuatorianos.

Los derechos del ecuatoriano a que se refiere el presente Artículo son iguales a los del nacido en territorio nacional.

Artículo 14.- Son ecuatorianos por naturalización:

1. Los que hubieren obtenido del Congreso la nacionalidad ecuatoriana, por servicios relevantes al país;
2. Los que hubieren obtenido u obtuvieren carta de naturalización;
3. Los menores de edad nacidos en el exterior de padres extranjeros que después se naturalizaren en el Ecuador. Al llegar a los dieciocho años conservarán la nacionalidad ecuatoriana, si no hacen expresa renuncia de ella;
4. Los extranjeros adoptados como hijos por ecuatorianos, mientras sean menores de edad. Conservarán la nacionalidad ecuatoriana si al hallarse entre los dieciocho y veintiún años manifestaren su voluntad de mantenerla.

Artículo 15.- La nacionalidad no se altera por el matrimonio ni por su disolución. La ley facilitará la naturalización del cónyuge extranjero casado con quien tenga nacionalidad ecuatoriana.

Artículo 16.- Quienes tenían la nacionalidad ecuatoriana antes de expedirse la presente Constitución, continuarán en goce de ella. Asimismo, quienes de acuerdo con normas constitucionales anteriores, no adquirieron la nacionalidad ecuatoriana pero hubieren podido adquirirla de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 de la presente Constitución, se considerarán ecuatorianos por nacimiento.

Artículo 17.- Sin perder su nacionalidad de origen y dentro de un régimen de reciprocidad, serán considerados ecuatorianos por naturalización los iberoamericanos y españoles de nacimiento que se domicilien en el Ecuador y manifiesten voluntad de que se los considere como tales. Recíprocamente, los ecuatorianos no perderán su nacionalidad cuando adquieran otra por el principio de doble nacionalidad.

Título III. De la ciudadanía

Artículo 21.- Son Ciudadanos ecuatorianos los mayores de dieciocho años que saben leer y escribir y están, por tanto, en aptitud de ejercer los derechos políticos que establece la presente Constitución. (Constitución Política del Ecuador, 1967)

En 1978 se expide una nueva Constitución, la misma que, escuetamente, establece que los ciudadanos son aquellos ecuatorianos mayores de 18 años, reconociendo como tales a los que han nacido dentro del territorio ecuatoriano o fuera de él pero de padres ecuatorianos y que entre los 18 y los 21 años han manifestado su voluntad de ser ecuatorianos, además los extranjeros naturalizados de acuerdo a la ley (Constitución Política del Ecuador, 1978). Es relevante poner a consideración que esta Constitución se dio en el contexto de una administración militar, la cual, inexplicablemente, fue el principio de la sociedad inclusiva que se pretende lograr ahora.

En 1998 se expide otra Constitución, la misma que hablando de los habitantes, reconoce como ciudadanos a todos los ecuatorianos, sean por nacimiento o por naturalización, sin distinción de edad, género o discriminación de ningún tipo, por lo tanto disfrutarán de los derechos consagrados en la ley (Constitución Política del Ecuador, 1998).

2.1.1.3. Fundamentación legal

2.1.1.3.1. La ciudadanía en la Constitución del Ecuador del 2008

Luego de una profunda crisis que sacudió al Ecuador en el principio del siglo XXI, varios cambios se hicieron evidentes y necesarios pero fue en el año 2007 con el advenimiento de la autodenominada “Revolución Ciudadana” que se convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente de plenos poderes que redactara la “mejor Constitución del Ecuador”, lo cual parecía posible, al menos desde la perspectiva del jurista italiano Luigi Ferrajoli quien manifestó: “Ecuador tiene seguramente la constitución más avanzada del mundo ahora; sin embargo el problema es su efectividad, que solo se obtiene con la introducción de garantías institucionales adecuadas” (Carvajal, 2012). Con estas expectativas se aprobó esta Constitución por Referéndum.

En relación a la ciudadanía se expone lo siguiente:

Capítulo segundo

Ciudadanas y ciudadanos

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad(Constitución del Ecuador, 2008).

En este texto se puede observar que se equipara a la nacionalidad con la ciudadanía, expandiendo el criterio de participación más allá que sólo al hecho del sufragio, pues considera que todos, sin excepción, son ciudadanos y por ende los derechos y principios consagrados en este texto constitucional los protege. Así mismo, esta nacionalidad se la puede obtener por el derecho de nacimiento o por el derecho de filiación, además de la persona que tramite su carta de naturalización mediante los parámetros definidos en la ley.

Esto significa que, aún los niños son considerados ciudadanos en virtud de su nacionalidad, aunque para el ejercicio activo de sus derechos políticos tengan que remitirse a lo que prescribe la ley (voto optativo desde los 16 años, obligatorio desde los 18 a los 65 años) lo cual, equipara en cuanto a la no discriminación de la sociedad o de algunos de sus sujetos.

Hay que tener en cuenta así mismo, que varios grupos indígenas se reconocen como parte de una etnia o nacionalidad en particular (cofanes, shuaras, cayapas, colorados, quichuas, waoranis, salasacas, etc.) pero esto, no constituye una separación de estos grupos humanos respecto de otros grupos (afroecuatorianos, montubios o mestizos), puesto que se reconoce la plurinacionalidad del Estado ecuatoriano.

Ahora, cabe hacer la distinción de las maneras en las que se obtiene la ciudadanía ecuatoriana, de acuerdo a la Constitución del Ecuador del 2008.

2.1.1.3.1.1. Ecuatorianos por nacimiento

El autor Juan Larrea Holguín, citado por Jorge Endara, manifiesta:

La nacionalidad es un vínculo jurídico y político que relaciona a las personas (y por ficción ciertas cosas personalizadas), con un Estado de tal modo que origina un estatuto que les distingue de la situación de las demás personas, que, por contraposición se llaman extranjeros(Endara Moncayo, 2010, pág. 60).

Este vínculo, además de una práctica consciente en lo jurídico y político, se halla también en lo subjetivo con el ámbito afectivo, por el lazo emocional que se desarrolla desde la infancia hacia el territorio y lo que esto implica, para que posteriormente se vaya construyendo una identidad nacional que favorezca la ciudadanía activa.

La nacionalidad adquirida por nacimiento se llama también como “originaria”, en la Constitución ecuatoriana del 2008 tiene 2 fuentes: la *iussolique* está determinada por el lugar de nacimiento, sin importar la nacionalidad de los padres; y, la *iussanguini* que tiene la nacionalidad de los padres, sin importar el lugar de nacimiento del individuo (Endara Moncayo, 2010, pág. 60).

El texto de la Constitución manifiesta:

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:

1. Las personas nacidas en el Ecuador.
2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.
3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera (Constitución del Ecuador, 2008).

Respecto a este artículo se pueden hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, es evidente los ecuatorianos por nacimiento serán quienes nazcan en el territorio ecuatoriano y no se tendrá en cuenta la nacionalidad de los padres. En el segundo numeral el espectro de la nacionalidad se extiende hasta los descendientes en tercer grado de consanguinidad de padres ecuatorianos aunque vivan en el extranjero, sin imponer un límite de edad o la necesidad de la manifestación expresa de la voluntad de aceptar tal nacionalidad.

Finalmente, el numeral 3 establece que también serán considerados ecuatorianos por nacimiento quienes pertenezcan a las comunidades, pueblos y nacionalidades en zonas de frontera, lo cual constituye una introducción nueva en la legislación puesto que en la Constitución de 1998 establecía que tales personas debían demostrar pertenecer a los pueblos ancestrales reconocidos por el Ecuador, y estos se consideraban ecuatorianos pero por naturalización (Dávalos Muirragui, 2008, pág. 88).

2.1.1.3.1.2. Nacionalidad supranacional

El numeral 2 del artículo 7 de la Constitución del Ecuador del 2008, expresa taxativamente que serán considerados como ecuatorianos por nacimiento los descendientes de hasta el tercer grado de consanguinidad de madre o padre nacidos en el Ecuador.

Esta consideración obedece a lo que se conoce como “supranacionalidad” o aquella nacionalidad que traspasa las fronteras y protege al individuo otorgándole los derechos que como ciudadano le asisten para evitar una situación que se conoce como “apátrida” o sin patria.

Si bien es cierto, esta es una excepcionalidad, la apátrida se puede dar debido a causas fundamentadas y que en buena parte, este numeral de la Constitución busca evitar, por ejemplo por orígenes étnicos, en los que se impide el goce de la nacionalidad por pertenecer a una determinada etnia, religión o ideología política.

También se han producido casos de apátrida, por razón del matrimonio, en algunas legislaciones como la francesa, la mujer que se casaba con extranjero perdía su nacionalidad originaria; igualmente la mujer que adquirió, por el matrimonio, la nacionalidad del marido, en caso de terminación perdía esa nacionalidad y si no recuperaba la de origen quedaba en calidad de apátrida (Endara Moncayo, 2010, págs. 67 - 68).

Lo antes expuesto demuestra un claro caso de discriminación contra la mujer, por lo cual el derecho internacional ha querido subsanar estas vejaciones retrogradadas, y como se ha dicho antes, lo que ha querido evitarse mediante la inclusión de la nacionalidad por nacimiento sin necesidad de

la manifestación expresa de la voluntad o límite de edad para los descendientes de padre o madre nacidos en el suelo ecuatoriano.

2.1.1.3.1.3. Ecuatorianos por naturalización

En el caso de los ecuatorianos por naturalización, la Constitución expresa:

Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

1. Las que obtengan la carta de naturalización.
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo Individual.

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa(Constitución del Ecuador, 2008).

Estos ecuatorianos por naturalización tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacidos ecuatorianos, aunque estos tengan un origen diverso. Para obtener la carta de naturalización deberá el solicitante someterse a los requisitos y trámites que establece la Ley de Naturalización y que pueden resumirse en ser mayor de 18 años, residir en el país por más de 3 años (que se reducen a 2 si está casado con un ecuatoriano o ecuatoriana) ininterrumpidamente o que justifique satisfactoriamente su ausencia del territorio nacional por más de 90 días debido a problemas de salud o motivos de estudios (Trámites Ecuador, 2013), tal como lo establece el artículo 4 de la mencionada Ley:

Artículo 4.- Para solicitar la Carta de Naturalización se requiere:

1. Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas;
2. Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan vivir independientemente;
3. Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años por lo menos, a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana. Este requisito no se exigirá a las mujeres extranjeras casadas con ecuatorianos o viudas de ecuatorianos. En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a dos años;
4. Haber observado durante su domicilio en el país, buena conducta
5. Hablar y escribir el idioma castellano; y,
6. Tener conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador; así como de la Constitución Política de la República, vigente a la fecha de presentación de la solicitud de naturalización(Ley de Naturalización, 2012).

Hay que recalcar que este acto de conceder la naturalización, es una decisión discrecional y soberana del Estado, por medio de la Presidencia de la República, y por regla general no se concederá, según el artículo 7 de la Ley de Migración en estos casos:

1. A quien haya merecido sentencia condenatoria en juicio penal por delito común o haya recibido auto motivado o de llamamiento a juicio plenario y el juicio respectivo no haya terminado definitivamente con sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento definitivo;
2. A quien sea incapaz de ganar honradamente los medios adecuados para su propia subsistencia y la de su familia:
3. A quien sufra enfermedad crónica o contagiosa:
4. A quien practique y disemine doctrinas que puedan alterar el sistema de gobierno o el régimen político de la República o que afecten a la integridad nacional; y,
5. A quien se ocupe habitualmente de prácticas ilegales, irreconciliables con los principios de la moral y las buenas costumbres.(Ley de Naturalización, 2012)

Para este trámite debe procederse a realizar una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a la que se acompañará una serie de documentación que acredite su existencia legal, su desempeño laboral, su solvencia personal, moral y económica a través de documentos conferidos por instituciones públicas y privadas, además de demostrar con un certificado médico su condición de salud. Una vez aceptado a trámite demora un promedio de 3 meses con un costo aproximado de 700 dólares por concepto de aranceles consulares y diplomáticos (Trámites Ecuador, 2013).

2.1.1.3.2. Derechos de los ciudadanos ecuatorianos

Como se ha manifestado anteriormente, se consideran ciudadanos a todos los ecuatorianos seanlo por nacimiento o por naturalización. Esto implica que los derechos consagrados en esta

Constitución aplican para todos ellos sin discriminación, según lo que prescribe el artículo 11 numeral 2:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. [...] (Constitución del Ecuador, 2008).

Estos derechos se enmarcan en lo que se relaciona al Buen Vivir o *SumakKawsay*, que dentro de la cosmovisión andina implica un modelo de desarrollo y paradigma de la sociedad que determina la armónica relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza que le rodea, preocupándose por la satisfacción de las necesidades humanas pero en concordancia al respeto y consideración del medio natural y social para llegar al desarrollo integral de la persona con enfoque holístico.

Estos derechos, por lo tanto se refieren al derecho al agua, a la alimentación, al ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura, a la ciencia, a la educación, a la vivienda, a la salud, al trabajo y a la seguridad social; además se consignan ciertas garantías constitucionales como mecanismos para proteger el libre acceso a estos derechos.

En cuanto a los derechos políticos se establece lo que a continuación se transcribe:

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:

1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional.
8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten.

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable.

Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.

Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.

Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes:

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta.

2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista (Constitución del Ecuador, 2008).

Estos derechos se refieren a la participación en la vida democrática, no únicamente a través del voto en el sufragio sino también en cuanto a la consulta y la fiscalización. Lo interesante de esta premisa constitucional es notar que los extranjeros, ha de entenderse que no naturalizados, también tienen estos derechos políticos, y el derecho al sufragio siempre y cuando cumplan con un tiempo mínimo de 5 años de residencia legal en el Ecuador.

2.1.1.3.3. Obligaciones de los ciudadanos ecuatorianos

En esta Constitución no se les llama obligaciones sino responsabilidades y son:

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.
2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar.
3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales.
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir.
8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.
9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios.

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley.
12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética.
13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos.
14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.
15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley.
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente(Constitución del Ecuador, 2008).

Se colige entonces que estas responsabilidades están relacionadas directamente con el comportamiento que se espera de una persona para la construcción de una sociedad democrática, organizada, ordenada que finalmente es el objetivo de cualquier país considerado como civilizado.

2.1.1.3.4. Los extranjeros en la Constitución del Ecuador del 2008

En cuanto a los extranjeros, la Constitución ha estipulado lo siguiente: “Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”(Constitución del Ecuador, 2008).

A criterio de María Daniela Dávalos:

Esta última frase que dice “de acuerdo a la Constitución” es una fórmula para indicar que la norma general tiene limitaciones establecidas en el mismo texto, es decir que hay excepciones a la norma general de igualdad de derechos. Esta es una aclaración muy relevante para el análisis de otros temas en la Constitución, pues si la norma no estableciera limitaciones sería una prohibición total para cualquier tipo de diferencia entre nacionales y no nacionales. Consecuentemente, se les debería reconocer todos los derechos, sin diferencia por nacionalidad (Dávalos Muirragui, 2008, pág. 90).

En esta Constitución no existe ningún capítulo dedicado a los extranjeros, como así era en la de 1998, propiciando de esta manera la concreción del principio de la ciudadanía universal basado en el derecho a la libre movilidad, con el objetivo de “el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países” (Constitución del Ecuador, 2008)¹.

Así mismo, hay que mencionar que de acuerdo al artículo 61 último inciso y en el 63 se establece que los extranjeros, que por lo menos hayan residido 5 años legalmente en el país tienen derecho a elegir Presidente y Vicepresidente, lo cual implica una clasificación entre los no nacionales, a los cuales, si reúnen los requisitos del tiempo se les reconoce el derecho al voto pero no a ser elegidos, consultados o fiscalizar; y, por otro lado, a quienes no han completado este tiempo, no se les otorga ningún tipo de derecho político, así:

Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier cargo.

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.
(Constitución del Ecuador, 2008)

¹Artículo 416, numeral 6.

2.1.1.3.5. Estipulaciones de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico del Ecuador

El Ecuador al ser un estado de Derechos y democrático tiene como máxima normativa a la Constitución, que se convierte por lo tanto en el parámetro al que deben ajustarse todas las demás leyes en la escala jerárquica del ordenamiento legal, además de observar los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que el Ecuador haya ratificado.

Es importante entonces conocer acerca de las consideraciones que tienen varios cuerpos legales respecto de los ciudadanos, entendidos tanto como en su noción sociológica como jurídica y constitucional.

2.1.1.3.5.1. Código Civil

El Código Civil vigente es el publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 46 del 24 de junio del 2005, con una reforma publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 732 del 26 de junio del 2012 referente al Libro IV. Este cuerpo legal norma acerca de las conceptos y relaciones básicas en el ámbito civil del Ecuador.

En cuanto a los ciudadanos, este Código habla de ellos en el Libro I dedicado al tratamiento de las personas. Así se tiene:

Art. 13.- La ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna.

Art. 41.- Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.

Art. 42.- Son ecuatorianos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son extranjeros.

Art. 43.- La Ley no reconoce diferencia entre el ecuatoriano y el extranjero, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código (Código de lo Civil, 2012).

Estos artículos por lo tanto, someten al conocimiento de la ley a todos quienes se encuentran en territorio nacional, sea por la circunstancia que fuera, y así mismo se somete a lo prescrito en la Constitución para la consideración de “ecuatorianos” o lo que vendría a ser lo mismo, ciudadanos (uniéndose nuevamente el concepto de ciudadanía con la noción de nacionalidad).

2.1.1.3.5.2. Código Penal

Este cuerpo legal trata acerca de las infracciones consideradas como delitos o contravenciones dentro del territorio ecuatoriano. Los artículos que hablan acerca de los ciudadanos son los que a continuación se transcriben:

Art. 3.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquéllos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa.

Art. 5.- Toda infracción cometida dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas, salvo disposición contraria de la ley. (...)

Los extranjeros que incurran en alguna de las infracciones detalladas anteriormente, serán juzgados y reprimidos conforme a las leyes ecuatorianas, siempre que sean aprehendidos en el Ecuador, o que se obtenga su extradición (Código Penal, 2013).

Establece que la ignorancia de la ley no le exime de cumplirla, tal como acontece con el Código Civil, y la distinción que hace respecto a los ciudadanos se refiere a la nacionalidad identificándoles como ecuatorianos y como extranjeros. Se observa también que en el caso de

delitos cometidos por extranjeros, estos se someterán a la extradición si es que se hallaren fuera del territorio nacional.

No obstante, vale la pena mencionar que a partir del mes de agosto del año 2014 entrará en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el mismo que compila en un solo cuerpo legal todas las normas referentes a normas rectoras, la infracción penal, procedimientos y ejecución, derogando entre otras leyes al actual Código Penal.

El COIP no hace ningún tipo de diferenciación entre ecuatorianos o extranjeros pues se refiere a las personas que intervienen en la infracción penal o en su juzgamiento por el nombre que la doctrina penal les otorga, por lo cual, el concepto de ciudadanía es un tema indiferente en este cuerpo normativo.

2.1.1.3.5.3. Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia

Llamada también Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador entró en vigencia el 4 de febrero del 2012, su propósito es normar las cuestiones referentes a los temas electorales y la Función Electoral, además de las garantías y procedimientos que deben llevarse en el proceso contencioso electoral.

Este Código se apega textualmente a todo lo que prescribe la Constitución respecto a los derechos políticos de los ecuatorianos estableciendo que esta ley estipulará los derechos de los que gozarán los extranjeros, por ejemplo, en cuanto al derecho al voto se manifiesta lo siguiente:

Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas.

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. (...) (Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 2013).

En general, se tiene presente que para optar a la candidatización para alguna dignidad de elección popular es requisito imprescindible ser ecuatoriano por nacimiento. Así mismo solamente quienes tengan derecho al sufragio podrán afiliarse o desafiliarse de un partido u organización política.

2.1.1.3.5.4. Ley de Registro Civil

Esta Ley proviene de la época de las dictaduras militares, expedida a través del Decreto Supremo N° 278 del 21 de abril de 1976.

Es una ley que regula las actuaciones del Registro Civil como institución y establece los parámetros para la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones. Respecto a lo referente a la ciudadanía, esta Ley se ocupa de:

Art. 6.- Registros especiales.- El Departamento de Registro Civil llevará los siguientes registros especiales:

1. De naturalización, en el cual se inscribirán las cartas de naturalización expedidas por el Presidente de la República;

2. De reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana resuelto por el Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
3. De pérdida o recuperación de la nacionalidad ecuatoriana.

Una vez inscrita la pérdida o recuperación de la nacionalidad, el Departamento de Registro Civil procederá a subinscribirla en la correspondiente inscripción de nacimiento o, si fuere del caso, en la de naturalización, y, además, remitirá una copia de la misma al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la oficina en donde repose la inscripción original, para la consiguiente subinscripción, y otra al Departamento de Cedulación, para los efectos de ley.

Art. 11.- Aviso sobre modificaciones de derechos políticos.- La pérdida o suspensión de los derechos políticos deberán ser comunicados por la autoridad que las declare, al Departamento de Cedulación, una vez ejecutoriada la providencia respectiva, para la correlación de los datos (Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 2013).

Esto significa que el Registro Civil se convierte en una entidad de apoyo para la organización de la sociedad en cuestión de ejercicio político pues será en gran medida, la institución que reciba y archive la información respecto a los ecuatorianos en general

2.1.1.3.5.5. Ley de Migración

La Ley de Migración se promulgó en el Registro Oficial N° 563 del 12 de abril del 2005. Regula lo concerniente a la entrada y salida de personas del territorio ecuatoriano mediante el examen y calificación de los documentos necesarios para tal actividad. Este servicio de migración será de competencia de Policía Nacional del Ecuador.

En esta ley, se establecen ciertos criterios para excluir o negar visas a los extranjeros que se hallen en las siguientes condiciones:

[Art. 9] I.- Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o hubieren sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que no sean políticos;

II.- Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro certificado especial de viaje, reconocido por convenios internacionales vigentes para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano;

III.- Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se encuentren acompañados de sus representantes legales o viajen con autorización expresa de éstos, autenticada ante un funcionario del servicio exterior ecuatoriano;

IV.- Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten de ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular;

V.- Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su admisión;

VI.- Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado para que un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país;

VII.- Que padezcan de enfermedades calificadas como graves, crónicas y contagiosas, tales como la tuberculosis, lepra, tracoma y otras similares no sujetas a cuarentena. Respecto a individuos atacados por enfermedades tales como peste bubónica, cólera, fiebres eruptivas y otras, se procederá con arreglo a las normas del Código de la Salud y el Código Sanitario Panamericano; y,

VIII.- Que sufran de psicosis aguda o crónica y los inválidos a quienes su lesión les impide el trabajo, excepto cuando cuenten con suficientes recursos económicos que asegure que no serán una carga para el Estado Ecuatoriano.

Art. 10.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos en calidad de inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos:

I.- Que no se hubieren inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades;

II.- Que no hubieren obtenido la cédula de identidad ecuatoriana;

III.- Que se hubieren ausentado o ingresaren en calidad de no inmigrantes; y,

IV.- Que permanecieren en el exterior más de noventa días en cada año durante los dos primeros años de su admisión e inscripción o más de dieciocho meses consecutivos en cualquier tiempo o dieciocho meses o más con intermitencia durante cinco años.

Art. 11.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos con anterioridad en calidad de no inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos:

I.- Que hubieren permanecido mayor tiempo que el autorizado en su admisión de acuerdo con su categoría migratoria, hayan o no sido objeto de sanción penal;

II.- Que hubieren cambiado de hecho su calidad o categoría migratorias;
y,

III.- Con excepción de los transeúntes, los que no se hubieran inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. (Ley de Migración, 2013)

De la misma manera, en esta ley se establecen claramente las causas de deportación y que pueden resumirse en: haber ingresado al país ilegalmente, haber excedido el tiempo concedido para su permanencia, encontrarse en alguna de las causales de exclusión, haber sido sentenciado por la justicia ecuatoriana o tratarse de un delincuente común con prontuario conocido en su país de origen o de dónde provino²(Ley de Migración, 2013).

Para este trámite se seguirá un procedimiento primero ante el Intendente de Policía, quien procederá de oficio ante un extranjero que adecue su situación migratoria a lo antes descrito³; si el extranjero está detenido será conducido ante el juez de contravenciones y en audiencia se presentarán los alegatos respectivos; el juez tendrá 48 horas para pronunciar su sentencia acerca de la deportación o no del extranjero⁴. (Ley de Migración, 2013).

Así mismo es importante exponer lo que explica el art. 31 de la Ley de Migración:

Art. 31.- Cuando la orden de deportación no pudiera efectuarse por tratarse de un apátrida, por falta de documentos de identidad u otra causa justificada, la jueza o juez de contravenciones actuante lo pondrá a disposición del Juez Penal competente para que sustituya la prisión preventiva por alguna de las Medidas alternativas previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, mientras se logre la ejecución de la orden de deportación. Transcurrido el plazo de tres años sin que se ejecute la orden de deportación se regularizará su permanencia en el país.

² Art. 19

³ Art. 23

⁴ Art. 26

Lo antes mencionado puede entenderse que, en la situación de apátrida, el Estado ecuatoriano pone un “período de prueba” en el cual se halla sometido al control de la administración de justicia, vencido el cual, le permitirán la permanencia en el país, aunque no la ciudadanía, evidentemente que podrá conseguirla una vez el extranjero manifieste su interés en ello, haciendo el trámite pertinente.

2.1.1.3.5.6. Ley de Extranjería

La Ley de Extranjería se halla vigente desde su publicación en el Registro Oficial N° 453 del 04 de noviembre del 2004. Este cuerpo legal norma lo concerniente a los extranjeros en el Ecuador y las diferentes modalidades y cualidades de inmigración. La autoridad administrativa es la Dirección Nacional de Extranjería, adscrita al Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades. Para lo referente a las visas para no inmigrantes, se actuará según lo dispuesto por las políticas emanadas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Ley de Extranjería divide a los extranjeros que buscan ingresar al territorio nacional en dos categorías: inmigrantes y no inmigrantes, quienes están descritos de la siguiente manera:

Art. 9.- Considérase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación:

I.- Para vivir de sus depósitos, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que se traslade al país.

II.- Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o en certificados, títulos o bonos del Estado o de instituciones nacionales de crédito.

III.- Para invertir su capital en cualquier rama de la industria, agricultura, ganadería o del comercio de exportación, en forma estable y distinta a la de sociedad por acciones.

IV.- Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el país.

V.- Para ejercer una profesión liberal o una profesión técnica, con arreglo a las normas de la Ley de Educación Superior.

VI.- En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría; y,

VII.- Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas dentro de las otras categorías descritas en este artículo, y que de conformidad con lo que requiera el reglamento correspondiente y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, garanticen ingresos suficientes y estables para el sustento económico del inmigrante y sus dependientes(Ley de Extranjería, 2013).

Art. 12.- Considérase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan a continuación:

I.- Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales calificados pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro el Ecuador y los representantes de las misiones especiales acreditadas ante el Gobierno del Ecuador, y sus familiares más cercanos.

II.- Altos funcionarios de otros Estados y personalidades amparadas en pasaportes diplomáticos, y sus familiares más cercanos.

III.- Empleados privados y domésticos de las personas citadas en los numerales anteriores, y sus familiares más cercanos.

IV.- Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares más cercanos.

V.- Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental, y sus familiares más cercanos.

VI.- Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados que sean llamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar labores temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y sus familiares más cercanos.

VII.- Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a labores asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos.

VIII.- Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente para desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más cercanos.

IX.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudio, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la importación simultánea de bienes. Esta categoría podrá amparar también a extranjeros en caso de que no les fueren aplicables las categorías descritas en este artículo, cuando previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, su presencia en el país fuere debidamente justificada, de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto.

X.- Transeúntes, comprendidos en las siguientes subcategorías:

1.- Personas que desembarcan hacia las zonas de tránsito directo con oportunidad de las escalas técnicas de las naves marítimas o aeronaves para proseguir su viaje en la misma nave o en otras provista por la misma empresa.

2.- Personas que ingresan al territorio nacional para dirigirse al país de destino, para abordar una nave que los transportará al exterior o en cumplimiento de servicios en la conducción de vehículos de transporte terrestre internacional.

3.- Visitantes temporales con los fines previstos en el número IX de este artículo, durante un período no mayor de tres meses en cada año; y,

4.- Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras colindantes con las fronteras ecuatorianas y que requieran transitar diariamente en las poblaciones limítrofes nacionales.

XI.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como negocios, inversión, actividades empresariales, comerciales, industriales o profesionales, y que requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano(Ley de Extranjería, 2013).

Todos los extranjeros con calidad de inmigrantes que hayan obtenido la visa respectiva para su permanencia, deberán registrarse en Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, para efectos de que se le conceda del domicilio político en el Ecuador⁵, es decir, que puedan ejercer el derecho al voto cuando existan elecciones en sus países de origen. Además la Ley establece que:

Art. 18.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido legalmente inscritos, recibirán un certificado suscrito exclusivamente por el Director del Departamento Consular que constituye autorización para obtener la cédula de identidad ecuatoriana, único documento oficial que acreditará la legalización de su permanencia en el país.

Art. 19.- Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, con excepción de los transeúntes, que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán una constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su delegado, en la respectiva documentación migratoria, con lo que acreditarán la legalización de su permanencia, con la excepción de no tener derecho a obtener la cédula de identidad ecuatoriana.

⁵ Art. 17

Art. 20.- La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en calidad de inmigrantes de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el sistema legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica en la legislación nacional(Ley de Extranjería, 2013).

2.1.1.3.5.7. Reglamento a la Ley de Extranjería

Se promulgó mediante Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial N° 473 del 07 de julio de 1986, siendo modificado el 02 de agosto del 2012. Este Reglamento se ocupa de regular lo concerniente a la concesión de visas. Impone ciertas obligaciones a los funcionarios ecuatorianos respecto de varias circunstancias relacionados con los extranjeros, así:

Art. 53.- Todos los jueces y tribunales penales estarán obligados a poner en conocimiento del Director General de Extranjería, la filiación de los extranjeros, sobre quienes se hubiere dictado auto de apertura del plenario, así como la resolución final que se dicte sobre el caso.

Art. 54.- Todos los funcionarios del Registro Civil que autoricen los cambios de estado civil relativos a extranjeros estarán obligados a notificar al Director General de Extranjería dichas modificaciones dentro de los treinta días siguientes a la respectiva inscripción.

Art. 55.- Todos los funcionarios y empleados estatales, provinciales o municipales, así como los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales de justicia de la República, los notarios y registradores, contadores públicos, agentes y corredores de comercio, empresarios, representantes de entidades descentralizadas, de cooperativas de colegios profesionales, de organizaciones sindicales y en general de toda agrupación económica, social o cultural, deberán exigir a los extranjeros que tramitan ante ellos asuntos de su competencia o que realicen gestiones para obtener empleo o colocaciones lucrativas, que previamente les demuestren con la presentación de su pasaporte o cédula de identidad o ambos, su legal permanencia en el Ecuador y que la calidad y categoría migratorias que posean les permite realizar el acto o contrato que se proponen efectuar, en los casos en que tales actos o contratos dependan de la calidad migratoria del

extranjero. Sin embargo, si la obtención de la visa dependiere de un acto que deba otorgarse ante notario o inscribirse en cualquier registro, primeramente se otorgará tal acto o se efectuará el registro.

Art. 62.- Cuando se llegare a comprobar que un extranjero portador de visa debidamente inscrita en el Registro de Extranjeros, está incurso en una de las causales de exclusión determinadas en el Capítulo IV de la Ley de Migración, el Director General de Extranjería de conformidad con el Art. 23 de la Ley de Migración le comunicará al Intendente General de Policía para efectos de la acción de deportación.(Reglamento a la Ley de Extranjería, 2013)

Básicamente se imponen los lineamientos que han de seguirse para la concesión de las diferentes clases de visas de acuerdo a la categoría de inmigrantes o no inmigrantes. Este tipo de reglamentación o legislación es concordante en el mundo entero puesto que por obedecer al principio de soberanía nacional, son las autoridades de un país quienes deciden a quién permiten el ingreso a su territorio y a quien no, por las razones que casi siempre obedecen a la idoneidad de la conducta o de la salud del extranjero.

Como se puede observar, se establecen unos requisitos mínimos para aquellas personas que desean permanecer indefinidamente en el Ecuador; y por mandato constitucional se ha eliminado la percepción de “migrante ilegal” para balancear las relaciones norte – sur y también por cierta reciprocidad esperada para los compatriotas ecuatorianos migrantes en otras latitudes, puesto que no se puede olvidar que:

En la actualidad existe un estimado de 200 millones de migrantes en el mundo, los cuales normalmente “son actores pasivos, por tanto poco o nada se hace en las instancias de gobierno para su involucramiento en actividades de gestión, producción y reproducción económica, tecnológica, cultural y social que les beneficie a ellos y sus familias”, sin tomar en cuenta la situación de los migrantes considerados “ilegales”, que representan entre el 10 y 15% del total de migrantes [...] y que en la mayoría de los casos no son reconocidos sus derechos. (Valle Franco, 2009, pág. 40)

Sin embargo, y a pesar de la intención de equilibrio no debe confundirse la ciudadanía universal con la libre movilidad, puesto que una persona debería ser capaz de transitar libremente por el territorio del mundo, pero es evidente que se requiere un cierto control por parte de las autoridades para evitar que tal tránsito resulte pernicioso para la sociedad, que es en definitiva, la razón de ser del Estado.

El principio de ciudadanía universal resulta ser extremadamente utópico, pues difícilmente los países del mundo dejarán de lado los intereses particulares para posibilitar que las personas transiten por su territorio. En algunas ocasiones se pone de ejemplo a la Unión Europea y a su visa Schengen, que permite que los ciudadanos de los países miembros circulen entre los países sin necesidad más que de su pasaporte; no obstante se debe recordar que la concreción del bloque europeo llevó largos años de negociaciones, que el ingreso tiene estándares altos para garantizar la igualdad económica, social y política entre sus países miembros y que los extranjeros extra – comunitarios deben cumplir con requisitos estrictos para el ingreso a cualquiera de los países de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta que el Ecuador es parte de algunos bloques de integración multilateral regional y que hasta el momento no se ha logrado una cooperación como la del bloque europeo, refuerza la teoría de que la ciudadanía universal, esperada por Ecuador, está todavía muy lejos de ser una realidad material y que es posible más bien, que tal disposición contenida en la Constitución puede ocasionar que se beneficien quienes quieran actuar en contra del bienestar común de los ecuatorianos.

2.1.1.4. Deontica Jurídica

La lógica deontica se conceptualiza como:

Rama de la lógica, opuesta a la lógica proposicional, que tiene por objeto el estudio de la validez o no validez de las proposiciones, en lugar de la determinación de su verdad o falsedad.

Al tener como objeto de estudio un discurso normativo la lógica deóntica fue acusada, por los neopositivistas y los filósofos del Círculo de Viena, de incurrir en la llamada "falacia naturalista". Sin embargo, los posteriores estudios, en los años 50 y 60, de R. M. Hare, entre otros, parecen haber permitido soslayar dicha acusación.(Diccionario de Filosofía)

Es decir, la deóntica sirve para que se expidan proposiciones válidas antes que se verifiquen como verdaderas o falsas. En el caso de las leyes, la lógica deóntica se denomina como deóntica jurídica y sirve para que las leyes y textos jurídicos que se redactan en base a ellos tengan validez de acuerdo a la realidad y al contexto socio – cultural en el que se expiden.

La llamada «lógica jurídica» es un área de interés técnico para juristas y abogados, en la que se estudia la aplicación de los recursos lógicos, que pueden implicar el uso de otras ramas de la misma disciplina, como la indicativa, formal, deóntica, tradicional, simbólica, retórica, argumentación, &c.

Sin lugar a dudas uno de los aspectos fascinantes de la lógica jurídica es la forma en que se relacionan los elementos de los juicios y argumentos, y, por supuesto, las acciones consecuentes, sobre todo en una época en la que parece que la justicia tiene más aspectos argumentativos que formales.

La lógica deóntica es una rama formal que emplea y simboliza fundamentalmente material lingüístico relacionado con la función normativa en sentido lato (ley, moral, religión, &c), sus razonamientos y las estructuras formales de la comunicación. Una de sus peculiaridades es el uso de operadores deónticos o modalidades, palabras o conceptos que caracterizan al lenguaje normativo y a la conducta consiguiente. Los conectivos permiten estudiar los miembros y las interrelaciones que componen las distintas expresiones normativas. (Cadena Roa & Ángel, 2010)

Es de vital importancia que los juristas y los legisladores conozcan acerca de la deóntica jurídica puesto que únicamente con este conocimiento se puede llegar a materializar una ley o un contenido jurídico que tengan una concatenación entre la norma suprema y las de menor jerarquía.

Por ejemplo, es importante que no existan contradicciones entre normas de la misma jerarquía o entre superiores e inferiores, lo cual implica que sin necesidad de que sean una verdadera y la otra falsa o ambas verdaderas o ambas falsas, permita una lo que expresamente prohíbe la otra.

Si bien es cierto que la normativa constitucional es la máxima legislación, a la que deben encuadrarse las demás normas en el ordenamiento jurídico, no es menos cierto que debe, pese a todo, ser una norma que garantice la convivencia pacífica entre todas las personas ante quienes ejerce influencia; además no debe confundirse entre derechos fundamentales (derecho a la vida, a la libertad, etc.) con los derechos legales, como podría ser considerado el derecho a la ciudadanía que en muchísimas ocasiones se confunde con el derecho a la libre movilidad.

2.1.2. Definiciones de términos básicos

2.1.2.1. Conceptos

- **CONTRADICTORIO.**- Cada una de las dos proposiciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega, y no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas.
- **DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES.**- Los derechos humanos reconocidos en la legislación vigente de un Estado determinado, se denomina **DERECHOS FUNDAMENTALES**, los cuales son garantizados por su poder coercitivo y han sido concebidos legítimamente por una ley.
- **ESTADO.**- Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.
- **ESTADO GLOBAL.**- El Estado global es un Estado mundial.
- **EXTRANJERO.**- Que es o viene de país de otra soberanía.
- **INVIABLE.**- Que no tiene posibilidades de llevarse a cabo.

- **LEY ESPECIAL.-** Las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual o particular. Constituyen un conjunto de normas que específicamente van dirigidas a un determinado sujeto y a ocasiones específicas.
- **MIGRANTE.-** Que migra o emigra.
- **PRINCIPIO JURÍDICO.-** los principios jurídicos se constituyen de aquellos principios específicos que, desde una cosmovisión dada, fundamentan a un orden jurídico.
- **PROPUGNAR.-** Defender, amparar.
- **REFERÉNDUM.-** Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone.
- **REQUISITO.-** Circunstancia o condición necesaria para algo.
- **TRATADO INTERNACIONAL.-** Es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación.
- **UTOPIÍA.-** Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación.

2.2. Hipótesis

Es inviable aplicar el principio de Ciudadanía Universal propugnado por la Constitución del Ecuador en el país por vulnerar la Ley de migración, siendo necesario tener normas claras en el país que no se contrapongan entre sí, para que los extranjeros que nos visitan, no confundan los límites de su estadía en el Ecuador.

2.3. Variables

2.3.2. Variable independiente

Existe contradicción entre el art. 416, numeral 6 de la Constitución que contiene el principio de la ciudadanía universal y la Ley de Migración y Extranjería que es la que regula el status de migrantes y no migrantes y los requisitos para residir en el país.

2.3.3. Variables dependientes

Violación de la norma constitucional de ciudadanía universal, al aplicarse la ley especial, lo que provoca confusión para las personas extranjeras que llegan al país y que son obligadas a cumplir con requisitos establecidos en los instrumentos de menor jerarquía jurídica.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación

Por el tema de investigación y los objetivos, la investigación es de tipo descriptivo, puesto que el tema de la ciudadanía universal es una cuestión poco estudiada, especialmente en el contexto del Ecuador, por lo que a través de la investigación bibliográfica y de campo se plantea ofrecer una visión panorámica del fenómeno social, el mismo que debe traducirse a indicadores que permitan la formulación de una propuesta coherente con la información recolectada.

3.1.1. Investigación bibliográfica

Se incluyó también la investigación Documental y Bibliográfica porque la fuente fueron los libros existentes sobre el tema, y así profundizar, aprender y generar el conocimiento sobre la importancia del principio de ciudadanía universal y la no aplicabilidad del mismo en el marco jurídico actual del Ecuador.

3.1.2. Investigación de campo

Se aplicó la Investigación Cualitativa porque ayudó a entender el fenómeno social y sus características. Debido a que se orienta a profundizar datos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es medir sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada.

3.2.Población y muestra

Esta investigación se aplicó en la ciudad de Quito en la Dirección Nacional de Extranjería, donde se entrevistó a 5 Agentes de la Policía Nacional especializados en migración y extranjería, a 35 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, a 5 abogados conocedores del tema y finalmente a 5 personas extranjeras en el Ecuador.

Cuadro 1: Población y Muestra

POBLACIÓN	MUESTRA
1. Extranjeros	5
2. Abogados	5
3. Agentes de Migración	5
4. Estudiantes universitarios UCE	35
TOTAL	50

Elaborado por: El autor

3.3.Métodos

3.3.1. Método científico

El método científico quiere descubrir la realidad de los hechos y estos, al ser descubiertos, deben, a su vez, guiar el uso del método. Entre tanto como ya se dijo, el método es apenas un medio de acceso: solo la inteligencia y la reflexión descubren lo que los hechos son realmente.

Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia o sea los métodos científicos de que se vale el investigador hará llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente.

Dentro de este método se pueden desagregar a los siguientes que fueron relevantes para la realización de este trabajo de investigación:

- **Método Inductivo.-** Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es el método más usual y se caracteriza por cuatro etapas: La Observación (y el registro de los hechos), el análisis (y la clasificación de los hechos), La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la contrastación.
- **Método Deductivo.-** Es un método científico que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: Si el razonamiento deductivo es válido, y las premisas son verdaderas, la conclusión solo puede ser verdadera.

Este es el proceso indisoluble la correlación entre el analítico y síntesis el proceso analítico sintético.

- **Método Sistémico.-** En virtud de la consideración de que el derecho no es como se cree una norma. Es el conjunto de normas que tienen la característica de unidad a la que nos referimos cuando hablamos de un sistema, por tanto, es imposible captar la naturaleza del Derecho si limitamos nuestra atención a una norma jurídica aislada.

3.3.2. Técnicas

3.3.2.1. Observación

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica.

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

3.3.2.2. Entrevista

Aquella que se realiza sobre personas conocedoras del tema, un dialogo entre dos personas: el Entrevistador y el Entrevistado; se realiza con el Fin de obtener información por parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación.

3.3.3. Instrumentos

3.3.3.1. Formulario de cuestionario

Cuadro 2: Cuestionario

<p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ESCUELA DE DERECHO ENTREVISTA</p> <p style="text-align: center;">Tema: <u>La no aplicación del principio de ciudadanía universal propugnado por la Constitución del Ecuador por vulnerar la ley de migración</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Conoce usted acerca del principio de ciudadanía universal?2. ¿Qué opina de la inclusión de este principio en la Constitución del Ecuador del 2008?3. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que se presenta con la llegada de extranjeros a nuestro país cuando estos no vienen únicamente a hacer turismo?4. ¿Considera usted que la inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución confunde a los extranjeros, lo cual hace que los requisitos de permanencia contenidos en la Ley de Extranjería se vulneren?5. A su criterio, ¿Considera que este principio de ciudadanía universal es aplicable en el Ecuador? ¿Por qué?6. En su opinión ¿debería realizarse una reforma constitucional que elimine el principio de ciudadanía universal, por no ser viable de acuerdo a la realidad ecuatoriana en la actualidad?7. ¿Cuál cree usted que debería ser la política migratoria óptima para el Ecuador?
--

Elaborado por: El autor

3.4.Recolección de información

Cuadro 3: Plan de Recolección de Información

PREGUNTAS BÁSICAS	EXPLICACIÓN
1.- ¿Para qué?	Para alcanzar los objetivos de investigación.
2.- ¿De qué personas u objetos?	Extranjeros Abogados Agentes de Migración Estudiantes Universitarios
3.- ¿Sobre qué aspectos?	Matriz de operacionalización de variables
4.-¿Quién?-¿Quiénes?	El investigador
5.- ¿Cuándo?	Abril 2014
6.- ¿Dónde?	Quito, Universidad Central del Ecuador, Jefatura Provincial de Migración
7.- ¿Cuántas veces?	Una
8.- ¿Qué técnicas de recolección?	Entrevista
9.- ¿Con qué?	Guía-cuestionario
10.- ¿En qué situación?	Contextual

Elaborado por: El autor

3.5. Procesamiento y análisis de la información

Los Métodos de Procesamiento de Datos son: Los diferentes métodos de procesamiento y están relacionados con el avance tecnológico. Las alternativas presentadas podrán ser elegidas, dependiendo de la rapidez con que se necesita y la investigación en dinero que se requiera para obtenerla.

- **Tabulación:** Es un proceso que implica la expresión de los datos recolectados por medio de una tabla es denominada “matriz de vaciado”, y contiene por un lado, las preguntas y las alternativas de respuesta del instrumento, debidamente codificadas, y por otro, el número de orden correspondiente a cada unidad de análisis.

Existen varias técnicas para almacenar datos pero los tipos de procesamiento que se van a utilizar son los siguientes:

- Proceso Manual.-** Este es el proceso más antiguo e involucra el uso de los recursos humanos, tales como realizar cálculos mentales, registrar datos con lápiz y papel, ordenar y clasificar manualmente. Los resultados se expresan de manera escrita, creando grandes volúmenes de información escrita almacenada.
- Proceso electrónico.-** En este proceso se emplean las computadoras, por lo que la intervención humana no es requerida en cada etapa. Una vez ingresados a velocidades increíblemente altas. Un ejemplo práctico lo tenemos en el empleo de las computadoras personales que se usan en el hogar.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados obtenidos de la entrevista realizada

Pregunta N° 1: ¿Conoce usted acerca del principio de ciudadanía universal?

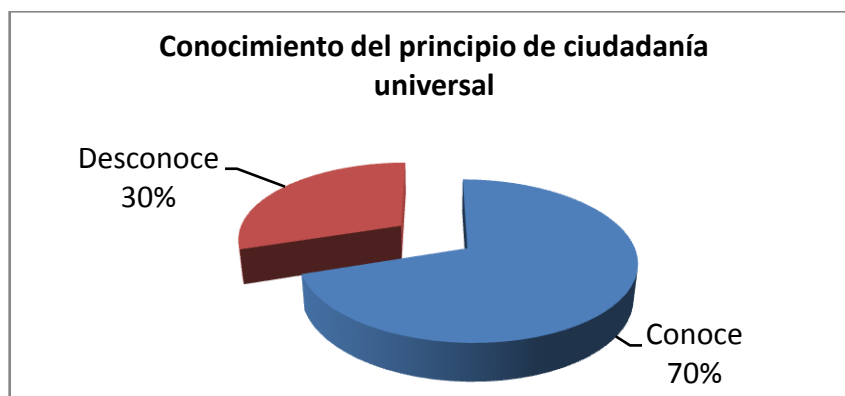
Cuadro 4: Conocimiento principio de ciudadanía universal

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Conoce	35	70%
Desconoce	15	30%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 2: Conocimiento principio ciudadanía universal



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación: La mayoría manifiesta tener conocimiento acerca del principio de ciudadanía universal, sin embargo de las respuestas obtenidas dentro de este grupo (70%), varios hacen referencia al principio de libre movilidad, confundiéndolo con el de ciudadanía universal. Entre quienes manifiestan no conocerlo, expresan que les gustaría conocerlo para entender a qué se refiere, tomando en cuenta los tiempos de globalización que actualmente se viven.

Pregunta N° 2: ¿Qué opina de la inclusión de este principio en la Constitución del Ecuador del 2008?

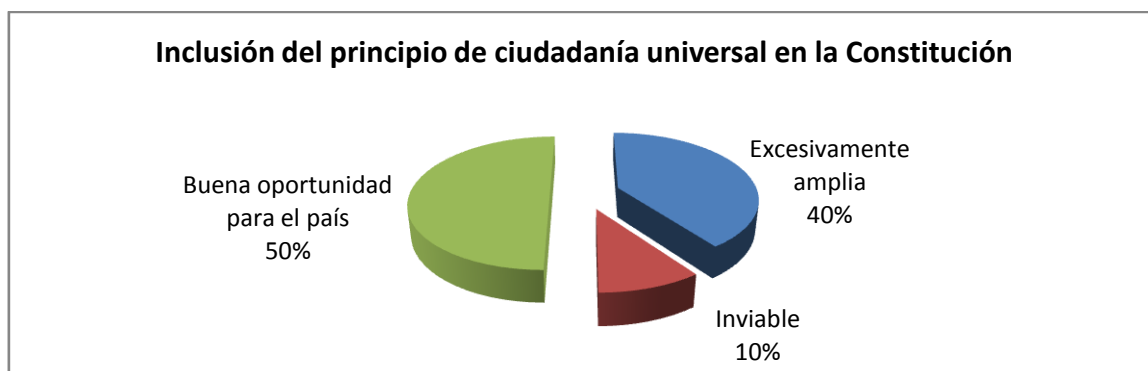
Cuadro 5: Inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Excesivamente amplia	20	40%
Inviabile	5	10%
Buena oportunidad para Ecuador	25	50%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 3: Inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos se desprende que existen dos tendencias: una a favor de la inclusión de este principio (50%) y otra en contra: unos por considerarlo que es excesivamente amplia tal inclusión (40%) y otros que definitivamente la consideran inviable (10%).

Quienes están a favor manifiestan que es una buena oportunidad para el país a fin de incentivar el turismo, de interés para el Gobierno actual, no obstante quienes se han manifestado en contra, opinan que es contraproducente colocarlo en la Constitución puesto que podría eventualmente ser demandado su inmediato cumplimiento, tal como lo establece el mismo cuerpo legal.

Pregunta N° 3: ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que se presenta con la llegada de extranjeros a nuestro país cuando estos no vienen únicamente a hacer turismo?

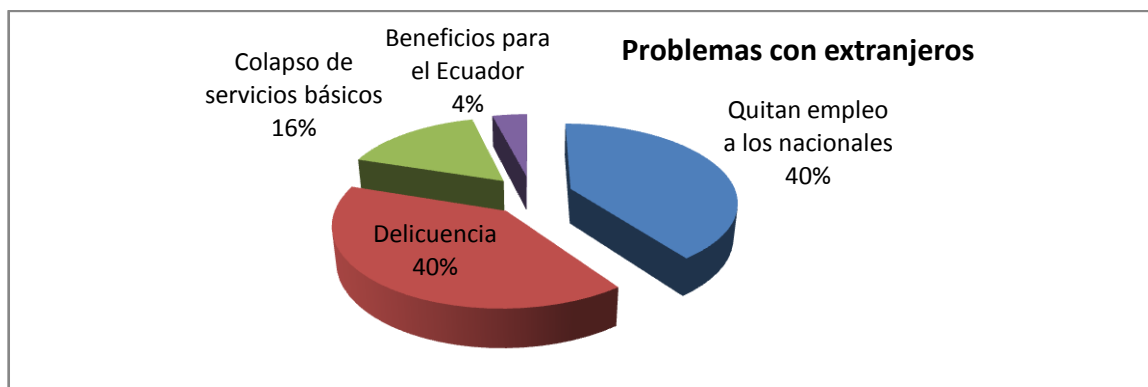
Cuadro 6: Problemas con extranjeros

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Quitan empleo a nacionales	20	40%
Delincuencia	20	40%
Colapso de servicios	8	16%
Beneficios para el Ecuador	2	4%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 4: Problemas con extranjeros



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: En los resultados de esta pregunta se observa que los criterios mayoritariamente se inclinan a ver desventajas y problemas al ingreso indiscriminado de extranjeros cuando éstos no vienen únicamente por turismo sino con las intenciones de fijar su domicilio en Ecuador. El 80% indica que el principal problema radica en que los extranjeros captan los empleos y los nacionales quedan potencialmente desempleados; y, así mismo varios extranjeros se ven involucrados en actos delictivos. Un 16% de los entrevistados manifiesta que la gran afluencia de extranjeros causa o causaría el colapso de los servicios básicos (vivienda, salud y educación) puesto que, hasta ahora, a nivel interno se presenta un déficit que difícilmente podrá ser solventado a corto plazo, más aun con la llegada de mayor población lo que, pondría mayor presión en el sistema público lo cual incidiría en la calidad de la atención.

Pregunta N° 4: ¿Considera usted que la inclusión del principio de ciudadanía universal en la Constitución confunde a los extranjeros, lo cual hace que los requisitos de permanencia contenidos en la Ley de Extranjería se vulneren?

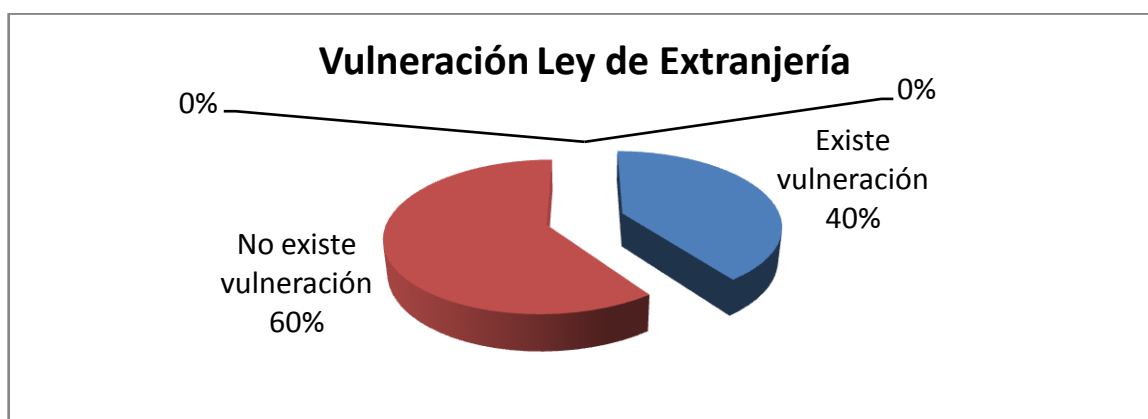
Cuadro 7: Vulneración Ley de Extranjería

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Existe vulneración	20	40%
No existe vulneración	30	60%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 5: Vulneración Ley de Extranjería



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: La mayoría de los entrevistados (60%) considera que no existe una vulneración de la Ley de Extranjería con la inclusión del principio de ciudadanía universal; es más algunos de quienes mantienen esta opinión manifestaron que los extranjeros difícilmente conocen la normativa constitucional y mucho menos podrían plantear estrategias para lograr la residencia legal basados en este principio puesto que la mayoría viene por turismo, y si buscan quedarse tienden a regularizar su situación migratoria una vez que ha fenecido el plazo que la ley concede para permanecer en territorio ecuatoriano sin necesidad de visa. Por otro lado, quienes mantienen que sí existe vulneración, explican que los extranjeros, al tener el país el régimen de puertas abiertas, permiten que los extranjeros no se empapen de los requisitos y pretendan extender su estadía más allá de los límites previstos en la ley.

Pregunta N° 5: A su criterio, ¿Considera que este principio de ciudadanía universal es aplicable en el Ecuador? ¿Por qué?

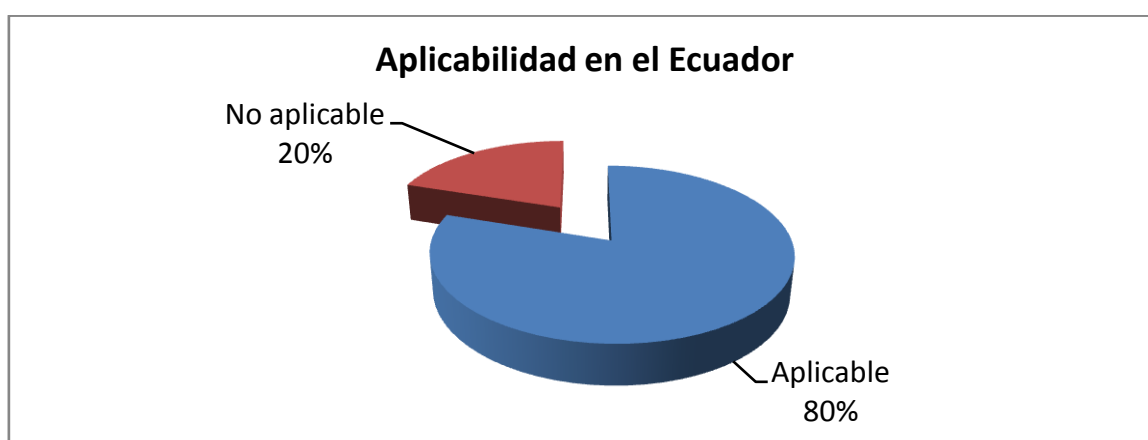
Cuadro 8: Aplicabilidad en Ecuador

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Aplicable	40	80%
No aplicable	10	20%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 6: Aplicabilidad en el Ecuador



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: A pesar de los resultados precedentes, la mayoría de entrevistados coincide en manifestar que el principio de ciudadanía universal podría ser de aplicación en el Ecuador. El autor de la investigación considera que este es un falso positivo, puesto que como se expuso en la primera pregunta, muchos de los entrevistados, que no eran profesionales del Derecho, confundían este principio de ciudadanía universal con el de libre movilidad, que inclusive podría ser inaplicable en el territorio ecuatoriano, argumentando cuestiones de seguridad nacional.

Por esta razón, es comprensible que la mayoría considere aplicable algo que en la práctica, puede ser extremadamente difícil de concretar, tomando en cuenta la legislación particular de cada país en el mundo.

Pregunta N° 6: En su opinión ¿debería realizarse una reforma constitucional que elimine el principio de ciudadanía universal, por no ser viable de acuerdo a la realidad ecuatoriana en la actualidad?

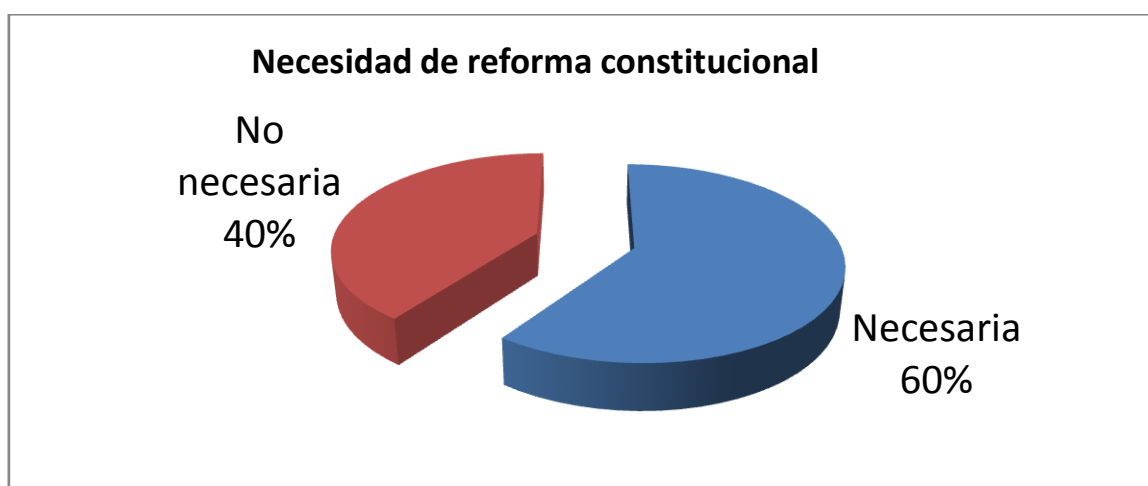
Cuadro 9: Necesidad de reforma constitucional

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Necesaria	30	60%
No necesaria	20	40%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 7: Necesidad de reforma constitucional



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: El 60% de los entrevistados manifiesta que debería existir una reforma constitucional que elimine este principio. A pesar de sonar contradictorio, estas personas consideran que es necesaria esta reforma puesto que si es un principio consagrado en la Constitución, tarde o temprano deberán ponerse en práctica debido a la progresividad de los derechos. Sin embargo, por la coyuntura política actual, es bastante probable que sea utilizado con fines demagógicos para conseguir adeptos y no exclusivamente para beneficiar a un segmento de la población definida, además, al parecer, pesa en la opinión el hecho de las desventajas que la presencia de extranjeros no turistas ha representado en el Ecuador: colapso de servicios públicos, aumento de desempleo, aumento de índice de criminalidad, etc.

Pregunta N° 7: ¿Cuál cree usted que debería ser la política migratoria óptima para el Ecuador?

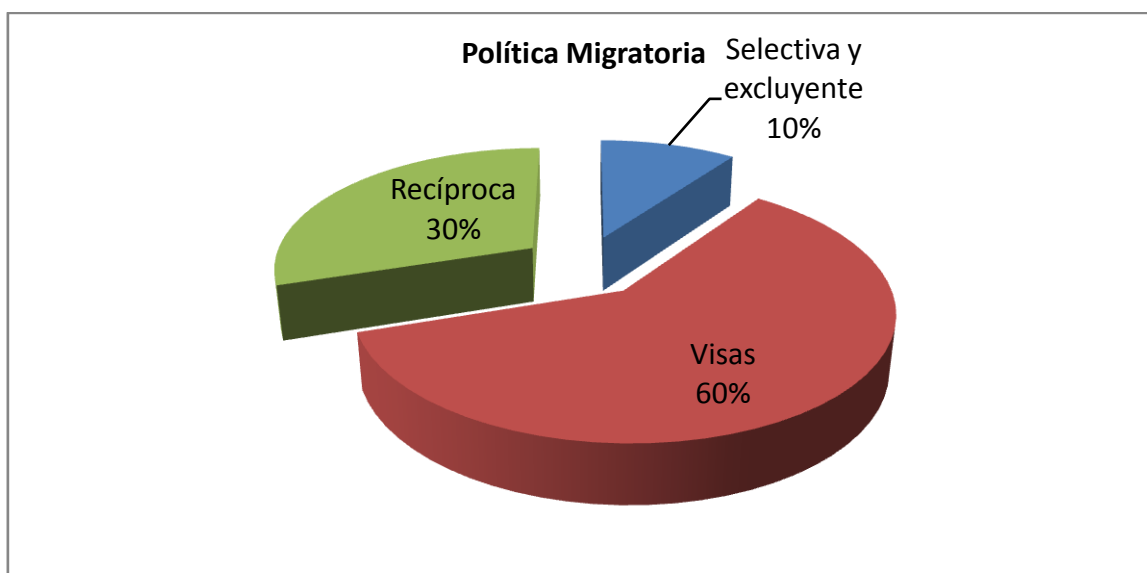
Cuadro 10 : Política Migratoria

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Selectiva y excluyente	5	10%
Visas	30	60%
Recíproca	15	30%
TOTAL	50	100%

Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Gráfico 8: Política Migratoria



Fuente: Entrevistas

Elaborado por: El autor

Análisis e Interpretación: Todos los entrevistados concluyeron que el Ecuador debe contar con una política migratoria que no es, en ningún caso, de puertas abiertas. El 60% se pronunció a favor de la exigencia de visas, más o menos como el modelo americano, en el que se contemplan visas de turista, de estudiante, de inversor, de trabajador calificado, de trabajador no calificado, etc. Un 30% opina que debería adoptarse una política que sea recíproca, tal como ocurre en Brasil, país que exige visa a quienes exigen visa para los brasileños; y finalmente un 10% cree que debería tener estándares más altos, como los que maneja la Unión Europea para quienes no son ciudadanos de los países de la UE.

Conclusiones

- 1) La ciudadanía universal es un principio que está contenido en la Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, en el contexto de una normativa garantista que se basa en la progresividad de los derechos humanos y en la búsqueda de la igualdad formal y material de todos los residentes del país.

Este principio en ocasiones se confunde con el principio de libre movilidad que busca que las personas no tengan restricciones para ingresar de un territorio a otro, eliminando de esta manera las fronteras y los requisitos previos para permanecer en un país.

- 2) El concepto de ciudadanía tiene su antecedente histórico en la antigua Grecia y desde esa época hasta la actualidad ha tenido una evolución que vincula lo sociológico con lo jurídico puesto que ciudadano se considera a quien ha nacido en un territorio determinado y por este hecho, le asisten unos derechos y debe cumplir con obligaciones desde y hacia el Estado que le otorga la nacionalidad.

- 3) En el Ecuador se consideran ciudadanos por nacimiento a quienes han nacido en el territorio ecuatoriano y a quienes son hijos de padre o madre ecuatorianos de nacimiento para conceder una nacionalidad al ser humano y evitar la figura del apátrida o sin patria; así mismo establece que puede obtener la ciudadanía quien complete el trámite de naturalización.

No obstante la Constitución estipula que los derechos humanos fundamentales les están garantizados a todos los seres humanos que residan en su territorio o que se encuentren en él de paso.

- 4) La Constitución del Ecuador del 2008 establece entre sus principios el de libre movilidad y también el de la ciudadanía universal, entendida como una nueva manera de relacionarse entre los países del hemisferio Sur con respecto de los países del hemisferio Norte.

Esta ciudadanía universal, si bien es cierto está contemplada de manera superficial en algunos instrumentos internacionales, no es menos cierto que hasta la fecha, ningún país en el mundo ha dado un paso significativo que logre la concreción de este objetivo; en Ecuador, sin embargo, se le ha consignado en el marco constitucional con lo que indudablemente, debe legislarse para hacerla posible.

- 5) Con la política migratoria actual, los extranjeros son libres de ingresar en el Ecuador sin necesidad de visa, excepto algunos de nacionalidades definidas; con esta acción se ha buscado beneficiar al turismo pero por la cercanía con el conflicto armado colombiano, lo que se ha logrado es dar refugio a miles de campesinos residentes en la frontera, entre los cuales se mezclan elementos indeseables que, se ha comprobado vienen a delinquir en Ecuador aumentando los índices de criminalidad e inclusive iniciando con modalidades criminales que no eran vistas en el país, tales como el sicariato.

Por otro lado, la cantidad de extranjeros pone una presión en los servicios básicos proporcionados por el Estado que ve rebasada su capacidad frente a la demanda de estos servicios con lo que se produce un indudable deterioro de la calidad de los mismos.

- 6) Es imprescindible que se reforme la Constitución por resultar que el principio de ciudadanía universal consagrado en ella, es prácticamente inviable de realizar y por ello, es preferible dejar de construir una sociedad utópica con postulados que lucen bien en el papel, pero que en la realidad sólo siembran una falsa expectativa.

Recomendaciones

- a) Debe utilizarse los mecanismos previstos en la Constitución para lograr una reforma en la misma, de manera que se elimine el principio de la ciudadanía universal por ser irrealizable en la práctica, por el sentido económico, político y social de tal postulado.
- b) Para la consecución de la igualdad formal y material de la que se habla en la Constitución no es necesaria que se considere a todos como ciudadanos, puesto que este concepto va más allá de la consideración sociológica, y deben considerarse más bien los vínculos jurídicos que nacen de este.
- c) La política migratoria del Ecuador, si bien es cierto no debe ser discriminatoria, no puede ni debe ser tampoco de “puertas abiertas” puesto que allí sí debería dejar ingresar a su territorio a todo tipo de persona con cualquier antecedente judicial. Podría adoptarse la reciprocidad como factor determinante para especificar permisos de entrada al país, o en el último de los casos, hacer un filtro primario tomando en cuenta nada más, que el antecedente policial o pasado judicial de una persona, atendiendo más que nada a la peligrosidad de la persona.

CAPITULO V

PROPUESTA

5.1.Justificación

El principio de ciudadanía universal resulta ser extremadamente utópico, pues difícilmente los países del mundo dejarán de lado los intereses particulares para posibilitar que las personas transiten por su territorio, el tema de la ciudadanía universal es poco estudiado, especialmente en el contexto del Ecuador, y por otra parte por la aparición del crimen organizado que ha visto en el tráfico de inmigrantes un mercado lucrativo y que usa a países como el nuestro para que las personas lleguen a los países objetivos de la migración.

La utilidad teórica y práctica se pone de manifiesto puesto que esta propuesta pretende ser elevada a ley, específicamente reformando la Constitución por lo cual esta utilidad está comprobada.

La originalidad de la propuesta se evidencia, así mismo, cuando se verifica que no existe una investigación parecida y mucho menos una propuesta como la que a continuación se explica.

Finalmente los beneficiarios de esta propuesta serán los ecuatorianos, que al año 2013 alcanzan los 15 millones de personas aproximadamente.

5.2.Objetivo

5.2.1. Objetivo general

Reformar la Constitución del Ecuador del año 2008, de manera que se elimine la frase “de ciudadanía universal” contenida en el artículo 416 numeral 6, por considerarse inviable en su aplicación.

5.2.2. Objetivos específicos

- Identificar la procedencia de la reforma constitucional propuesta, encaminada a la supresión de la frase “de ciudadanía universal” para que surta efectos legales.
- Determinar de qué manera la propuesta puede ser viabilizada con premura.
- Establecer el impacto que esta propuesta tendrá en las relaciones exteriores del Ecuador.

5.3.Ubicación sectorial y física

Al tratarse de una propuesta que afectará a la totalidad de la población ecuatoriana, su ubicación se determina en los límites del territorio nacional del Ecuador, con un área de 256,370 Km2. Está dentro del continente americano, en el hemisferio Sur, en la parte noroccidental. Sus límites son:

- ✓ Al norte con Colombia
- ✓ Al sur y al este con Perú
- ✓ Al oeste con el Océano Pacífico.

El Ecuador debe su nombre a que la Misión Geodésica determinó que la Línea Ecuatorial atravesaba el territorio, dividiéndolo en dos partes desiguales. Como parte de su territorio tiene una extensión de 200 millas náuticas pertenecientes al mar territorial y plataforma submarina.

Geográficamente Ecuador está conformado por 4 regiones determinadas naturalmente: Costa, región próxima al Océano Pacífico; Sierra, atravesada por la Cordillera de Los Andes; Oriente, constituida por frondosa selva tropical y Galápagos, archipiélago conformado por varias islas e islotes a 100km del territorio continental del Ecuador.

5.3.1. Mapa

Gráfico 9: Posición del Ecuador en el continente Sudamericano



Fuente:

https://www.google.com.ec/search?hl=es&site=imghp&tbn=isch&source=hp&biw=1440&bih=799&q=mapa+del+ecuador&oq=mapa+del+ecuador&gs_l=img.3..0110.1645.5083.0.5539.16.10.0.5.5.0.234.1201.0j3j3.6.0....0...1ac.1.45.img..5.11.1211.Jqpm7uKtUUc#facrc=_&imgdii=_&imgcr=x1MITyxT34kQxM%253A%3BLvyUY7cEEUkd0M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww2.luenticus.org%252Fmapas%252Famericadelsur%252Fecuador.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.luenticus.org%252Fmapas%252Famericadelsur%252Fecuador.html%3B598%3B852

Gráfico 10: Mapa del Ecuador



Fuente: <http://www.skyscraperlife.com/fotograf%ED-la/81890-playas%7C-ecuador-vs-nicaragua>

5.4. Beneficiarios

5.4.1. Beneficiarios directos

Como se explicó anteriormente los beneficiarios directos se consideran a los 15'774.749 ecuatorianos (población actualizada al 2013).

5.4.2. Beneficiarios indirectos

Serán el 1'366.267 de turistas que llegan al Ecuador (en el año 2013) y que irán incrementándose cada año.

5.5.Factibilidad

5.5.1. Factibilidad interna

La factibilidad interna es alta puesto que únicamente debe seguirse los pasos procedimentales establecidos en la Constitución para lograr una reforma constitucional, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 442 que explica:

La reforma parcial (...) tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación (Constitución del Ecuador, 2008).

Sin embargo, el costo sería elevado pues implicaría la realización de un referéndum, tomaría demasiado tiempo, puesto que por un mecanismo de “candado constitucional” el lapso entre el primer y segundo debate, ha de ser de un año.

5.5.2. Factibilidad externa

En cuanto a la factibilidad externa se puede decir que es una decisión que depende exclusivamente del Estado ecuatoriano, puesto que la propuesta no contraviene ningún instrumento internacional de protección de los derechos humanos, y además, obedeciendo a los principios de soberanía nacional ningún país del mundo resulta afectado por lo cual no se tendrá resistencia de ninguna clase.

5.6.Descripción de la propuesta

Para materializar la propuesta deberán seguirse los pasos procedimentales establecidos en la misma Constitución. Por lo tanto, si se requiere que el Presidente convoque a un referéndum o este se realizará a petición de por lo menos el 8% de los inscritos en el padrón electoral, la pregunta a ser consultada debe ser aprobada por la Corte Constitucional.

En este caso, la pregunta planteada en el referéndum tendría el siguiente texto:

¿Está usted de acuerdo en reformar parcialmente la Constitución del Ecuador del año 2008, de manera que se elimine la frase “de ciudadanía universal” contenida en el artículo 416 numeral 6, por considerarse inviable en su aplicación?

Para aprobarse de esta manera la propuesta, deberá ganar el SI con la mayoría de los votos válidos, con lo cual el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados y la adopción de la respuesta ganadora.

Por otro lado se tiene la vía legislativa, en la que un asambleísta debe proponer la discusión de la reforma, sobre la cual se realizarán los informes respectivos para presentarlos al debate del Pleno de la Asamblea (2) y entre los cuales debe transcurrir por lo menos 1 año. De ser aceptada la propuesta, la Asamblea deberá expedir un documento que se ajuste a los siguientes lineamientos:

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social,

Que el Ecuador alinea sus normas internas al marco constitucional y a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano,

Que el Ecuador es respetuoso de la soberanía de cada uno de los países del mundo, y

En ejercicio de las facultades dispuestas en inciso segundo del artículo 442 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO ÚNICO: Suprímase la frase “*de ciudadanía universal*” contenida en el artículo 416 numeral 6 de la Constitución del Ecuador del año 2008.

DISPOSICIÓN.- Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

5.7.Impactos

El impacto de esta propuesta tiene que ver directamente con el ámbito jurídico que permitirá que no exista la antinomia existente en la actualidad entre esta frase de la Constitución y la vigente Ley de Migración y de Extranjería. Con la propuesta se logrará que la norma se ajuste a la realidad contextual del Ecuador.

El principio de ciudadanía universal es utópico porque propugna que todos los seres humanos tengan el mismo vínculo jurídico con todos los países en el mundo y por ende, el individuo tendría derechos y obligaciones en cada territorio del globo. Esto como se puede colegir, por sentido común, es imposible de aplicar.

No obstante muchas personas confunden este principio con el de libre movilidad, que en cambio implica, la libertad que debe tener el ser humano para movilizarse, viajar y radicarse en el territorio que crea apropiado, siempre y cuando cumpla con las leyes expresas que rigen para ese territorio.

Como impacto directo se puede decir, que la política de relaciones exteriores y de migración tendrá un marco jurídico coherente con la política de seguridad interna y externa del Estado ecuatoriano, por lo que, se podrá reconocer claramente a quienes ingresan al Ecuador como turistas y como residentes sin que se necesite más trámite que los exigidos en la normativa migratoria vigente.

5.8.Evaluación

Como evaluación de la propuesta, al ser un ámbito eminentemente social no puede medirse con técnicas estadísticas. Sin embargo, se puede evaluar con la coherencia que adquirirá la normativa interna contrastada con la norma constitucional.

BIBLIOGRAFÍA

- Constitución del Estado del Ecuador.* (1830). Riobamba: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1835). Ambato : http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1835.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1843). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1843.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1845). Cuenca : http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1851.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1851). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1851.pdf.
- Constitución de la República del Ecuador.* (1852). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1852.pdf.
- Constitución de la República del Ecuador.* (1861). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1861.pdf.
- Constitución del Ecuador.* (1869). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1869.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1878). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1878.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1884). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1884.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1897). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1897.pdf.
- Constitución Política del Ecuador.* (1906). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1906.pdf.
- Código de Derecho Internacional "Sánchez de Bustamante".* (20 de febrero de 1928). Recuperado el 01 de julio de 2014, de

<https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20de%20Derecho%20Internacional%20Privado%20C%C3%B3digo%20de%20Bustamante%20Republica%20Dominicana.pdf>

Constitución Política del Ecuador. (1929). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1928.pdf.

Constitución Política del Ecuador. (1945). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1945.pdf.

Constitución del Ecuador. (1946). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1946.pdf.

Constitución Política del Ecuador. (1967). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1967.pdf.

Constitución Política del Ecuador. (1978). Quito: http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1978.pdf.

Constitución Política del Ecuador. (1998). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Constitución del Ecuador. (2008). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Constitución del Ecuador. (2008). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

La ciudadanía universal va en una vía. (05 de septiembre de 2008). *Diario Hoy*, págs. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-ciudadania-universal-va-en-una-via-303601.html>.

Ordenanza 071 reformatoria al Código Municipal. (2009). Quito: DM Quito.

Código de lo Civil. (2012). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley de Naturalización. (2012). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Código Penal. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley de Extranjería. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley de Migración. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.

- Reglamento a la Ley de Extranjería*. (2013). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Trámites Ecuador*. (2013). Recuperado el 03 de abril de 2014, de <http://tramites.ecuadorlegalonline.com/social/ministerio-relaciones-exteriores-comercio-e-integracion/carta-naturalizacion-extranjeros/>
- Ávila Santamaría, R. (2008). *La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Cabanellas de Torres, G. (2007). *Diccionario Jurídico elemental*. Buenos Aires: l Heliasta.
- Cadena Roa, M. d., & Ángel, G. M. (13 de septiembre de 2010). *Lógica Jurídica y Lógica Deontica: Ensayo de un Mapa Conceptual*. Recuperado el 06 de junio de 2014, de <http://magjuridico.blogspot.com/2010/09/logica-juridica-y-logica-deontica.html>
- Carvajal, I. (03 de JUNIO de 2012). ¿La mejor Constitución? *Diario El Comercio*, págs. http://www.elcomercio.com.ec/ivan_carvajal/mejor-Constitucion_0_711528897.html.
- Clases de Historia*. (s.f.). Recuperado el 01 de abril de 2014, de <http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/society-esp.html>
- Dávalos Muirragui, M. D. (2008). ¿Existe la ciudadanía universal? Análisis de las ideas del cosmopolitismo plasmadas en la Constitución ecuatoriana de 2008. En R. Ávila Santamaría, *La Constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Diccionario de Filosofía*. (s.f.). Recuperado el 05 de junio de 2014, de <http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=320&from=action=search%7Cby=L>
- Endara Moncayo, J. (2010). *Derecho Internacional Privado*. Quito: Amauta.
- Falk, R. (1999). *Una revisión del cosmopolitismo*. Barcelona: Planeta D'Agostini.
- Ferrajoli, L. (2009). *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Roma: Trotta.
- Horrach Miralles, J. A. (2009). Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. *Revista de Filosofía FACTOTUM*(6), 3.
- Junta de Extremadura. (s.f.). Recuperado el 01 de abril de 2014, de <http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/sociedad.html>
- Marshall, T. (1950). *Ensayo Citizenship and Social Class*. Ann Arbor: Universidad de Michigan.

Organización de Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). *Declaración Universal de los derechos humanos*. Recuperado el 01 de abril de 2014, de <https://www.un.org/es/documents/udhr/>

Organización de Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Recuperado el 01 de abril de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>

Organización para una ciudadanía universal. (23 de mayo de 2013). Recuperado el 01 de julio de 2014, de http://www.o-c-u.org/es/articles/15-POUR_UNE_CITOYENNETE_UNIVERSELLE_ET_POUR_LA_LIBERTE_DE_CIRCULATION_ET_D_INSTALLATION_DES_PERSONNES_A_L_ECHELLE_MONDIALE_
—

Ossorio, M. (2010). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Guatemala: Datascan.

Pérez Ruales, N. (2009). La ciudadanía transnacional y las demandas frente a las políticas públicas. En N. Pérez Ruales, & A. Valle Franco, *Los Derechos en la movilidad humana: del control a la protección* (págs. 31 - 53). Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Real Academia de la Lengua. (2001). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: www.rae.es.

Temas de Derecho. (s.f.). Recuperado el 01 de abril de 2014, de "Status libertatis, civitatis y familiae": <https://temasdederecho.wordpress.com/tag/ciudadano-romano/>

Valle Franco, A. (2009). El derecho a tener derechos. En N. Pérez Ruales, & A. Valle Franco, *Los Derechos en la movilidad humana: del control a la protección* (págs. 1 - 31). Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ANEXOS

Anexo 1: Ley Migración



LEY DE MIGRACION

Codificación 6
Registro Oficial 563 de 12-abr-2005
Última modificación: 20-abr-2010
Estado: Vigente

H. CONGRESO NACIONAL

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE MIGRACION

Capítulo I
Conceptos fundamentales

Art. 1.- Las normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad de los extranjeros residentes en el territorio ecuatoriano.

Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en leyes especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán aplicados en los casos específicos a que se refieren.

Capítulo II
Organización y competencia

Art. 2.- Corresponde a la Función Ejecutiva por conducto del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos relativos al control migratorio.

Art. 3.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por intermedio de la Comandancia General de la Policía Nacional podrá disponer el cerramiento de los puertos marítimos, aéreos y terrestres internacionales de la República y prohibir la entrada y salida de nacionales y extranjeros cuando las circunstancias de orden público y seguridad interna lo demanden.

Art. 4.- Para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales:

- I.- Organizar y coordinar los servicios centrales y provinciales de migración en la República;
- II.- Establecer y modificar las formas migratorias para el desenvolvimiento de las actividades del servicio;
- III.- Prevenir y controlar la migración clandestina;
- IV.- Llevar el registro nacional del movimiento migratorio, realizar los cómputos estadísticos de entrada y salida clasificando a las personas nacionales según su domicilio en el país o en el exterior; y extranjeras inmigrantes o no inmigrantes según su categoría migratoria así como conceder certificaciones sobre estos datos en papel de seguridad numerado, valorado en cuatro dólares de los Estados Unidos de América;
- V.- Disponer el ordenamiento en escala nacional de los libros de registro de órdenes de exclusión o deportación de extranjeros, así como de las resoluciones judiciales que se establecieren para impedir que el afectado se ausente del país. La información relativa a estas medidas deberá contener datos precisos de filiación de la persona y el número de su documento de identidad;



VI.- Realizar el empadronamiento o censo, registro y control de inmigrantes y no inmigrantes con excepción de los transeúntes y diplomáticos de conformidad con los numerales I, II, III y X del Art. 12 de la Ley de Extranjería, debiendo para el efecto extender una papeleta certificada y valorada en cuatro dólares de los Estados Unidos de América; y,

VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan el movimiento migratorio.

Art. 5.- Los agentes de policía del Servicio de Migración tendrán las siguientes facultades discrecionales en el cumplimiento de los deberes fundamentales que establece esta Ley:

I.- Inspeccionar las naves o vehículos de transporte local o internacional en que presuman la concurrencia de personas sujetas al control migratorio;

II.- Interrogar a todo extranjero sujeto al fuero territorial y revisar sus efectos personales, cuando presuman la existencia de alguna causa de exclusión o deportación del país;

III.- Rechazar la admisión o salida de las personas que no se sujeten a las normas legales y reglamentarias;

IV.- Impedir la salida de naves o vehículos de transporte internacional o no, mientras no se haya practicado la inspección migratoria;

V.- Limitar y controlar la permanencia de extranjeros sujetos al fuero territorial; y,

VI.- Arrestar y poner a órdenes del juez competente a las personas sujetas al fuero territorial que en su presencia o vista obstaren o pretendieren obstar la actuación de los miembros del Servicio de Migración o infringieren o pretendieren infringir las leyes, reglamentos u órdenes de autoridad de migración y pudieren evadir la acción policial hasta lograr una orden judicial de privación de libertad.

Capítulo III

Normas para el tránsito internacional en el Ecuador

Art. 6.- El tránsito internacional sólo podrá efectuarse a través de los puertos internacionales del país, dentro de los horarios reglamentarios establecidos y con la intervención de las autoridades y agentes de sanidad, policía y aduana; en el orden indicado.

Art. 7.- Con las excepciones establecidas, toda persona que solicite su admisión o autorización para salir del país, deberá llenar los siguientes requisitos:

I.- Identificarse por medio de documentos conducentes y en su caso acreditar su calidad y categoría migratorias;

II.- Satisfacer el examen de las autoridades de salud pública y exhibir el certificado internacional de vacuna antivariólica;

III.- Llenar el formulario estadístico para el control migratorio; y,

IV.- Satisfacer el examen de los agentes del Servicio de Migración de la Policía Nacional.

Art. 8.- Los agentes de policía del Servicio de Migración practicarán las inspecciones de admisión y de salida del territorio nacional para vigilar y cerciorarse que los agentes autorizados por el explotador de las empresas de transporte y las personas en tránsito internacional, se sujeten a las normas legales y reglamentarias de extranjería y migración.

Capítulo IV

Normas para la exclusión de extranjeros

Art. 9.- Excepto como está previsto en otras disposiciones legales, no serán elegibles para obtener visas y deberán ser excluidos al solicitar su admisión en el país, los extranjeros sujetos al fuero territorial que estuvieren comprendidos en las siguientes causas:

I.- Que con anterioridad hubieran sido excluidos o deportados del país o hubieran sido objeto de similares medidas en otro país por motivos que no sean políticos;

II.- Que carezcan de pasaporte cuya validez mínima sea de seis meses, expedido por autoridad competente del lugar de origen o domicilio, u otro certificado especial de viaje, reconocido por



convenios internacionales vigentes para el Ecuador; y de la respectiva visa vigente y expedida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano;

III.- Que sean menores de dieciocho años de edad, salvo que se encuentren acompañados de sus representantes legales o viajen con autorización expresa de éstos, autenticada ante un funcionario del servicio exterior ecuatoriano;

IV.- Que procuren o hayan procurado una visa u otro documento o traten de ingresar al país con fraude o con documentación impropia o irregular;

V.- Que tengan una visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las condiciones de la calidad o categoría migratorias al tiempo de solicitar su admisión;

VI.- Que en cualquier tiempo hayan aconsejado, asistido o cooperado para que un extranjero ingrese o pretenda ingresar ilegalmente al país;

VII.- Que padezcan de enfermedades calificadas como graves, crónicas y contagiosas, tales como la tuberculosis, lepra, tracoma y otras similares no sujetas a cuarentena.

Respecto a individuos atacados por enfermedades tales como peste bubónica, cólera, fiebres eruptivas y otras, se procederá con arreglo a las normas del Código de la Salud y el Código Sanitario Panamericano; y,

VIII.- Que sufran de psicosis aguda o crónica y los inválidos a quienes su lesión les impide el trabajo, excepto cuando cuenten con suficientes recursos económicos que asegure que no serán una carga para el Estado Ecuatoriano.

Art. 10.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos en calidad de inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos:

I.- Que no se hubieren inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades;

II.- Que no hubieren obtenido la cédula de identidad ecuatoriana;

III.- Que se hubieren ausentado o ingresaren en calidad de no inmigrantes; y,

IV.- Que permanecieren en el exterior más de noventa días en cada año durante los dos primeros años de su admisión e inscripción o más de dieciocho meses consecutivos en cualquier tiempo o dieciocho meses o más con intermitencia durante cinco años.

Art. 11.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente los extranjeros que, habiendo sido admitidos con anterioridad en calidad de no inmigrantes, estuvieren comprendidos en los siguientes casos:

I.- Que hubieren permanecido mayor tiempo que el autorizado en su admisión de acuerdo con su categoría migratoria, hayan o no sido objeto de sanción penal;

II.- Que hubieren cambiado de hecho su calidad o categoría migratorias; y,

III.- Con excepción de los transeúntes, los que no se hubieran inscrito en el registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades.

Art. 12.- No se aplicarán las normas de exclusión de los numerales II, III, VII y VIII del artículo nueve de esta Ley, a los extranjeros inmigrantes con domicilio político en el Ecuador, que retornen al país antes de que se cumplan los plazos establecidos en el numeral IV del artículo diez de esta Ley, sin perjuicio de disponer la internación del afectado en el establecimiento que señalen las autoridades de salud pública.

Art. 13.- No regirá la causa de exclusión relativa a invalidez que inhabilita para el trabajo, para los extranjeros miembros de familia de un ecuatoriano o de un inmigrante con domicilio político en el país que se comprometa a proveer su cuidado y subsistencia.

Art. 14.- No se aplicará la causa de exclusión del numeral II del artículo nueve de esta Ley, a los extranjeros no inmigrantes transeúntes.



Art. 15.- Los agentes de policía del servicio de migración podrán admitir provisionalmente sin sujetarse a las normas de exclusión, a los extranjeros que soliciten asilo político territorial, con la obligación de mantenerlos con vigilancia en el puerto de entrada hasta que el Director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores resuelva cada caso.

Art. 16.- Los extranjeros comprendidos en la causa de exclusión del numeral I del artículo nueve de esta Ley, sólo podrán ser admitidos en el país, previa resolución expresa del Consejo Consultivo de Política Migratoria, transmitida por el Departamento Consular a los funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y al Servicio de Migración de la Policía Nacional.

Art. 17.- Cuando el agente de policía del servicio de migración compruebe, con ocasión de practicar la inspección de admisión, que un extranjero sujeto al fuero territorial está comprendido en alguna de las causas de exclusión, procederá a rechazarlo, obligándolo a que abandone el territorio nacional con destino al país de origen o de procedencia inmediata, entregándolo a la custodia y vigilancia de las autoridades competentes del país convecino, o de los agentes autorizados por el explotador de la respectiva empresa que lo condujo al país. La resolución que adopte el agente de policía del servicio de migración relativa a la exclusión de un extranjero no será susceptible de revisión administrativa, sin perjuicio de la opción del extranjero para ser admitido provisionalmente y someterse a la acción de deportación en la forma prevista en esta Ley.

Art. 18.- Los agentes de policía del servicio de migración podrán permitir el abandono voluntario del país que soliciten los extranjeros comprendidos en los numerales II, III y V del artículo nueve de la ley, en la forma prevista en el artículo anterior, en cuyo caso no se registrará su exclusión para los efectos contemplados en el numeral I del artículo nueve de esta Ley.

Capítulo V

Normas para la deportación de extranjeros

Art. 19.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos:

- I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no reglamentarios;
- II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley;
- III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto; y,
- IV.- Los delinquentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador por falta de jurisdicción territorial.

Art. 20.- Los agentes de policía del Servicio de Migración que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos constitutivos de las causas de deportación, podrán realizar el arresto del extranjero imputado y, en tal caso, lo pondrán inmediatamente a órdenes de la jueza o juez de contravenciones de la provincia en que se efectuó la detención, para que inicie la respectiva acción, en la que no se admitirá fianza carcelaria.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 21.- Todos los juzgados y tribunales que ejerzan jurisdicción penal en la República, a través de sus actuarios, deberán notificar a la jueza o juez de contravenciones de la respectiva provincia, todas las sentencias condenatorias que se dicten contra extranjeros, una vez que se ejecutorien.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 22.- Los directores de los centros de rehabilitación social del Estado tendrán la obligación de poner a órdenes de la jueza o juez de contravenciones de la respectiva provincia a los extranjeros condenados por delitos, una vez que hayan cumplido la pena u obtenido el indulto, antes de proceder a su excarcelación.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 23.- El Intendente General de Policía a quien le compete el ejercicio de la acción de deportación de extranjeros, iniciará el procedimiento de oficio; en base del informe expreso del agente de policía del servicio de migración; de la respectiva notificación del Fiscal, Juez o Tribunal; del Director del Centro de Rehabilitación Social o del Director General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 24.- Si el extranjero sujeto a la acción de deportación estuviere detenido, la jueza o juez de contravenciones previamente al iniciar el procedimiento, solicitará al Juez de lo Penal competente la adopción de las medidas cautelares aplicables del Código de Procedimiento Penal, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 167 del mismo Código en concordancia con esta Ley.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 25.- La jueza o juez de contravenciones actuante, dispondrá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la iniciación de la acción de deportación, que concurran a su presencia, el representante del Ministerio Público designado, el extranjero y su defensor de oficio, si no tuviere un defensor particular, en la fecha y hora que fijará en la respectiva citación que no podrá exceder del plazo de veinticuatro horas adicionales, para llevar a efecto la audiencia en que se resolverá la deportación.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 26.- En la audiencia se exhibirán los documentos, evidencias y demás pruebas atinentes a las situaciones de hecho y de derecho en que se fundamente la acción; y la declaración y alegatos del extranjero que se opongan a la misma. La jueza o juez de contravenciones expedirá su resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de la precitada audiencia, ordenando o negando la deportación.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 27.- El Secretario de la jueza o juez de contravenciones, hará constar en un acta todo el relato del desenvolvimiento de la audiencia que, suscrita por el Intendente y el Secretario actuantes, será anexada al respectivo expediente.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .

Art. 28.- La resolución de la jueza o juez de contravenciones que niega la deportación, deberá ser obligatoriamente elevada en consulta administrativa al Ministro de Gobierno, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su emisión, adjuntándose el expediente del caso.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 .



Art. 29.- El Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades podrá confirmar o revocar la resolución elevada en consulta dentro de los cinco días siguientes al de recepción del expediente, decidiendo fundamentadamente en mérito de lo actuado.

En caso de confirmarse la resolución que niegue la deportación, será dispuesta la inmediata libertad del extranjero detenido, quien podrá ejercer a plenitud sus derechos y la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar.

En caso de revocarse la resolución que niegue la deportación, será emitida la orden de deportación del extranjero en la forma que establece esta Ley.

En ambos casos se devolverá el expediente junto con la respectiva resolución, al Intendente General de Policía actuante, para la ejecución de la resolución ministerial.

Art. 30.- La resolución que disponga la orden de deportación, será susceptible de impugnación ante el órgano competente de la Función Judicial.

Ejecutoriada la resolución, será ejecutada por los agentes de policía en la forma, condiciones y plazo establecidos.

Art. 31.- Cuando la orden de deportación no pudiera efectuarse por tratarse de un apátrida, por falta de documentos de identidad u otra causa justificada, la jueza o juez de contravenciones actuante lo pondrá a disposición del Juez Penal competente para que sustituya la prisión preventiva por alguna de las Medidas alternativas previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, mientras se logre la ejecución de la orden de deportación. Transcurrido el plazo de tres años sin que se ejecute la orden de deportación se regularizará su permanencia en el país.

Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009.

Art. 32.- Los arraigos decretados por los juzgados o tribunales de la República, no impedirán que se ejecuten las órdenes de deportación previa decisión del Consejo Consultivo de Política Migratoria.

Art. 33.- Todo extranjero sujeto al fuero territorial bajo cuya protección o compañía se encuentre el afectado por una orden de exclusión o deportación, podrá ser obligado a abandonar el territorio nacional en la misma forma y condición que su protegido o acompañante, siempre que también se encuentre en situación irregular.

Concordancias:

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 560

Art. 34.- Las órdenes de exclusión o deportación y las medidas de seguridad que se adopten para su ejecución, son de orden público para todos los efectos legales.

Art. 35.- Todo extranjero afectado por una orden de exclusión o deportación será trasladado al país del que provino con anterioridad a su ingreso; al país donde se embarcó con destino al Ecuador, al país de origen; al país donde estuvo domiciliado con anterioridad a su ingreso o al país que lo acepte.

Art. 36.- Cuando un extranjero hubiere sido excluido o deportado del Ecuador, el Servicio de Migración de la Policía Nacional distribuirá su filiación y demás datos de identificación, a todas sus dependencias en la República y al Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su conocimiento y difusión a todas las misiones diplomáticas y consulares del servicio exterior ecuatoriano, a fin de impedir la concesión de visas y su admisión en

el país.

Capítulo VI

Delitos, contravenciones y penas

Art. 37.- La acción penal se ejercerá en la forma prevista en el Código de Procedimiento Penal para las infracciones de acción pública de instancia oficial. Constituyen delitos que serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de cuatrocientos a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, los siguientes:

I.- El extranjero que habiendo sido excluido o deportado del territorio ecuatoriano, ingrese o pretenda ingresar nuevamente al país sin la autorización prevista en el artículo dieciséis de esta Ley;

II.- La persona que llene, suscriba, emita u obtenga una visa, pasaporte o cualquier documentación migratoria, en forma arbitraria, con información falsa o bajo protesta indebida de la nacionalidad ecuatoriana;

III.- La persona que por cuenta propia o ajena, aconseje, transporte o introduzca furtivamente o con fraude a extranjeros al territorio nacional o les conceda trabajo con violación de las normas legales y reglamentarias de extranjería; y,

IV.- Quienes por sí o por interpuesta persona, proporcionaren documentación de viaje a favor de ecuatorianos que pretendan permanecer y trabajar en otro país, con fraude u omitiendo la autorización específica de salida del país que con dicho objeto concede el Servicio de Migración de la Policía Nacional, serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, siempre que dicha conducta no constituya el delito de falsificación u otro mayor, en cuyo caso se estará a lo dispuesto para el efecto en el Capítulo III del Título IV del Código Penal.

Los valores que se hubieran entregado por dicho concepto deberán ser restituidos y las obligaciones contraídas serán nulas sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Art. 38.-

Nota: Artículo derogado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de Abril del 2010 .

Capítulo VII

Disposición económica

Art. 39.- Para el cumplimiento de las funciones inherentes al Servicio de Migración; la Policía Nacional contará además con los siguientes recursos:

I.- Los derechos provenientes de las inspecciones migratorias con oportunidad; de las visitas de admisión y de salida de naves de transporte internacional regulares o no, fuera de horas reglamentarias, que se cobrarán a razón de quince dólares de los Estados Unidos de América en cada caso, a cargo de los agentes autorizados por el explotador, con excepción de los vehículos destinados al transporte en las zonas fronterizas nacionales colindantes con las limítrofes extranjeras cuyo tráfico entre estas zonas no será gravado.

II.- Los derechos provenientes de los permisos de salida que se cobrarán en especies valoradas denominadas tarjetas de control migratorio con numeración sucesiva, a razón de cuatro dólares de los Estados Unidos de América, a cargo de toda persona nacional o extranjera no inmigrante o inmigrante con domicilio político en el país, que solicite autorización para abandonar el territorio nacional; exceptúanse expresamente a los extranjeros no inmigrantes transeúntes; y en especial a todas las personas con domicilio civil en las poblaciones nacionales colindantes con las fronteras extranjeras, cuyo tráfico no será gravado.

Nota: Numeral declarado inconstitucional de fondo por Resolución del Tribunal Constitucional No. 28, publicada en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007 .

III.- La totalidad de las recaudaciones por distintos conceptos y derechos que se autoriza cobrar en el control migratorio, se realizarán mediante comprobantes que determinen claramente el tributo de que se trata y la cuenta en la que se debe depositar.

IV.- Los valores se depositarán en la cuenta especial "Servicio de Migración" abierta en el Banco Central del Ecuador, la misma que se movilizará en base del distributivo anual presupuestario que mediante acuerdo firmado por los ministros de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades y de Economía y Finanzas, se expedirá con vigencia a partir del 1o. de enero de cada ejercicio.

V.- El trámite de pago con cargo a la cuenta especial "Servicio de Migración" se realizará por órdenes del Comandante General de la Policía Nacional una vez que por acuerdo de transferencia se hayan acreditado los valores pertinentes a la cuenta del pagador del servicio.

Capítulo VIII

Derogatorias

Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opusieron a la vigencia de esta Ley, especialmente el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1934, publicado en el Registro Oficial No. 65 de 20 de noviembre de 1934 ; Decreto Ejecutivo No. 268-bis de 10 de junio de 1935, publicado en el Registro Oficial No. 241 de 24 de junio de 1935 ; Decreto Supremo No. 468-bis de 12 de diciembre de 1936, publicado en el Registro Oficial No. 366 de 16 de diciembre de 1936 ; Decreto Supremo No. 79 de 11 de diciembre de 1937, publicado en el Registro Oficial No. 46 de 18 de diciembre de 1937 ; Decreto Supremo No. 32 de 16 de diciembre de 1937; Decreto Supremo No. 13 de 12 de marzo de 1938, publicado en el Registro Oficial No. 126 de 28 de marzo de 1938 ; Decreto Supremo No. 5 de 3 de febrero de 1939; Decreto Ejecutivo No. 341 de 12 de julio de 1944, publicado en el Registro Oficial No. 37 de 14 de julio de 1944 ; Acuerdo Ministerial No. 195 de 12 de julio de 1944, publicado en el Registro Oficial No. 41 de 19 de julio de 1944 ; Decreto Ejecutivo No. 601 de 1 de agosto de 1944, publicado en el Registro Oficial No. 55 de 5 de agosto de 1944 ; Acuerdo Ministerial No. 279 de 9 de agosto de 1944, publicado en el Registro Oficial No. 98 de 27 de septiembre de 1944 ; Decreto Legislativo de 5 de noviembre de 1949, publicado en el Registro Oficial No. 391 de 19 de diciembre de 1949 ; Decreto Ejecutivo No. 293 de 17 de febrero de 1950, publicado en el Registro Oficial No. 493 de 19 de abril de 1950 ; Acuerdo Ministerial No. 028 de 14 de agosto de 1950; Acuerdo Ministerial No. 12 de 20 de enero de 1957, publicado en el Registro Oficial No. 160 de 14 de marzo de 1957 ; Decreto Ejecutivo No. 315-d de 28 de febrero de 1957, publicado en el Registro Oficial No. 180 de 6 de abril de 1957 ; Decreto Ejecutivo No. 1549 de 16 de septiembre de 1957, publicado en el Registro Oficial No. 317 de 19 de septiembre de 1957 ; los literales c. y e. del artículo 22 de la Ley de Régimen Administrativo codificada el 2 de septiembre de 1959 y editada por la Comisión Legislativa; Decreto Ejecutivo No. 1454 de 26 de julio de 1960, publicado en el Registro Oficial No. 1187 de 2 de agosto de 1960 ; Decreto Ejecutivo No. 888 de 8 de agosto de 1967, publicado en el Registro Oficial No. 186 de 8 de agosto de 1967 y vuelta a publicar en el Registro Oficial No. 235 de 19 de octubre de 1967 ; Acuerdo Ministerial No. 029 de 4 de marzo de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 387 de 10 de marzo de 1970 ; Acuerdo Ministerial No. 189 de 22 de diciembre de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 137 de 8 de enero de 1971 ; Decretos Supremos Nos. 248 y 249 de 11 de febrero de 1971; Acuerdo Ministerial No. 082 de 10 de marzo de 1971; el artículo 3, el numeral 2 del literal a. del artículo 4, los literales a. y e. del artículo 5, el artículo 12 y la Disposición Transitoria del Acuerdo Ministerial No. 086 del 15 de marzo de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 211 de 27 de abril de 1971 ; Decreto Supremo No. 497 de 29 de marzo de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 193 de 31 de marzo de 1971 ; Decreto Supremo No. 1362-E de 3 de septiembre de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 308 de 13 de septiembre de 1971 .

Disposiciones Transitorias

Primera.- Se exonera a los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad haitiana que se encuentran en el territorio ecuatoriano, de todas las multas y otros pagos o gravámenes pendientes, que se generaron con base en el derogado Art. 38 de la Ley de Migración, siempre que hayan ingresado al Ecuador hasta al 31 de enero de 2010.

Nota: Disposición dada por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de Abril del 2010 .

Segunda.- Los pagos ya realizados por concepto de visa y multas, por las y los ciudadanos haitianos que se encuentran en situación de irregularidad y en trámite de regularización y que hayan ingresado al país hasta el 31 de enero de 2010, deberán ser reembolsados a estos, con la presentación de una solicitud acompañada por los respectivos comprobantes de pago.

Nota: Disposición dada por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de Abril del 2010 .

Tercera.- Se reconoce el derecho al proceso de reunificación familiar de las y los ciudadanos haitianos, para la o el cónyuge, las personas en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y, de ser este el caso, a los parientes menores de dieciocho años, huérfanos de padre y madre, hasta el tercer grado de consanguinidad de acuerdo a la legislación ecuatoriana vigente y, se sustentará con documentación certificada por autoridad competente.

Nota: Disposición dada por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de Abril del 2010 .

Artículo Final.- La presente Ley entró en vigencia luego de transcurridos sesenta días de la fecha de su publicación en el Registro Oficial No. 382 del 30 de diciembre de 1971 , y sus reformas desde las fechas de sus respectivas publicaciones.

FUENTES DEL PRESENTE PROYECTO DE CODIFICACION DE LA LEY DE MIGRACION

1. Constitución Política de la República (1998).
2. Decreto Supremo No. 188, promulgado en el Registro Oficial No. 158 de fecha 8 de febrero de 1971.
3. Decreto Supremo No. 1899, promulgado en el Registro Oficial 382 de fecha 30 de diciembre de 1971.
4. Decreto No. 2837, promulgado en el Registro Oficial No. 720 de fecha 28 de noviembre de 1978.
5. Decreto Ley No. 178, promulgado en el Registro Oficial No. 804 de fecha 9 de agosto de 1984.
6. Ley No. 56, promulgada en el Registro Oficial No. 341 de fecha 22 de diciembre de 1989.
7. Ley No. 109, promulgada en el Registro Oficial No. 368 de fecha 24 de julio de 1998.
8. Ley 2, promulgada en el Registro Oficial 6 de 18 de Agosto de 1998 .
9. Ley s/n, promulgada en el Registro Oficial 360-S de fecha 13 de enero del 2000.
10. Fe de erratas, promulgada en el Registro Oficial No. 363 de fecha 18 de enero del 2000.
11. Acuerdo No. 116, promulgado en el Registro Oficial No. 138 de fecha 10 de agosto del 2000.
12. Decreto Ejecutivo No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 de fecha 18 de marzo del 2002.
13. Decreto Ejecutivo No. 2971, publicado en el Registro Oficial No. 647 de fecha 23 de agosto del 2002.
14. Decreto Ejecutivo No. 3156, publicado en el Registro Oficial No. 681 de fecha 11 de octubre del 2002.

Anexo 2: Ley de Extranjería



LEY DE EXTRANJERIA

Codificación 23
Registro Oficial 454 de 04-nov-2004
Estado: Vigente

H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DE EXTRANJERIA

CAPITULO I
Conceptos fundamentales

Art. 1.- Las normas de esta Ley regulan la situación de los extranjeros que residan en el Ecuador y atribuyen modalidades y condiciones a las calidades de inmigración. Los preceptos de extranjería establecidos en leyes especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador, serán aplicados en los casos específicos a que se refieren.

Concordancias:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 66, 77, 261, 416

Art. 2.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones previstas en la ley.

Concordancias:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 9, 11, 40, 66

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 13, 15

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 43

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1035

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 1, 2, 383, 384

CODIGO PENAL, Arts. 3

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 18

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 15

CODIGO DE COMERCIO, Arts. 66

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Arts. 2

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Arts. 10

LEY DE NATURALIZACION, Arts. 3

LEY DE REGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO, Arts. 3

Art. 3.- Con el objeto de que el Gobierno del Ecuador pueda conservar estricta neutralidad en los asuntos de política interna o externa que se susciten en otro Estado, adoptará las medidas conducentes para impedir que los extranjeros que residan en el país, participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 13

CODIGO PENAL, Arts. 5, 120, 124, 166



CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 305

Art. 4.- Los extranjeros que hubieren sido desplazados como consecuencia de guerras o persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, podrán ser admitidos en condición de asilados por el Gobierno del Ecuador, observándose lo dispuesto en los respectivos convenios internacionales o en su defecto se aplicarán las normas de la legislación interna.

Concordancias:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 41, 42

LEY DE MIGRACION, Arts. 15

CAPITULO II

Organización y competencia

Art. 5.- Corresponde a la Función Ejecutiva, por conducto de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos relativos a extranjería, especialmente al otorgamiento de visas de inmigrantes dentro y fuera del país. El manejo y otorgamiento de visas de no inmigrantes estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión de conceder, negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no obstante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es facultad soberana y discrecional de la Función Ejecutiva, a través de los organismos competentes.

Art. 6.- Para determinar y desarrollar políticas migratorias generales y regular la permanencia de los extranjeros y sus obligaciones en el Ecuador, el Consejo Consultivo de Política Migratoria, organismo de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, estará integrado por:

- 1.- El Director General de Extranjería, o su delegado, quien lo presidirá.
- 2.- El Director Nacional de Migración, o su delegado.
- 3.- El Director de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, o su delegado.

El Asesor Jurídico de la Dirección General de Extranjería, actuará de Secretario del Organismo.

Art. 7.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria, tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales:

- a) Conocer de las consultas venidas en grado sobre la negativa o revocatoria en el otorgamiento de visas de inmigrante o de no inmigrante, presentadas por la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades; y, la Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores;
- b) Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos gubernamentales de tratados o convenios migratorios así como analizar los vigentes para sugerir su prórroga, revisión o denuncia;
- c) Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de excesiva población hacia las regiones de débil densidad poblacional;
- d) Procurar al establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;
- e) Estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando su reasentamiento en lugares y actividades adecuadas a su especialización;
- f) Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando lo exija el interés público;



- g) Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los organismos estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración; y,
- h) Los demás señalados en la ley y reglamento respectivo.

El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá como asesores al Director de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, o del organismo que haga sus veces; y, al Director Nacional de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Estos funcionarios asistirán a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.

Las resoluciones que adopte el Consejo Consultivo de Política Migratoria, sobre la facultad señalada en el literal a) de este artículo, son de aplicación obligatoria.

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes y las extraordinarias en cualquier tiempo, cuando sean convocadas.

Concordancias:

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 40

CAPITULO III

TITULO I

Calidades de inmigración

Art. 8.- Todo extranjero que solicite su admisión en el Ecuador en calidad de inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa emitida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en el lugar de domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano.

TITULO II

Categorías de inmigración

Art. 9.- Considérase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación:

- I.- Para vivir de sus depósitos, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que se traslade al país.
- II.- Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o en certificados, títulos o bonos del Estado o de instituciones nacionales de crédito.
- III.- Para invertir su capital en cualquier rama de la industria, agricultura, ganadería o del comercio de exportación, en forma estable y distinta a la de sociedad por acciones.
- IV.- Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el país.
- V.- Para ejercer una profesión liberal o una profesión técnica, con arreglo a las normas de la Ley de Educación Superior.
- VI.- En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría; y,
- VII.- Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas dentro de las otras categorías descritas en este artículo, y que de conformidad con lo que requiera el reglamento correspondiente y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, garanticen ingresos suficientes y estables para el sustento económico del inmigrante y sus dependientes.

Concordancias:



LEY DE COMPAÑÍAS, Arts. 22

Jurisprudencia:

Gaceta Judicial, INMUEBLES DE EXTRANJEROS, 13-sep-1978

Art. 10.- Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una visa correspondiente a alguna de las categorías migratorias descritas en el artículo anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría migratoria ni requiera de autorización laboral.

Concordancias:

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 560

Art. 11.- El Gobierno del Ecuador podrá convenir con los Gobiernos de los Estados de emigración o con organismos internacionales reconocidos por el Ecuador, la realización de las tareas de selección profesional, el traslado y radicación de personas especializadas o técnicos de alto nivel o de técnicos o especialistas de nivel medio que sean necesarios para el desarrollo económico, social y cultural del país, y de sus familiares más cercanos.

Art. 12.- Considerase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan a continuación:

I.- Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales calificados pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro el Ecuador y los representantes de las misiones especiales acreditadas ante el Gobierno del Ecuador, y sus familiares más cercanos.

II.- Altos funcionarios de otros Estados y personalidades amparadas en pasaportes diplomáticos, y sus familiares más cercanos.

III.- Empleados privados y domésticos de las personas citadas en los numerales anteriores, y sus familiares más cercanos.

IV.- Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares más cercanos.

V.- Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental, y sus familiares más cercanos.

VI.- Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados que sean llamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar labores temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y sus familiares más cercanos.

VII.- Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u órdenes reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a labores asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos.

VIII.- Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente para desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más cercanos.

IX.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudio, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la importación simultánea de bienes. Esta categoría podrá amparar también a extranjeros en caso de que no les fueren aplicables las categorías descritas en este artículo, cuando previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, su presencia en el país fuere debidamente justificada, de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto.

X.- Transeúntes, comprendidos en las siguientes subcategorías:

1.- Personas que desembarcan hacia las zonas de tránsito directo con oportunidad de las escalas técnicas de las naves marítimas o aeronaves para proseguir su viaje en la misma nave o en otras provista por la misma empresa.



2.- Personas que ingresan al territorio nacional para dirigirse al país de destino, para abordar una nave que los transportará al exterior o en cumplimiento de servicios en la conducción de vehículos de transporte terrestre internacional.

3.- Visitantes temporales con los fines previstos en el número IX de este artículo, durante un período no mayor de tres meses en cada año; y,

4.- Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras colindantes con las fronteras ecuatorianas y que requieran transitar diariamente en las poblaciones limítrofes nacionales.

XI.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como negocios, inversión, actividades empresariales, comerciales, industriales o profesionales, y que requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 49

CAPITULO IV

TITULO I

Registro de extranjeros

Art. 13.- Todo extranjero sujeto al fuero territorial y mayor de dieciocho años que hubiere sido admitido en calidad de inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá inscribirse en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días siguientes al de su arribo en el territorio nacional.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 13

Art. 14.- Los menores de edad que ingresen al país junto con sus representantes legales, quedarán amparados en la condición de ellos o con la inscripción de éstos, hasta la edad de dieciocho años en que deberán inscribirse por separado, dentro de los treinta días siguientes.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 283, 367, 415

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 2220

Art. 15.- Los menores de dieciocho años de edad que ingresen solos, deberán ser inscritos por su representante legal domiciliado en el país, dentro de los treinta días siguientes al de su admisión en el país.

Art. 16.- Los extranjeros que están obligados a inscribirse, deberán notificar al Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, personalmente o por correo certificado, todos los hechos que modifiquen sus declaraciones en la inscripción, dentro de los treinta días siguientes a la fecha que se produzca el cambio.

TITULO II

Efectos del Registro

Art. 17.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes, desde la fecha de su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirirán el domicilio político en el Ecuador.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 46



CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 22, 23, 24, 25, 26

Art. 18.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido legalmente inscritos, recibirán un certificado suscrito exclusivamente por el Director del Departamento Consular que constituye autorización para obtener la cédula de identidad ecuatoriana, único documento oficial que acreditará la legalización de su permanencia en el país.

Concordancias:

LEY GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, Arts. 97, 104, 105, 113, 125

Art. 19.- Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, con excepción de los transeúntes, que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán una constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su delegado, en la respectiva documentación migratoria, con lo que acreditarán la legalización de su permanencia, con la excepción de no tener derecho a obtener la cédula de identidad ecuatoriana.

Concordancias:

LEY GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION, Arts. 113

Art. 20.- La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en calidad de inmigrantes de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el sistema legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica en la legislación nacional.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 13

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 45, 48

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 22, 23, 24, 25, 26

Jurisprudencia:

Gaceta Judicial, LA CONSTITUCION FOMENTA LA INMIGRACION SELECTIVA, 10-nov-1993

CAPITULO V

Cambios de calidad y categoría migratorias

Art. 21.- Ningún extranjero podrá conservar dos o más calidades de inmigración simultáneamente.

Art. 22.- La Dirección General de Extranjería y la Dirección de Asuntos Migratorios, cada una dentro de su ámbito de acción, podrán modificar las calidades o categorías migratorias de los extranjeros que se encuentren en el país, sea cual fuere su calidad o categoría migratoria, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

Art. 23.- Facúltase a los Ministerios de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades y de Relaciones Exteriores, a establecer valores por los servicios que prestan las oficinas de sus respectivas carteras, encargadas del otorgamiento de visas, tanto de inmigrantes como no inmigrantes. Los valores serán fijados mediante Acuerdo Ministerial, y serán destinados exclusivamente a mejorar la calidad de la prestación de dichos servicios.

CAPITULO VI

Derogatorias



Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opusieron a la vigencia de esta Ley, especialmente el Decreto Legislativo de 30 de Marzo de 1937, publicado en el primer Registro auténtico nacional No. 37 del año 1937 y vuelto a publicar en el Diario Oficial No. 131 de 17 de Septiembre de 1889; Decreto Legislativo de 26 de Agosto de 1886, publicado en El Nacional Diario Oficial No. 68 de 4 de Septiembre de 1886; Decreto Ejecutivo de 12 de Junio de 1901, publicado en el Registro Oficial No. 1418 de 15 de Junio de 1901 ; Decreto Ejecutivo de 2 de Agosto de 1902, publicado en el Registro Oficial No. 267 de 4 de Agosto de 1902 ; Decreto Legislativo de 8 de Octubre de 1921, publicado en el Registro Oficial No. 344 de 7 de Noviembre de 1921 ; Decreto Supremo de 17 de Septiembre de 1925, publicado en el Registro Oficial No. 62 de 23 de Septiembre de 1925 ; Decreto Supremo de 22 de Septiembre de 1927, publicado en el Registro Oficial No. 448 de 27 de Septiembre de 1927 ; Decreto Legislativo de 6 de Diciembre de 1930, publicado en el Registro Oficial No. 506 de 23 de Diciembre de 1930 ; Decreto Ejecutivo de 3 de Diciembre de 1931, publicado en el Registro Oficial No. 50 de 15 de Diciembre de 1931 , vuelto a publicar en el Registro Oficial No. 207 de 24 de Junio de 1932 ; Decreto Supremo No. 13 de 30 de Marzo de 1937, publicado en el Registro Oficial 453 de 1 de Abril de 1937 ; Decreto Supremo No. 98 de 24 de Marzo de 1938, publicado en una edición especial del Ministerio de Gobierno y Justicia; Decreto Supremo No. 152 de 18 de Mayo de 1938, publicado en el Registro Oficial No. 172 de 25 de Mayo de 1938 ; Decreto Supremo No. 130 de 2 de Junio de 1938, publicado en el Registro Oficial No. 184 de 8 de Junio de 1938 ; Decreto Supremo No. 1 de 2 de Enero de 1940, publicado en el Registro Oficial No. 325-326 de 2-3 de Enero de 1940 ; Decreto Supremo No. 84-bis de 30 de Mayo de 1940, publicado en el Registro Oficial No. 457-458 de 10-11 de Junio de 1940 ; Decreto Legislativo de 26 de Septiembre de 1940, publicado en el Registro Oficial No. 35-36 de 14-15 de Octubre de 1940 ; Decreto Legislativo de 7 de Noviembre de 1940, publicado en el Registro Oficial 72-73 de 27-28 de Noviembre de 1940 ; Decreto Ejecutivo No. 111 de 29 de Enero de 1941, publicado en el Registro Oficial 128 de 1 de Febrero de 1941 ; Decreto Ejecutivo No. 112 de 1o. de Febrero de 1941, publicado en el Registro Oficial 128 de 1 de Febrero de 1941 ; Decreto Ejecutivo No. 339 de 1o. de Abril de 1941, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 5 de Mayo de 1941 ; Resolución Ministerial No. 128 de 28 de Mayo de 1941, publicada en el Registro Oficial No. 235-238 de 11-12 de Junio de 1941 ; Decreto Ejecutivo No. 1422 de 29 de Noviembre de 1941, publicado en el Registro Oficial No. 396 de 19 de Diciembre de 1941 ; Decreto Legislativo de 22 de Septiembre de 1942, publicado en el Registro Oficial No. 637 de 8 de Octubre de 1942 ; Decreto Ejecutivo No. 1778 de 13 de Noviembre de 1942, publicado en el Registro Oficial No. 669 de 19 de Noviembre de 1942 ; Decreto Ejecutivo No. 359 de 12 de Julio de 1944, publicado en el Registro Oficial No. 55 de 5 de Agosto de 1944 ; Decreto Ejecutivo No. 1521 de 17 de Septiembre de 1945, publicado en el Registro Oficial No. 395 de 28 de Septiembre de 1945 ; Decreto Ejecutivo No. 73 de 22 de Enero de 1946, publicado en el Registro Oficial No. 499 de 2 de Febrero de 1946 ; Decreto Ejecutivo No. 952 de 31 de Mayo de 1946, publicado en el Registro Oficial No. 617 de 24 de Junio de 1946 ; Decreto Legislativo de 20 de Febrero de 1947, publicado en el Registro Oficial No. 824 de 4 de Marzo de 1947 ; Resolución Legislativa de 22 de Febrero de 1947, publicada en el Registro Oficial No. 883 de 14 de Mayo de 1947 ; Decreto Ejecutivo No. 148 de 4 de Octubre de 1948, publicado en el Registro Oficial No. 30 de 5 de Octubre de 1948 ; Decreto Legislativo de 4 de Noviembre de 1948, publicado en el Registro Oficial No. 66 de 20 de Noviembre de 1948 ; Decreto Ejecutivo No. 448 de 9 de Diciembre de 1948, publicado en el Registro Oficial No. 94 de 24 de Diciembre de 1948 ; Decreto Ejecutivo No. 985 de 14 de Junio de 1950, publicado en el Registro Oficial No. 548 de 24 de Junio de 1950 ; Decreto Ejecutivo No. 462 de 7 de Marzo de 1952, publicado en el Registro Oficial No. 1059 de 8 de Marzo de 1952 ; Decreto Ejecutivo No. 1134 de 5 de Julio de 1957, publicado en el Registro Oficial No. 263 de 16 de Julio de 1957 ; Decreto Ejecutivo No. 474 de 28 de Marzo de 1958, publicado en el Registro Oficial No. 579 de 2 de Agosto de 1958 ; Decreto Ejecutivo No. 1247 de 4 de Junio de 1960, publicado en el Registro Oficial No. 1189 de 4 de Agosto de 1960 . El artículo 98 del Código de Procedimiento Penal, codificado por la Comisión Jurídica el 1o. de Marzo de 1971, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 200 de 12 de Abril de 1971 .

CAPITULO VII

Disposiciones Transitorias

PRIMERA:



Nota: Disposición derogada por Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 465 de 19 de Noviembre del 2004 .

DISPOSICION FINAL: Esta Ley y sus reformas, están en vigencia desde las fechas de sus respectivas publicaciones en el Registro Oficial.

FUENTES DE LA CODIFICACION DE LA LEY DE EXTRANJERIA

- 1.- Constitución Política de la República, 1998.
- 2.- Decreto Supremo 1897, publicado en el Registro Oficial No. 382 del 30 de diciembre de 1971 .
- 3.- Decreto Supremo 3644-B, publicado en el Registro Oficial No. 887 del 2 de agosto de 1979 .
- 4.- Decreto Ley 2000-1, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 144 del 18 de agosto del año 2000.
- 5.- Ley de Extradición, publicada en el Registro Oficial Suplemento 144 del 18 de agosto del 2000 .
- 6.- Ley 2001-46, publicada en el Registro Oficial No. 374 del 23 de julio del 2001 .

Anexo 3: Reglamento a la Ley de Extranjería



REGLAMENTO A LA LEY DE EXTRANJERIA

Decreto Ejecutivo 1991
Registro Oficial 473 de 07-jul-1986
Última modificación: 02-ago-2012
Estado: Vigente

LEON FEBRES CORDERO RIVADENEIRA
Presidente Constitucional de la República

Considerando:

Que es necesario simplificar los procedimientos establecidos en el Reglamento a la Ley de Extranjería con el fin de obtener eficacia administrativa en los trámites de ingreso de extranjeros al país;

Que es imperativo conceder a los funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano y a la Dirección General de Extranjería, facultades más amplias para la concesión de visas en sus distintas calidades y categorías.

Que salvo las causales de exclusión legalmente establecidas, debe concederse al extranjero que ha obtenido visa, seguridad suficiente para su ingreso al país;

Que es necesario adaptar las normas del Reglamento a la Ley de Extranjería a las circunstancias actuales del país, y

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 78 literales a) y c) de la Constitución Política y 9 de la Ley de Régimen Administrativo.

Decreta:

EL SIGUIENTE REGLAMENTO A LA LEY DE EXTRANJERIA

CAPITULO I
Procedimientos Fundamentales

TITULO I
LA EXTRADICION PASIVA

Art. 1.- La extradición será solicitada por vía diplomática o en caso de falta de representante diplomático del Estado requirente, de Gobierno a Gobierno, acompañando al pedido una copia auténtica de la sentencia condenatoria o del mandamiento de prisión preventiva, emitido por juez o tribunal competente, con indicación precisa sobre el lugar, fecha, naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, identidad del sindicado y un ejemplar de la Ley penal sobre el delito, pena y prescripción aplicables al caso.

Cuando el trámite se realice por vía diplomática no será necesaria la autenticación de los documentos presentados.

Art. 2.- En caso de urgencia, el Ministro de Gobierno, dispondrá la prisión preventiva del sindicado, mediante requerimiento idóneo efectuado por cualquier medio de comunicación, por juez o tribunal competente, funcionario diplomático o consular del Estado requirente.

Para la procedencia de esta medida, deberá indicarse el delito cometido y fundamentarse en



sentencia condenatoria o mandamiento de prisión.

Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la prisión preventiva, el Estado requirente deberá presentar el pedido formal de extradición acompañando los documentos determinados en el artículo primero.

Vencido el plazo de presentación formal del pedido sin haberse perfeccionado la solicitud de extradición, se dispondrá la libertad del sindicado y no se admitirá un nuevo pedido de prisión preventiva.

Nota: Artículo reformado por Numeral 38. de Decreto Ejecutivo No. 1665, publicado en Registro Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004.

Concordancias:

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 167, 169, 170

Art. 3.- Serán condiciones para conceder la extradición:

- I. Que el delito haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o sean aplicables al sindicado las leyes penales de ese Estado.
- II. Que exista sentencia ejecutoriada de privación de libertad del sindicado, emitida por juez o tribunal competente del Estado requirente.

Art. 4.- No se concederá la extradición en los casos siguientes:

- I. De ecuatorianos, exceptuándose los que hubieran adquirido esta nacionalidad con posterioridad al hecho delictivo que motiva el pedido.
- II. Cuando el hecho que motiva la solicitud no sea considerado delito por la Ley Ecuatoriana ni por la del Estado requirente.
- III. Cuando los jueces nacionales resulten competentes de acuerdo con la Ley interna, para juzgar el delito imputado al sindicado.
- IV. Cuando la Ley Ecuatoriana impusiere al delito imputado una pena igual o inferior a un año de prisión.
- V. Cuando el sindicado hubiere sido procesado o hubiere sido condenado o absuelto en el Ecuador por el mismo hecho en que se fundamente el pedido.
- VI. Cuando se hubiere verificado la prescripción según la Ley ecuatoriana o la del Estado requirente.
- VII. Cuando se trate de un delito político, exceptuándose los casos en que el hecho punible constituya principalmente infracción de la Ley penal común o cuando el delito común conexo al delito político constituya el hecho principal.

La calificación del carácter de la infracción punible competirá exclusivamente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con las leyes y tratados internacionales vigentes.

- VIII. Cuando el sindicado tuviere que responder en el Estado requirente ante juez o tribunal de excepción.

Art. 5.- Cuando más de un estado solicite la extradición de una misma persona por el mismo hecho, tendrá preferencia el pedido del Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito.

Tratándose de diversos delitos, tendrán preferencia sucesivamente:

- I. El Estado requirente en cuyo territorio haya sido cometido el delito más grave según las leyes ecuatorianas.
- II. El Estado que en primer lugar hubiera solicitado la entrega, siendo de igual gravedad el delito.
- III. El Estado de origen o en su falta, el del último domicilio del sindicado, si los pedidos son

simultáneos.

IV. En caso de duda la preferencia queda a discreción del Gobierno del Ecuador.

Habiendo tratado con algunos de los Estados requirentes prevalecerán sus estipulaciones respecto a la preferencia que trata este artículo.

Art. 6.- Presentada la solicitud de extradición al Ministro de Relaciones Exteriores, éste examinará si se han acompañado a la misma los documentos que establezca el respectivo Tratado o, en su falta, los del artículo primero de este Reglamento. Si el Ministro estimare que falta alguno de los requisitos de forma, devolverá la solicitud para que sean presentados, sin perjuicio de que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda considerar dicha solicitud incompleta como simple pedido de detención preventiva hasta por sesenta días, vencidos los cuales, sin que la hubiere completado, el sindicado será puesto en libertad.

Si el Ministro de Relaciones Exteriores juzgare que se han cumplido los requisitos de forma enviará el expediente al Ministro de Gobierno, a fin de que, por medio de las autoridades correspondientes, averigüe el paradero del sindicado, efectúe su detención y sea trasladado a la capital de la República.

Efectuada la detención del sindicado, el Ministro de Gobierno remitirá el expediente de extradición al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si éste encontrare que el proceso no estuviere debidamente instruido, dispondrá que el Estado requirente corrija o complete la solicitud dentro del plazo de sesenta días de detención provisional. Vencido este plazo, sin que se hubiere perfeccionado la solicitud, el sindicado será puesto en libertad.

Si el expediente se encontrare en debida forma, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dentro de las veinticuatro horas de haberlo recibido designará día y hora para que el sindicado comparezca a defenderse, nombrando defensor de oficio, si fuere necesario. Mandará que el Secretario de la Corte cite esa providencia al sindicado. Hecha tal citación, el sindicado tendrá el término de diez días para deducir su defensa. En este enjuiciamiento actuará como parte el Ministro Fiscal General.

La defensa del sindicado solo podrá versar en no ser el la persona reclamada, defectos de forma en los documentos presentados o ilegalidad de la extradición. Con la contestación del sindicado o en rebeldía, a solicitud de éste o del Ministro Fiscal, se concederá un término probatorio que no excederá de quince días, vencido el cual, el Ministro Fiscal y el sindicado informarán en derecho, dentro de tres días comunes para ambos.

Recibidos los informes o sin ellos, si no se hubieren presentado dentro del término legal, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dentro de tres días pronunciará sentencia concediendo o negando la extradición y devolverá el proceso al Ministro de Gobierno. El Ministro de Gobierno remitirá el proceso al Ministro de Relaciones Exteriores quien comunicará la sentencia al Estado requirente, por medio del mismo agente que solicitó la extradición.

Comunicada la concesión de extradición, el funcionario diplomático del Estado requirente deberá retirar al sindicado del territorio nacional, en el plazo de quince días; en caso contrario se dispondrá su libertad, sin perjuicio de la acción de deportación.

Negada la solicitud de extradición no podrá renovarse el pedido por el mismo hecho y el sindicado será puesto en libertad sin perjuicio de la acción de deportación.

Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la detención provisional, será de cargo del Estado requirente, como también los gastos de detención y entrega del sindicado.

Art. 7.- Cuando un sindicado estuviere procesado o hubiere sido condenado en el Ecuador, por delito sancionado con pena de privación de la libertad, la extradición se efectuará después de



concluido el proceso o cumplida la pena.

El Gobierno del Ecuador podrá conceder la extradición del sindicado aunque se encuentre procesado o condenado por contravenciones de policía.

Art. 8.- No se efectuará la entrega del sindicado sin que el Estado requirente asuma los siguientes compromisos:

1. De no ser el sindicado preso o procesado por hechos anteriores no comprendidos en la solicitud de extradición.
2. De computar el tiempo de prisión en el Ecuador para los efectos de aplicación de la pena en el Estado requirente.
3. De computar en pena privativa de libertad la pena corporal de muerte.
4. De no ser el sindicado entregado a la acción de la justicia de otro Estado, sin el consentimiento del Ecuador.
5. De no considerar circunstancias políticas para agravar la pena.

Art. 9.- La entrega del sindicado, de acuerdo con las leyes ecuatorianas y respetando los derechos de terceros, podrá realizarse con todos los objetos encontrados en su poder que sean producto del delito y puedan ser utilizados como evidencias en el juicio.

La entrega de los objetos precitados podrá realizarse a pedido del Estado requirente aunque el sindicado haya muerto o desaparecido.

Art. 10.- El sindicado que después de ser entregado al Estado requirente o durante el proceso hubiera escapado y se refugiare en el Ecuador, a pedido diplomático o por acción de la policía nacional, será detenido y devuelto a las autoridades del otro Estado sin más formalidades.

Art. 11.- El Gobierno del Ecuador podrá autorizar el tránsito de personas cuya extradición se tramite entre otros Estados, siempre que se presenten los documentos probatorios de estos hechos.

TITULO II

LA EXTRADICION ACTIVA

Art. 12.- Para que el Juez de la causa eleve los antecedentes al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, será necesario que se haya dictado previamente auto firme de prisión o recaído sentencia ejecutoriada contra el acusado cuya extradición se pretende.

Deberán también constar en el proceso el país y lugar en que el reo se encuentre en la actualidad.

Concordancias:

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 7

Art. 13.- Recibido el proceso pasará a conocimiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que dictamine si es o no procedente la petición de extradición de conformidad a los tratados celebrados en la nación en que el reo se encuentre refugiado o en defecto de tratado, con arreglo a los principios de Derecho Internacional.

Art. 14.- En caso afirmativo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se dirigirá al Ministro de Relaciones Exteriores acompañando una copia del auto y pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición.

Acompañará, además, una copia autorizada de los antecedentes que hayan dado mérito para dictar el auto de prisión en contra del reo o de la sentencia firme que haya recaído en el proceso, si se trata de un reo condenado, y los demás documentos señalados en el artículo 1 de este Reglamento.



Art. 15.- El Ministro de Relaciones Exteriores, después de legalizar los documentos acompañados hará practicar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y si se obtiene la extradición del reo, solicitará la colaboración del Ministerio de Gobierno para hacerlo y lo hará conducir del país en que se encuentre hasta ponerlo a disposición del Presidente de la Corte Suprema.

Art. 16.- En el caso a que se refiere el artículo precedente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenará que el reo sea puesto a disposición del juez de la causa a quien devolverá el proceso respectivo, a fin de que el juicio siga su tramitación o de que el reo cumpla su condena si hubiere sentencia ejecutoriada.

Art. 17.- Si el Presidente de la Corte Suprema de Justicia declara no ser procedente la extradición o ésta no es acordada por las autoridades de la nación en que el reo se encuentra refugiado, se devolverá el proceso al juez de la causa para que proceda como lo determina la Ley respecto de los ausentes.

Concordancias:

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 233

Art. 18.- Si el proceso comprende a un reo que se encuentre en el extranjero y a otros reos presentes, se observarán las disposiciones anteriores en cuanto al primero y sin perjuicio de su cumplimiento seguirá la causa sin interrupción en contra de los reos presentes. El proceso, en tal caso, será elevado en copia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

**TITULO III
LA INTERNACION**

Art. 19.- El Ministro de Gobierno, a petición del Estado interesado hecho por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores o cuando lo juzgare conveniente, dispondrá la internación de los extranjeros que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos públicos internos o externos en otro Estado.

Nota: Artículo reformado por Numeral 38, de Decreto Ejecutivo No. 1665, publicado en Registro Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004 .

**CAPITULO II
Funciones del Consejo**

Art. 20.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá el carácter de organismo técnico, consultivo e informativo en el ramo y se encargará de los siguientes asuntos:

- I. Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos gubernamentales de tratados o convenios migratorios así como analizar los vigentes para sugerir su prórroga, revisión o denuncia.
- II. Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de excesiva población hacia las regiones de débil densidad poblacional.
- III. Procurar el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados.
- IV. Estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando su reasentamiento en lugares y actividades adecuadas a su especialización.
- V. Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando lo exija el interés público.
- VI. Disponer mediante resoluciones generales o individuales la limitación de las calidades o categorías migratorias y los cupos de inmigración.

- VII. Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los organismos estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración.
- VIII. Conocer y decidir las consultas de las dependencias del Estado y todos los asuntos que le atribuyen las leyes y reglamentos de extranjería y migración.
- IX. Emitir resoluciones o recomendaciones sobre el contenido de las normas reglamentarias de extranjería y de migración que serán obligatorias con la aprobación de los Titulares de los Ministerios representados, luego de su publicación en el Registro Oficial.

El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá como asesores al Director de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración y Pesca, al Director Nacional de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, al Director Nacional de Migración y al Director General de Extranjería. Estos funcionarios asistirán a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto.

CAPITULO III Modalidades de Visación

Art. 21.- Todo extranjero mayor de dieciocho años de edad constituye una unidad migratoria aunque pertenezca a una misma familia. Se considera extranjero a toda persona que la Constitución y demás leyes de la República no le conceda la calidad de ecuatoriano.

Los menores de edad que hubieren adquirido su condición migratoria al amparo de la condición o inscripción de sus representantes legales, al alcanzar la mayoría de edad deberán inscribirse por separado, con la misma categoría migratoria de acuerdo al Art. 14 de la Ley. Tal registro se efectuará con la mera presentación del pasaporte del solicitante y la constatación de su inscripción bajo el régimen de sus representantes legales.

Concordancias:

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 42

Art. 22.- Los funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y del Departamento y de la Dirección General de Extranjería, tendrán amplias facultades para exigir la comprobación de las declaraciones expuestas en las solicitudes de visas y demás documentos migratorios y para cerciorarse e investigar la concurrencia de alguna de las causas de exclusión que establece la Ley de Migración.

Art. 23.- Las visaciones concedidas por los funcionarios del servicio exterior del Ecuador, facultan al extranjero a su ingreso al país, salvo causales de exclusión debidamente comprobadas.

Con la constancia en el pasaporte de la visa que le acredite la calidad y categoría migratoria, el extranjero será inscrito en el Registro de Extranjeros de la Dirección Nacional de Extranjería y, si se trata de inmigrantes se le entregará la orden respectiva para obtener su cédula de identidad, registro y orden que serán emitidos al momento de la presentación del extranjero.

En el caso de visas de no - inmigrantes, categorías 12-I, 12-II, 12-III y 12-IV, el extranjero obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el caso de visas de no - inmigrantes en las otras categorías, el extranjero obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros de la Dirección General de Extranjería, al momento de su ingreso al Ecuador.

El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará, mediante Acuerdo que se publicará en el Registro Oficial las misiones diplomáticas u oficinas consulares autorizadas para conceder visaciones.

Art. 24.- Ninguna visa será emitida a favor de extranjeros que aparezcan no elegibles para solicitar



admisión en el país. Cuando se hubiere rechazado la concesión de una visa, el funcionario actuante deberá enviar un informe explicativo al Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los datos de filiación del extranjero, para transmitirlos a todas las misiones diplomáticas y consulares ecuatorianas y a las autoridades de policía. De igual manera se procederá con la información obtenida sobre extranjeros que hubieren sido excluidos o deportados de sus respectivas jurisdicciones o sobre aquellos que se hubieren manifestado como peligrosos por sus antecedentes y conducta.

Nota: Artículo reformado por Numeral 38. de Decreto Ejecutivo No. 1865, publicado en Registro Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004 .

Art. 25.- Todo extranjero que se presuma elegible para solicitar su admisión en el país, recibirá la constancia de la visa en su respectivo pasaporte o documento especial de viaje, con determinación del número de visado; clasificación y símbolo de la calidad y categoría migratorias; período de vigencia de la visa; número de solicitudes de admisión permitidas; tiempo de permanencia autorizado para cada admisión; nombre, apellido paterno, cargo y firma del funcionario que otorga la visa; lugar, fecha y sello de la oficina.

Art. 26.- Todo extranjero que solicite una visa, deberá llenar y suscribir los formularios emitidos para cada trámite, por la Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, para las visas de inmigrantes y, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las visas de no - inmigrante. Junto con dicha solicitud deberá presentar exclusivamente la documentación que este Reglamento exige para la respectiva categoría migratoria.

De igual modo deberá llenar y suscribir los formularios que sean necesarios para la obtención de cualquier otra documentación migratoria.

Art. 27.- Junto con la constancia de la visa en el pasaporte, los extranjeros inmigrantes y los no - inmigrantes con excepción de los transeúntes, recibirán del funcionario del servicio exterior ecuatoriano una copia del certificado de visación que será entregada por el extranjero en el momento de su inscripción en el Registro de Extranjeros, conforme el artículo 23 de este Reglamento .

Art. 28.- Las solicitudes de visas de inmigrantes deberán ser presentadas por el extranjero, por su representante legal o por su apoderado, o por el interesado en su inmigración, ante el Director General de Extranjería en Quito, directamente, o por intermedio de las Gobernaciones en las Capitales de provincia, o de los funcionarios del Servicio Exterior fuera del país; o, directamente ante el Subdirector General de Extranjería en Guayaquil.

Sin embargo las visas de inmigrantes en la categoría 10-IV (sic) podrán ser concedidas, sin necesidad de la autorización de la Dirección General de Extranjería ni de la disposición del Ministro de Relaciones Exteriores, por los funcionarios del Servicio Exterior Ecuatoriano, en favor del o de la cónyuge, hijos menores de edad o solteros de un ecuatoriano o ecuatoriana.

Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo No. 1717, publicado en Registro Oficial No. 436 de 9 de Mayo de 1994 .

Art. 29.- La Dirección General de Extranjería, sea que la solicitud se hubiera presentado directamente en dicha Dirección o por medio de funcionarios del servicio exterior fuera del país, resolverá sobre la solicitud de visa de inmigrante dentro de un plazo máximo de quince días hábiles de recibida la documentación. Si la resolución fuere favorable para la concesión de visa, salvo lo previsto en el artículo 57 de este Reglamento, la Dirección General de Extranjería, en caso de que el extranjero se encontrare en el exterior, comunicará dicho particular directamente al funcionario competente del servicio exterior ecuatoriano en el país de origen o en el país del último domicilio del extranjero, para que éste conceda la visa sin más trámite, quién además deberá comunicar a la Dirección de Extranjería que se ha cumplido con el otorgamiento de la visa. Si el extranjero se encontrare en el país, la Dirección General de Extranjería entregará la visa directamente.



Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 2432, publicado en el Registro Oficial No. 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 3595, publicado en el Registro Oficial No. 8 de 27 de Enero del 2003 .

CAPITULO IV

Reglas para las Categorías de Visas de Inmigrante

Art. 30.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría I (sic) del artículo diez de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Para que se conceda la visa deberá justificarse ante el Director General de Extranjería, que el extranjero disfruta de depósitos provenientes del exterior, de las rentas que estos produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que proceda del exterior por una cantidad no menor al equivalente a 800 dólares de los Estados Unidos de América, mensuales.

Nota: Regla I de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Regla I de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

II. Si se solicitare la inmigración de parientes, el monto de los ingresos mínimos se incrementará en 100 dólares de los Estados Unidos de América, mensuales por cada persona.

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de noviembre de 1986 .

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

III. Las rentas de que hablan los dos numerales anteriores se justificarán por cualquiera de los medios siguientes:

a) Con la constitución de un fideicomiso o de un depósito en efectivo en el Banco Central del Ecuador o en la institución nacional de crédito que determine el Consejo Consultivo de Política Migratoria.

Los depósitos en efectivo deberán acreditarse a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria y su monto será equivalente a las pensiones de cinco años.

Una vez constituido el depósito se autorizará la concesión de la visa. Con posterioridad a su admisión, en el momento de su inscripción, el inmigrante recibirá el permiso para retirar la cantidad mensual que le corresponda.

En caso de que el extranjero decida la constitución de un fideicomiso éste debe ser previamente aprobado por el Consejo Consultivo de Política Migratoria y los ingresos que perciba como producto no podrán ser inferiores a los mínimos señalados.

b) Con la presentación de un certificado expedido por el funcionario del servicio exterior ecuatoriano, del que aparezca que el inmigrante disfruta de ingresos de cualquier clase por el o los mínimos indicados, certificado que deberá estar respaldado por copias autorizadas de documentos que acrediten la constante percepción de los ingresos referidos.

Art. 31.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría II del artículo diez de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. La autorización para la visa se concederá exclusivamente para que los extranjeros inviertan su



capital en:

- a) Bienes raíces, acciones o derechos reales sobre los mismos;
- b) Cualquier clase de certificados o títulos, inclusive cédulas hipotecarias, bonos de prenda, pólizas de acumulación, acciones, obligaciones, bonos emitidos por compañías de cualquier clase constituidas en el Ecuador;
- c) Bonos del Estado u otras entidades del sector público u otros títulos de deuda pública emitidos por el Estado u otras entidades del sector público.

II. El capital que se invierta con estos fines será al menos de 25.000 dólares de los Estados Unidos de América y se incrementará al menos en 500 dólares de los Estados Unidos de América, por cada pariente que dependa del inmigrante.

Nota: Nuevo texto de Regla II de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

III. Salvo que la inversión se hubiere hecho antes de solicitar la visa de inmigrante, para garantizar el cumplimiento de la inversión, el interesado deberá constituir un depósito en el Banco Central del Ecuador por la cantidad de 2.000 dólares de los Estados Unidos de América, a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria.

El depósito se destinará al erario fiscal si el extranjero no demuestra la inversión dentro de los noventa días siguientes a la fecha de su inscripción como inmigrante, sin perjuicio de la acción de deportación.

Si al momento de solicitar la visa el inmigrante ya hubiere efectuado la inversión, acompañará a su pedido el título que demuestre su propiedad, derecho o acción sobre el inmueble respectivo o los títulos o certificados a que se refieren los literales b) y c) de la Regla I.

Nota: Nuevo texto de la Regla III de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Regla III de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

IV. Para los casos determinados en los literales b) y c) de la Regla I de este artículo, realizada la inversión, los documentos que la representen, deberán depositarse bajo custodia del Banco Central del Ecuador. El extranjero podrá retirar los dividendos o intereses que produzca su inversión, pero el depósito de los títulos o certificados permanecerá mientras continúe como inmigrante.

Nota: Regla IV de este artículo, reformada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

V. Cuando por sorteo o voluntad del inmigrante se trate de sustituir los valores fiduciarios, el Director General de Extranjería, vigilará que no se modifiquen las condiciones legales establecidas.

VI. Si el extranjero renunciare a su calidad de inmigrante y abandonare el país con la documentación migratoria cancelada, el Director General de Extranjería, podrá autorizar la devolución de los valores depositados.

VII. Si la inversión se hubiere destinado a los fines señalados en el literal a) de la regla primera, el Director de Extranjería notificará al Registrador de la Propiedad del Cantón donde se encuentre el inmueble haciéndole conocer que deberá, en caso de cualquier acto o contrato que afecte al dominio o a cualquier derecho real del bien raíz, comunicar de inmediato al Director de Extranjería bajo su responsabilidad, la violación de esta obligación acarreará al Registrador las sanciones previstas en la Ley de Registro.

Nota: Regla VII de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

VIII. En el evento que se enajenaren los bienes raíces o las acciones o derechos sobre ellos el inmigrante deberá abandonar el país dentro de los treinta días siguientes, salvo que justifique que ha realizado una nueva inversión de conformidad con las normas de este artículo.

Art. 32.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría III del artículo diez de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. La autorización se concederá exclusivamente para que inviertan su capital en la industria, agricultura, ganadería o comercio de exportación, sea en negocios o empresas de propiedad individual del inmigrante o en compañías distintas a la compañía anónima.

II. La inversión mínima será al menos de 30.000 dólares de los Estados Unidos de América, en la actividad denunciada.

Nota: Nuevo texto de la Regla III de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

III. Si al momento de solicitar la visa el extranjero ya hubiere efectuado la inversión, acompañará a su pedido copia certificada del contrato constitutivo de la compañía inscrito en el Registro Mercantil o copia certificada del aumento de capital de la compañía, así mismo inscrito en el Registro Mercantil. Si la inversión se hubiere efectuado en negocios o empresas de propiedad individual acompañará copia certificada de la inscripción de la copia de la matrícula de comercio en el Registro Mercantil y del Registro Unico de Contribuyentes.

Nota: Nuevo texto de la Regla III de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

IV. El extranjero, si es que aún no hubiere efectuado la inversión, con su solicitud deberá presentar un certificado de depósito por 3.000 dólares de los Estados Unidos de América, expedido por el Banco Central del Ecuador a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión por el mínimo establecido.

Este depósito se destinará al erario fiscal si el extranjero no demostrare que realizó la inversión en el plazo máximo de 180 días a partir de la fecha de admisión al país en calidad de inmigrante, sin perjuicio de la acción de deportación.

Nota: Nuevo texto de la Regla III de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Regla IV de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005 .

V. El depósito será devuelto al extranjero si comprueba a satisfacción el Director General de Extranjería, y según lo previsto en la regla III, que dentro del plazo establecido, realizó la inversión.

Nota: Nuevo texto de la Regla III de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

VI. Cuando el inversionista enajene su inversión deberá comunicarlo a la Dirección General de Extranjería dentro de los quince días siguientes a la fecha de registro del instrumento público y deberá abandonar el país dentro de los treinta días posteriores, con su documentación migratoria cancelada, salvo que modificará legalmente su calidad o categoría migratoria.



VII. Si hubiere sido autorizado para invertir su capital en una sociedad que, en ningún caso podrá ser por acciones, en el contrato social se estipulará la obligación determinada en el numeral anterior. Si se omitiere dar el expresado aviso de enajenación, el extranjero y en su caso la sociedad quedarán sujetos a las sanciones que procedan de acuerdo con la Ley de Migración.

Art. 33.- La visa de inmigrante en la categoría IV del artículo diez de la Ley, se otorgará a quienes vayan a asumir, con el fin de radicarse definitivamente en el país, funciones administrativas, técnicas o de especialización en empresa, instituciones o personas naturales o jurídicas establecidas en el país, sea que tales actividades las asuman en virtud de contrato de trabajo, mandato general, representación legal o en razón de pertenecer a organizaciones u órdenes religiosas que se encuentran ejerciendo sus actividades al amparo de lo previsto en el Modus Vivendi entre el Ecuador y la Santa Sede y el Decreto Supremo No. 212 promulgado en el Registro Oficial 547 de 23 de Julio de 1937. Se otorgará también a las Corresponsalías de Prensa Extranjera establecidas o que se establecieren en el país. Su concesión se sujetará a las siguientes reglas:

Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo 573, publicado en el Registro Oficial 175 de 21 de Abril de 1989.

I. La inmigración deberá ser solicitada por una persona natural o jurídica constituida o domiciliada legalmente en el país. Esta regla no se aplicará a los apoderados o representantes de compañías constituidas en el extranjero que vinieren a establecerse en el país.

Nota: Nuevo texto de la Regla I de este artículo, dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986.

II. En el caso de personal extranjero con relación de dependencia laboral, quien solicite la inmigración deberá presentar el contrato de trabajo indefinido y la certificación concedida por la Dirección General de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, a que se refiere el artículo 569 del Código de Trabajo. Otorgada la visa e inscrita el extranjero en el Registro de Extranjería, no podrá exigírsele documento adicional para probar su calidad migratoria en esta categoría. La persona natural o jurídica debe mantener, por lo menos, un 80% de personal ecuatoriano con igual proporción para los egresos financieros por concepto de sueldos y salarios.

El peticionario deberá justificar a satisfacción de la Dirección de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, la necesidad permanente de utilizar los servicios del extranjero, en razón de su experiencia, nivel técnico o alta especialización, y por la no disponibilidad de ecuatorianos capacitados para el desempeño de esas funciones, o por ocupar funciones administrativas de confianza.

Están excluidos de estas disposiciones quienes ostenten la representación legal, judicial y extrajudicial y, en general, quienes no tengan relación laboral de dependencia.

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005.

III. Al formulario de solicitud de inmigración, deberán acompañarse los siguientes documentos:

- a. Nombramiento o poder;
- b. Documentos que acrediten la existencia legal de la persona natural o jurídica y que justifiquen el capital mínimo, si es aplicable, y
- c. Certificado actualizado del cumplimiento de obligaciones otorgado por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos, según el caso, cuando la persona jurídica esté sujeta al control de uno de estos organismos.

Los Corresponsales de Prensa Extranjera presentarán únicamente la calificación otorgada por la Secretaría Nacional de Comunicación Social, SENAC.



Nota: Inciso insertado en la Regla III de este artículo, por Decreto Ejecutivo 573, publicado en el Registro Oficial 175 de 21 de Abril de 1989 .

En el caso previsto en la regla II de este artículo se adjuntará únicamente el contrato de trabajo y la autorización de la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos.

Si el inmigrante pertenece a una organización u orden religiosa, en vez del nombramiento o poder, presentará una certificación que así lo acredite otorgada por quien ostenta la representación legal de acuerdo con el artículo 1o. del Decreto Supremo No. 212 promulgado en el Registro Oficial 547 de 23 de Julio de 1937 .

IV. Las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas tendrán la obligación de informar al Director General de Extranjería, en el plazo máximo de quince días, sobre cualquier hecho o circunstancia que modifique o contrarie, las condiciones que sirvieron de antecedente para la concesión de la visa. En caso contrario, estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Migración.

V. Nota: Regla V de este artículo, derogada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

VI. Los representantes de las personas naturales o jurídicas están obligados a sufragar los gastos que se originen por el abandono del país del extranjero y sus familiares, con motivo de la terminación de la circunstancia que originó el otorgamiento de la visa o de la orden de deportación emitida por juez competente en la oportunidad que sea requerido.

Concordancias:

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 560

Art. 34.- La concesión de la visa de inmigrante para la categoría V del artículo diez de la Ley se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Podrán autorizar visas para profesionales extranjeros que acrediten su título profesional.
- II. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en Convenios o Acuerdos Internacionales.

Nota: Nuevo texto dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Art. 35.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría VI del artículo diez de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Deberá solicitar la visa la persona bajo cuya dependencia económica vaya a vivir el interesado, la cual deberá acreditar su nacionalidad de ecuatoriana o su calidad de inmigrante.
- II. Deberá justificar el parentesco que cita la categoría.
- III. El solicitante, si es extranjero, acreditará su solvencia económica para atender las necesidades de quienes no fueren ni su cónyuge ni sus hijos.

Nota: Regla III de este artículo reformado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986

IV. Solo con la certificación prevista en el Art. 548 del Código de Trabajo, podrá ejercer actividades con relación de dependencia, si es que fallece la persona bajo cuya dependencia viva o disminuyan los medios de subsistencia familiar. Podrá, sin embargo ejercer otras actividades lucrativas, sujetándose a las normas legales pertinentes.

Nota: Regla IV de este artículo reformado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986

V. El vínculo conyugal o el parentesco se acreditará con el certificado conferido de la forma legal. Si

tal documento fuere otorgado en el exterior se legalizará de conformidad con el Art. 5 del Decreto Ejecutivo No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de 20 de marzo de 1985.

VI. Quienes hubieren adquirido la calidad de inmigrante en virtud el matrimonio perderán esta categoría al terminar el matrimonio por las causas establecidas en los ordinales segundo y cuarto del Art. 104 del Código Civil, salvo, en este último caso, que se trate del cónyuge inocente y el divorcio se hubiera decretado por cualquiera de las causas establecidas en el Art. 109 del Código Civil.

Art. 35-A.- El cónyuge y parientes consanguíneos hasta el segundo grado que ingresen con el Corresponsal de Prensa, se sujetarán a lo establecido en el Art. 35 del Reglamento.

Nota: Artículo dado por Decreto Ejecutivo 573, publicado en el Registro Oficial 175 de 21 de Abril de 1989.

Art. 36.- Todo inmigrante legalmente inscrito podrá ausentarse y regresar al país, pero no podrá permanecer en el exterior más de noventa días en cada año durante los dos primeros años a partir de la fecha de admisión en calidad de inmigrante o más de dieciocho meses consecutivos en cualquier tiempo, sin perder su calidad y categoría migratorias en cuyo caso se cancelará su documentación.

Art. 37.- Las bases fundamentales para el cumplimiento de los programas de inmigración organizada de que trata el artículo once de la Ley serán:

- I. Facilidades administrativas para el perfeccionamiento de los requisitos generales en la tramitación y obtención de las visas.
- II. Procedimientos y financiación para las tareas de selección física y profesional de las personas en el país de emigración; para el traslado al Ecuador y radicación de los asistidos y sus familiares más cercanos.
- III. Régimen de cambios de profesión y ulterior repatriación en casos de violación de la Ley.
- IV. Coordinación de las dependencias gubernativas con las organizaciones internacionales o gubernamentales encargadas de la inmigración organizada para el mejor cumplimiento de los objetivos.
- V. Intercambio permanente de informaciones sobre demanda de trabajo y ocupaciones; número de técnicos o trabajadores que se podría proporcionar; salarios, beneficios sociales, costos de vida y régimen de remesas de carácter familiar hacia el exterior.

Art. 38.- Los beneficios especiales destinados a las personas que se trasladen al país con patrocinio de las normas de inmigración organizada serán:

- I. Exoneración de toda clase de derechos consulares e impuestos migratorios, incluyéndose timbres fiscales, para la gestión, tramitación y documentación definitiva de los asistidos.
- II. Exoneración total de tasas, contribuciones e impuestos generales o especiales, fiscales o seccionales para la introducción de los efectos de uso familiar, instrumentos de trabajo y muebles usados y que provengan del sitio donde prestaban sus servicios con anterioridad inmediata, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
- III. Pago de gastos de viaje al país y de repatriación voluntaria.
- IV. Adjudicación de tierras, créditos para la explotación y protección biológica.

CAPITULO V

Reglas para las Categorías de Visas de No Inmigrante

Art. 39.- Las solicitudes de visa de no inmigrante deberán ser presentadas por el extranjero ante un funcionario del servicio exterior ecuatoriano, directamente, en el lugar de su último domicilio o en su falta ante el funcionario más próximo a tal lugar, si el extranjero estuviere en el exterior; en caso contrario, las solicitudes podrán ser presentadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. A los mencionados funcionarios y al Ministerio de Relaciones Exteriores, en su caso, les compete exclusivamente la calificación del solicitante y la decisión sobre el otorgamiento de la visa.

Nota: Nuevo texto dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Art. 40.- Los extranjeros que carezcan de nacionalidad, para solicitar y obtener una visa de no inmigrante deberán exhibir la prueba oficial de domicilio político en otro Estado que garantice su readmisión.

Art. 41.- Las personas comprendidas en las categorías I, II, y III del artículo doce de la Ley, para solicitar visa o admisión en el país no estarán sujetas a las normas de calificación, exclusión o deportación que establecen las leyes y reglamentos de extranjería y migración. Además, de acuerdo con la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, Consulares y de Organismos Internacionales, quedarán exentos de jurisdicción territorial mientras conserven su respectiva calidad y categoría migratorias.

Las visas concedidas a las personas de que trata este artículo conservarán su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión y el tiempo autorizado de permanencia será hasta el término de sus respectivas misiones para los titulares de visa de no inmigrante 12-I y por el tiempo fijado en cada caso en lo que se refiere a los titulares de visas de no inmigrantes 12 - II y 12-III. Al personal administrativo de las misiones extranjeras y organismos internacionales, así como a lo expertos de asistencia técnica se les otorgará la visa de no - inmigrante 12-III, salvo que hubieren acuerdos especiales.

Se concederá asimismo, visas de no inmigrantes, categoría 12-III (múltiples admisiones), a los Corresponsales de la Prensa Extranjera que se establezcan en el país, previa calificación de la Secretaría de Comunicación Social, los que no gozarán de la exención de jurisdicción territorial.

Se concederá también, visas de no inmigrantes, categoría 12-III (múltiples admisiones), al personal extranjero de las Organizaciones No Gubernamentales que hayan suscrito el respectivo Convenio de Cooperación Técnica y Funcionamiento con el Gobierno del Ecuador y que se establezcan legalmente en el país, previa calificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho personal del exterior no gozará de ninguna prerrogativa diplomática, ni de la exención de jurisdicción territorial.

Nota: Inciso final agregado por Decreto Ejecutivo No. 573, publicado en Registro Oficial 175 de 21 de Abril de 1989 .

Nota: Inciso final agregado por Decreto Ejecutivo No. 2372, publicado en Registro Oficial Suplemento 16 de 6 de Febrero del 2007 .

Art. 42.- Las personas que invocaren las situaciones previstas en la categoría IV del artículo doce de la Ley, se sujetarán a las siguientes reglas:

I. Todo extranjero admitido en el territorio ecuatoriano en condición de asilado o refugiado político quedará sujeto a los deberes que le impongan los Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para el Ecuador y este Reglamento.

II. Tratándose de asilo diplomático cuando el extranjero solicite su admisión amparado en la visa de asilado político concedida por el Jefe de la Misión Diplomática ecuatoriana no requerirá calificación territorial.

III. Tratándose de asilo territorial, será admitido provisionalmente por los agentes de policía, debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras se resuelva cada caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

IV. Deberá expresar los motivos de la persecución u otro hecho que motiva la solicitud de asilo territorial, sus antecedentes personales, los datos útiles para su identificación y el medio de transporte utilizado.

V. El agente de policía levantará un acta recabando los datos indicados y por la vía más rápida remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, a fin de recibir instrucciones, adjuntando el informe de su criterio personal.

VI. Si las declaraciones expuestas para solicitar el asilo territorial carecieren de realidad y certeza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, notificará a las autoridades de policía, las cuales obligarán al extranjero a que abandone el país, negándose la concesión de asilo.

VII. No se admitirá como asilados a los extranjeros que procedan de país distinto de aquel en que se haya ejercido la persecución o conflagración, salvo el caso de haber permanecido en tránsito directo.

VIII. Tratándose de extranjeros admitidos conforme a las numerales anteriores o mediante la aplicación de tratados sobre asilo diplomático, se observarán además las siguientes reglas:

a) El Ministro de Relaciones Exteriores determinará las actividades que podrá desarrollar el asilado o refugiado, incluyendo labores remuneradas, las que no se sujetarán a las normas regulares, dada la condición suigeneris que caracteriza a un asilado o refugiado político.

Con tal finalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá un "documento de identificación" numerado, firmado y sellado por el funcionario autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que constará: nombre completo del extranjero, reconocimiento de su calidad de asilado o refugiado político, datos personales de identificación, fotografía y firma del titular de la visa, declaración de que se compromete a no participar en actividades de carácter político, a cumplir con las leyes internas y observar lo establecido en convenios internacionales sobre asilo y refugio, y, finalmente, una constancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores autoriza al titular de la visa 12-IV, a que pueda desempeñar labores remunerativas, sin otro requisito, dada su condición de asilado o refugiado político.

El citado documento se expedirá en formato de carnet, servirá de plena identificación ante las respectivas autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, informará periódicamente al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, las actividades autorizadas según el caso; los asilados o refugiados tendrán la obligación de censarse anualmente en la Dirección Nacional de Migración.

b) No podrá el asilado o refugiado ausentarse del país sin la autorización expresa y por escrito del funcionario autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, autorización que deberá exhibir para ser readmitido en territorio ecuatoriano.

c) La autorización de permanencia se concederá por el tiempo que se considere adecuado de acuerdo con las circunstancias políticas del país de origen del asilado.

d) Al desaparecer los hechos que justificaron la concesión del asilo salvo el caso de modificación de la categoría o calidad migratorias de acuerdo con la Ley y este Reglamento, deberá abandonar el país junto con los familiares que lo acompañen en la misma categoría, previa cancelación de sus documentos migratorios, dentro de los noventa días siguientes a la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cualquier solicitud de cambio de condición migratoria, se notificará previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En caso de violación de las condiciones de su admisión y de sus obligaciones de asilado o refugiado político, quedará sujeto a las acciones de exclusión o deportación de acuerdo con la Ley de Migración.

IX. El reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión de la visa correspondiente serán decididos exclusivamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas de las Convenciones Internacionales sobre la materia.

Art. 43.- La concesión de visa de no inmigrante para la categoría V del artículo doce de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. La inmigración podrá ser solicitada directamente por el extranjero o por el establecimiento oficial o particular con reconocimiento gubernamental que hubiere comprometido su aceptación.

II. Se demostrará que el estudiante recibirá de una institución de crédito nacional o extranjera, los



recursos necesarios para su subsistencia individual o familiar o que se ha constituido un depósito en un banco nacional o extranjero domiciliado en el país por la suma, al menos, de 1.000 dólares de los Estados Unidos de América por el año lectivo, depósito que permitirá al estudiante retirar fondos, en forma mensual, para su subsistencia.

Si el estudiante extranjero tuviere parientes cercanos, el depósito se incrementará en 500 dólares de los Estados Unidos de América por cada persona que vaya a permanecer bajo su dependencia.

Si el estudiante extranjero tuviere parientes cercanos ecuatorianos o inmigrantes que garanticen su subsistencia, no se requerirá tal depósito.

Se aplicarán, en lo que fuere pertinente, los convenios internacionales.

Nota: Regla II de este artículo reformada, y se suprime la Regla III, pasando a ser las reglas IV a IX reglas III a VIII. Dado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986.

Nota: Regla II de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2438, publicado en el Registro Oficial 503 de 13 de Enero del 2005.

III. Para la concesión de esta calidad y categoría de inmigración será necesario que el solicitante demuestre con documentos que el tiempo de duración de sus estudios es superior a seis meses dentro del lapso consecutivo de un año.

IV. Si se trata de un menor de dieciocho años de edad la solicitud deberá ser firmada por su representante legal.

V. En los casos de suspensión, terminación o reprobación de los estudios realizados por los extranjeros, el Director General de Extranjería, deberá cancelar su documentación migratoria y, salvo el cambio de calidad o categoría migratoria, será obligado a abandonar el país junto con sus familiares, si los hubiere.

VI. Los representantes de los establecimientos de educación pública o particular en los que reciban instrucción extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación y terminación de los cursos lectivos, deberán notificar a la Dirección General de Extranjería, los nombres, apellidos paterno y materno, nacionalidad, estudios que cursan y tiempo de duración, de todos los extranjeros que se hubieren matriculado o hubieren abandonado o terminado sus estudios o hubieren sido reprobados, según los casos.

VII. El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá la facultad de enviar delegados especiales ante dichos establecimientos educativos, para verificar el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las sanciones legales a que hubiere lugar según las normas de la Ley de Migración.

VIII. Los estudiantes no podrán desarrollar actividades lucrativas, con excepción de las relativas a la práctica profesional y de servicio social que correspondan a sus estudios.

IX. Las visas concedidas a las personas de que trata este artículo conservarán su vigencia por una o múltiples solicitudes de admisión y el tiempo autorizado de permanencia será hasta la iniciación del próximo año lectivo.

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986.

Art. 44. - La concesión de visa de no - inmigrante para la categoría VI del artículo doce de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Quien solicite el ingreso al país deberá justificar a satisfacción del funcionario del servicio exterior ecuatoriano, la necesidad temporal de utilizar los servicios del extranjero en la actividad que desarrolla o en entrenamiento industrial, así como la no concurrencia de personas ecuatorianas capacitadas al tiempo de la solicitud y en el lugar de trabajo, para el desempeño de tales funciones.

II. La inmigración deberá ser solicitada por el extranjero o por el interesado en su inmigración, persona natural o jurídica, con la exhibición del contrato de trabajo y la certificación expedida por la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos a que se refiere el Art. 548 del Código de



Trabajo o la presentación del nombramiento como representante legal o del poder como factor según el Art. 120 del Código de Comercio.

Privado, con la exhibición del contrato para trabajar en el Ecuador. (sic).

En el caso de que el extranjero fuere contratado con fines de entrenamiento industrial, se presentará el respectivo convenio.

III. Serán aplicadas a esta categoría las normas de los numerales II, IV, V y VI del artículo trigésimo tercero de este Reglamento, en lo que fuere pertinente.

IV. La visa conservará su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión y el tiempo autorizado de permanencia en cada admisión será el de duración del convenio o contrato.

Nota: Inciso segundo de la Regla II agregado y Regla IV reformada por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986.

Concordancias:

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 560

Art. 45.- La concesión de visa de no - inmigrante para la categoría VII del artículo doce de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. La inmigración deberá ser solicitada por el representante legal de la respectiva organización u orden establecida de conformidad con el Modus Vivendi entre el Ecuador y la Santa Sede y el Decreto Supremo No. 212 promulgado en Registro Oficial 547 de 23 de Julio de 1937.

II. Quien presente la solicitud deberá justificar la necesidad temporal de utilizar los servicios del extranjero en las actividades autorizadas de la organización a la que se integra, a satisfacción del funcionario del servicio exterior ecuatoriano.

III. Será necesario que el extranjero cuya inmigración se solicita pertenezca a la misma organización, orden o congregación en el país de origen o domicilio y en el Ecuador.

IV. Se aplicará la norma del numeral IV del artículo trigésimo tercero de este Reglamento, en lo que fuera pertinente.

V. La visa se concederá para una o múltiples solicitudes de admisión y su vigencia será por el tiempo solicitado, mayor de seis meses, pero no mayor de dos años.

En el caso de los misioneros que pertenezcan a las Misiones Católicas que tengan suscritos convenios con el Estado, las visas de permanencia en el País será concedidas hasta el término de su Misión.

VI. Para obtener una nueva visa en la misma categoría, además de cumplir con lo dispuesto en el Art. 58 de este Reglamento, la organización respectiva deberá presentar un informe de las actividades realizadas por el extranjero y de los objetivos que cumplirá en el período subsiguiente.

Nota: Inciso segundo del numeral V, agregado por Decreto Ejecutivo No. 4045, publicado en Registro Oficial Suplemento 1002 de 2 de Agosto de 1996.

Art. 46.- La concesión de visa de no inmigrante para la categoría VIII del artículo doce de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. La inmigración deberá ser solicitada por una persona jurídica o un organismo constituido o que opere legalmente en el Ecuador para desarrollar programas de intercambio cultural. Se tendrá en cuenta los convenios internacionales de intercambio cultural.

Nota: Regla I de este artículo reformada por Decreto Ejecutivo 2432 de 28 de Noviembre de 1986.



- II. Se aplicará la norma del numeral IV del artículo trigésimo tercero de este Reglamento.
- III. Los extranjeros admitidos bajo esta categoría no podrán desempeñar actividades lucrativas durante su permanencia.
- IV. La visa se concederá para una o múltiples solicitudes de admisión y su vigencia será de un año.

Art. 47.- La concesión de visa para no inmigrante en la categoría IX del artículo doce de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. El funcionario del servicio exterior ecuatoriano, de acuerdo con la declaración del solicitante, determinará las actividades que podrá el extranjero ejercer durante su permanencia, dentro de las señaladas en el numeral IX del Art. 12 de la Ley.
- II. La concesión de esta visa estará supeditada, en cuanto al ejercicio de actividades lucrativas en los campos del deporte o del ejercicio de actividades artísticas, a las regulaciones y medidas de protección de las fuentes de trabajo de los ciudadanos ecuatorianos que se hubieren dictado mediante Decreto Ejecutivo o Ley.
- III. La visación para artistas o deportistas podrá ser concedida únicamente cuando sea solicitada por un empresario o institución de reconocida solvencia, luego de la exhibición del correspondiente contrato.

En este caso será aplicable la norma del numeral IV del artículo trigésimo tercero de este Reglamento.

- IV. Para la concesión de visas para fines de turismo, de salud, científicos o para la ejecución de actos de comercio que no impliquen la importación simultánea de bienes, será suficiente la declaración del interesado ante el funcionario del servicio exterior ecuatoriano.
- V. La visa conservará su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión y la autorización para permanecer en el país se concederá para el tiempo mayor de tres meses y menor de seis, que solicite el inmigrante en cada período de doce meses contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Extranjeros.

VI. (Nota: Esta regla suprimida por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Concordancias:

CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 560

Art. 48.- Los extranjeros no - inmigrantes comprendidos en las subcategorías de transeúntes de la categoría X del artículo doce de la Ley, no requerirán visación del funcionario del servicio exterior ecuatoriano para su admisión en el país y deberán sujetarse a las siguientes reglas:

- I. En ningún caso se autorizará el tránsito de extranjeros que carezcan de permiso de admisión al país donde se dirijan y de tránsito en los países limítrofes de la República comprendidos en su ruta.
- II. El tiempo de permanencia en el país para las personas comprendidas en las subcategorías 1 y 2 no podrá exceder de diez días consecutivos en cada admisión.
- III. El tiempo máximo de permanencia en el país para los extranjeros comprendidos en la subcategoría 3, será de tres meses en cada período de doce meses, contados a partir de la fecha de ingreso del extranjero, con excepción de los casos de reciprocidad y los contemplados por los acuerdos y convenios de visas. Se le autorizará a todo extranjero que ingrese al Ecuador en esta subcategoría la permanencia de tres meses, salvo que solicitare una autorización por un tiempo menor, o que hubiere ingresado anteriormente al país en igual subcategoría, en cuyo evento se la autorizará permanecer el tiempo que le faltare para completar los tres meses.
- IV. Los extranjeros admitidos en las condiciones de la subcategoría 3, se someterán a las normas pertinentes de los numerales II, III y IV del artículo cuadragésimo séptimo de este Reglamento.
- V. Las personas que demostraren estar comprendidas en la subcategoría 4, deberán solicitar, en los formularios emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al funcionario del servicio exterior

ecuatoriano que preste sus servicios en la jurisdicción de las poblaciones extranjeras colindantes con las fronteras ecuatorianas, la expedición gratuita de la cédula de tránsito fronteriza, cuya vigencia será indefinida y con validez para las poblaciones en ella limitadas.

VI. Las personas que demostraren estar comprendidas en la subcategoría 5, se acogerán a las normas establecidas en los acuerdos y convenios de carácter fronterizo suscritos por el Ecuador.

CAPITULO VI

Reglas para la Inscripción en el Registro de Extranjeros

Art. 49.- La inscripción del extranjero se realizará en los registros que mantiene a su cargo la Dirección General de Extranjería, a excepción de las visas 12-I, 12-II, 12-III y 12-IV, que se efectuará en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 50.- Para obtener su inscripción el extranjero, presentará ante la Dirección General de Extranjería los siguientes documentos:

1. Pasaporte vigente en el cual conste su visa y sello de admisión, y
2. Certificado de visación del funcionario del servicio exterior ecuatoriano.

Art. 51.- La Dirección General de Extranjería comprobará, de inmediato, de conformidad con el Art. 23 de este Reglamento, que el certificado de visación haya sido otorgado por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano autorizado para el efecto, y que el pasaporte corresponda al extranjero a cuyo favor se otorgó la visa, y procederá a la inscripción en el Registro de Extranjeros, dejando constancia de tal inscripción en el pasaporte.

Efectuada la inscripción de los extranjeros que hubieren sido admitidos en calidad de inmigrantes, la Dirección General de Extranjería les otorgará la autorización para obtener la cédula de identidad. Esta disposición se aplicará inclusive para los menores de edad que tengan la calidad migratoria de inmigrantes.

Si la documentación referida en el artículo anterior no reúne los requisitos señalados, se rechazará la inscripción y la admisión del extranjero al país quedará condicionado para que en plazo de quince días presente los documentos necesarios, pues, en caso contrario, será sometido a la acción de deportación.

Art. 52.- Los extranjeros legalmente inscritos, deberán notificar sobre cualquier hecho o circunstancia que modifique o contrarie las condiciones que en la visa se estableciere, adjuntando los documentos probatorios pertinentes, dentro del plazo de sesenta días de producido el cambio.

Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Art. 53.- Todos los jueces y tribunales penales estarán obligados a poner en conocimiento del Director General de Extranjería, la filiación de los extranjeros, sobre quienes se hubiere dictado auto de apertura del plenario, así como la resolución final que se dicte sobre el caso.

Art. 54.- Todos los funcionarios del Registro Civil que autoricen los cambios de estado civil relativos a extranjeros estarán obligados a notificar al Director General de Extranjería dichas modificaciones dentro de los treinta días siguientes a la respectiva inscripción.

Art. 55.- Todos los funcionarios y empleados estatales, provinciales o municipales, así como los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales de justicia de la República, los notarios y registradores, contadores públicos, agentes y corredores de comercio, empresarios, representantes de entidades descentralizadas, de cooperativas de colegios profesionales, de organizaciones sindicales y en general de toda agrupación económica, social o cultural, deberán exigir a los extranjeros que tramitan ante ellos asuntos de su competencia o que realicen gestiones para obtener



empleo o colocaciones lucrativas, que previamente les demuestren con la presentación de su pasaporte o cédula de identidad o ambos, su legal permanencia en el Ecuador y que la calidad y categoría migratorias que posean les permite realizar el acto o contrato que se proponen efectuar, en los casos en que tales actos o contratos dependan de la calidad migratoria del extranjero. Sin embargo, si la obtención de la visa dependiere de un acto que deba otorgarse ante notario o inscribirse en cualquier registro, primeramente se otorgará tal acto o se efectuará el registro.

Art. 56.- Toda persona que omitiere el cumplimiento de las obligaciones y deberes que se establecen en la Ley o Reglamento de Extranjería, quedará sujeta a la denuncia que para cada caso formule el Director General de Extranjería ante juez competente, con el procedimiento, efectos y sanciones que establece la Ley de Migración y su Reglamento.

CAPITULO VII

Reglas para la Modificación de la Calidad o Categoría Migratorias

Art. 57.- Sin perjuicio de las atribuciones del servicio exterior ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las visas de los no inmigrantes y la Dirección General de Extranjería, para evitar las de inmigrantes, podrán modificar, dentro del país, la calidad o categoría migratorias de los extranjeros admitidos al Ecuador, sujetándose a las siguientes reglas:

I. El interesado deberá solicitar el cambio de la calidad o categoría migratoria en los formularios emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, mientras el plazo de su permanencia autorizada este vigente.

II. A la solicitud acompañará los documentos que se requieran para justificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de la nueva calidad o categoría migratorias.

III. Al autorizarse el cambio, se cancelará la documentación migratoria anterior. Si la modificación hubiere sido acordada por la Dirección General de Extranjería, se rectificará de inmediato a la inscripción en el registro de extranjeros. Si la modificación hubiere sido aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la inscripción correspondiere a la Dirección General de Extranjería, según el Art. 23, ésta rectificará la inscripción el momento de la presentación del pasaporte y el certificado de visación por parte del extranjero, quien deberá hacerlo en el plazo de 30 días desde la fecha en que se le hubiere otorgado la nueva calidad o categoría migratoria.

IV. Deberán satisfacerse los derechos consulares e impuestos fiscales establecidos para la nueva calidad y categoría migratorias.

V. Los extranjeros no inmigrantes comprendidos en las categorías I, II y III del Art. 12 de la Ley que desearan ejercer o ejercieren actividades lucrativas dentro de la misma categoría o en calidad de inmigrantes quedarán excluidos de las inmunidades, privilegios y franquicias que otorga la Ley, por tales actividades.

VI. Si se rechazare la solicitud para el cambio de calidad o categoría migratorias el no inmigrante solo podrá permanecer en el país durante el lapso complementario al autorizado en su admisión, que no podrá ser menor de 10 días a partir de la fecha de notificación de la resolución.

Nota: Nuevo texto dado por Decreto Ejecutivo No. 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

Nota: Acápito I sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1244, publicado en Registro Oficial 759 de 2 de Agosto del 2012 .

Art. 58.- Salvo lo previsto en el numeral X del Art. 12 a la Ley y el Art. 48 de este Reglamento y con excepción de la visa en la categoría IX del Art. 12 de la Ley que se hubiere otorgado por seis meses en un período de un año y a cuyo amparo el extranjero hubiere permanecido en el país tal período de seis meses, podrá solicitarse nueva visa de no - inmigrante, en la misma categoría migratoria, dentro de los treinta días anteriores a la expiración del plazo de admisión, para lo cual se presentará una certificación que acredite el mantenimiento de las condiciones que sirvieron de antecedente para el otorgamiento de la visa, conferida por quien tuvo el interés para la inmigración y, en el caso de la visa en la categoría VI del Art. 12, una certificación en igual sentido de la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos, si el extranjero tuviere relación de dependencia laboral.



Nota: Artículo reformado por Decreto Ejecutivo 2432, publicado en el Registro Oficial 574 de 28 de Noviembre de 1986 .

CAPITULO VIII Disposiciones Generales

Art. 59. - La calificación y otorgamiento de las visas de no inmigrante categorías 12-I, 12-II, 12-III y 12-IV, son de competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 60. - Para efectos de la Ley de Extranjería y de este Reglamento, salvo disposición de dicha Ley en contrario, se entenderá por familiares cercanos al cónyuge y a los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

Art. 61. - En ningún caso autoridad alguna retendrá o retirará el pasaporte de un extranjero para trámite alguno. En aquellos casos en que fuere necesario, se presentará para el procedimiento pertinente, una copia fotostática del pasaporte, la misma que será comparada con su original por el funcionario que la recibiere.

Aprobado el cambio de calidad migratoria o cualquier otro acto administrativo del cual deba quedar constancia en el pasaporte, concurrirá el extranjero o su representante con el correspondiente pasaporte, para que éste sea sellado en su presencia y devuelto de inmediato.

Nota: Artículo reformado por Numeral 38. de Decreto Ejecutivo No. 1665, publicado en Registro Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004 .

Art. 62. - Cuando se llegare a comprobar que un extranjero portador de visa debidamente inscrita en el Registro de Extranjeros, está incurso en una de las causales de exclusión determinadas en el Capítulo IV de la Ley de Migración, el Director General de Extranjería de conformidad con el Art. 23 de la Ley de Migración le comunicará al Intendente General de Policía para efectos de la acción de deportación.

Art. 63. - El Consejo Consultivo de Política Migratoria, en aplicación a las normas establecidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control sobre el manejo de tesorería, podrá utilizar los saldos en efectivo existentes en la cuenta de depósitos de garantía. Cumplidos los requisitos establecidos en este Reglamento tales depósitos serán devueltos a los inmigrantes.

Art. 64. - El monto de los depósitos de garantía de los inversionistas extranjeros que no han justificado su inversión dentro del plazo previsto en este Reglamento, serán utilizados por el Consejo Consultivo de Política Migratoria, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.

Los depósitos que no hubieren sido retirados por los inmigrantes que hubieren demostrado su inversión, dentro de los plazos de prescripción pasarán a constituir patrimonio del Estado y, en consecuencia podrán ser también utilizados por el Consejo Consultivo de Política Migratoria.

Nota: Artículo reformado por Numeral 38. de Decreto Ejecutivo No. 1665, publicado en Registro Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004 .

CAPITULO IX Disposición Transitoria

Art. 65. - La Dirección General de Extranjería establecerá dentro de diez días de la vigencia de este Decreto los mecanismos operativos para que se cumplan en los puertos de entrada al Ecuador las disposiciones del inciso 4o. del Art. 23 con respecto a las visas de no - inmigrante en la categoría 12 - IX y dentro de los treinta días de vigencia de este Decreto en las categorías 12-V, 12-VI, 12-VII y



No imprimir este documento a menos que sea absolutamente necesario



12-VIII.